

Voces desde los territorios fronterizos 2020

Drogas ilícitas, desarrollo
y construcción de paz



drugs & (dis)order 

Sinopsis

Voces desde los territorios fronterizos 2020 es la publicación emblemática de Drogas y (des)orden, un proyecto de cuatro años de duración que busca generar nueva evidencia sobre cómo transformar las economías de las drogas ilícitas en economías de paz. Su objetivo es dilucidar las experiencias y perspectivas que hemos escuchado en nuestro trabajo de campo a lo largo de siete regiones fronterizas afectadas por las drogas y el conflicto en Afganistán, Colombia y Myanmar. Está destinado a un público amplio de investigadores, profesionales y tomadores de decisión en los sectores de la política de drogas, desarrollo y construcción de paz. Los testimonios de este informe aportan ideas valiosas sobre cómo las drogas ilícitas –y las políticas de drogas– afectan las dinámicas de violencia, paz, pobreza, desarrollo, inseguridad y resiliencia.

Agradecimientos

Voces desde los territorios fronterizos 2020 se ha elaborado por miembros del equipo del proyecto Drogas y (des)orden, liderado por Jonathan Goodhand, Patrick Meehan, Frances Thomson, Maziyar Ghiabi and Louise Ball (SOAS University of London). El capítulo sobre Colombia fue elaborado por Francisco Gutiérrez, Camilo Acero, Diana Machuca, Sebastián Cristancho, Luis Castillo (Universidad Nacional de Colombia) y Frances Thomson; el capítulo sobre Afganistán fue elaborado por Jonathan Goodhand y Jasmine Bhatia (SOAS University of London); y el capítulo sobre Myanmar fue elaborado por Patrick Meehan, Mandy Sadan (Oxford's School of Global and Area Studies, University of Oxford), Dan Seng Lawn (Kachinland Research Centre) y Sai All (Shan Herald Agency for News). Este informe recibió grandes contribuciones de sus revisores, incluidos miembros del equipo de Drogas y (des)orden y su grupo de asesores internacionales: Eric Gutiérrez (Christian Aid), Jenny Pearce (London School of Economics), Marc Shaw (Global Initiative Against Transnational Organized Crime), Adam Pain (Swedish University of Agricultural Science). Este informe fue editado por Becky Owens, y diseñado por Lucy Peers. Traducido por David Alfonso Restrepo Diaz.



UK Research
and Innovation

Drogas y (des)orden: construyendo economías sostenibles en tiempos de paz tras las secuelas de la guerra) es un proyecto de investigación de cuatro años de duración que genera nueva evidencia sobre cómo transformar las economías de las drogas ilícitas en economías de paz, en Afganistán, Colombia y Myanmar. Es un trabajo realizado por un consorcio internacional de organizaciones reconocidas globalmente por su experticia sin par en los temas de las drogas, el conflicto, la salud y el desarrollo. Liderado por SOAS University of London, los aliados en el proyecto son: Afghanistan Research and Evaluation Unit (AREU), Alcis, Christian Aid, Kachinland Research Centre (KRC), London School of Hygiene and Tropical Medicine (LSHTM), Organization for Sustainable Development and Research (OSDR), Oxford's School of Global and Area Studies (OSGA), PositiveNegatives, Shan Herald Agency for News (SHAN), la Universidad de los Andes y la Universidad Nacional de Colombia.

Esta investigación fue financiada por UK Research and Innovation (Investigación e Innovación del Reino Unido), una parte del Global Challenges Research Fund (GCRF) (Fondo para la Investigación sobre Desafíos Globales). Los puntos de vista presentados en este documento son de las y los autores y no representan necesariamente las opiniones de GCRF, el gobierno del Reino Unido u organizaciones asociadas.

Imágenes de la portada desde la parte superior: 1. Transporte de mercancías en tránsito a Pakistán en mulas, Afganistán. Foto por OSD; 2. Granja de amapolas en el municipio de Chipwi, en el norte del estado de Kachin, Myanmar. Foto por KRC; 3. Raspando la hoja de coca, Puerto Asís, Colombia. Foto por Frances Thomson/ Universidad Nacional de Colombia. Imagen de contraportada: Campos de amapola a lo largo de la frontera con China, en el norte del estado de Kachin, Myanmar. Foto por KRC.

Contenido

Acerca de Drogas y (des)orden	4
Introducción	5
Una mirada más cercana a los territorios fronterizos	8
Un estancamiento en la política pública	10
Un camino por seguir	12
Acerca de Voces desde los territorios fronterizos 2020	15
Colombia	16
Sobre los territorios fronterizos	17
Mensajes principales	22
Afganistán	31
Sobre los territorios fronterizos	32
Mensajes principales	37
Myanmar	44
Sobre los territorios fronterizos	45
Mensajes principales	50
Reflexiones	59
Transiciones de la guerra a la paz	60
Desarrollo de los territorios fronterizos	62
Las drogas y la vida cotidiana	63
Implicaciones de política pública	66
Notas	68

Acerca de Drogas y (des)orden

Drogas y (des)orden es un proyecto de investigación de cuatro años de duración que busca dar respuesta a esta pregunta: “¿Cómo podemos convertir las economías de guerra en economías de paz”, estudiando nueve territorios fronterizos afectados por las drogas y la guerra en Afganistán, Colombia y Myanmar”.

Una perspectiva desde los territorios fronterizos

Este proyecto se centra en las drogas ilícitas por ser una de las principales mercancías que alimentan las economías de guerra. Se ahonda en las regiones fronterizas porque estas se han convertido en núcleos importantes de las economías transnacionales de las drogas y con frecuencia son puntos conflictivos, incluso después de la firma de los acuerdos nacionales de paz. Por tanto, se cree que los territorios fronterizos son fundamentales para convertir las economías de guerra basadas en las drogas en economías sostenibles en tiempos de paz.

Generar una nueva base de evidencia

Cada vez se hace más clara la necesidad de volver las políticas de drogas más favorables a las personas vulnerables y mejor articuladas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Sin embargo, la evidencia disponible para sustentar tales reformas es dispersa, politizada y controvertida. Drogas y (des)orden busca generar datos empíricos robustos que contribuyan a generar una nueva base de evidencia.

Tomar en cuenta la economía política de la formulación de políticas públicas

No se asume que el simple hecho de suministrar mejor evidencia bastará para transformar las políticas. Esta investigación también hace un escrutinio de los procesos de formulación de política pública para entender las agendas, intereses y pugnas de poder que inciden en las dinámicas y resultados de las políticas de drogas, desarrollo y construcción de paz.

Un abordaje interdisciplinario

Esta investigación reúne ideas desde la antropología, la sociología, la geografía, la economía política, la ciencia política, la historia y la salud pública para elaborar un panorama integral sobre la manera en que las economías de drogas moldean su contexto y son moldeadas por este. Se incorporan métodos de investigación innovadores y herramientas analíticas como las imágenes de los Sistemas de Información Geográfica (SIG) para mapear los cambios físicos en las zonas fronterizas, los cuales complementan las encuestas y entrevistas tanto etnográficas como de historias de vida.

Construir una red global de investigadores

Drugs & (dis)order es liderado por SOAS University of London, con un equipo conformado por once instituciones aliadas en Afganistán, Colombia, Myanmar y el Reino Unido. Se busca construir una red global de investigadores e instituciones para continuar este trabajo luego de concluir este proyecto.

www.drugs-and-disorder.org

Introducción





Cosecha de coca,
Puerto Asís,
Colombia. Foto por
Frances Thomson/
Universidad Nacional
de Colombia.

Cada vez es más fuerte el clamor por una mejor integración de las políticas de drogas, desarrollo y construcción de paz, que permita priorizar a las poblaciones más vulnerables y alinear la política de drogas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Pero para lograrlo queda un trayecto largo por recorrer¹.

El tema de las drogas aún se percibe en clave de criminalidad y seguridad, por lo cual las agencias de desarrollo y construcción de paz se han mostrado reacias a involucrarse, dado el “tabú” en el cual siguen inmersas las drogas². Si bien los participantes en las economías ilícitas son los de mayor relevancia en estos temas, su representación en las discusiones de la política pública sigue siendo escasa o nula.

Voces desde los territorios fronterizos 2020 busca sacar a la luz algunas de estas voces a partir de este trabajo de campo en siete regiones de frontera en Afganistán, Colombia y Myanmar. Sumados, estos tres países abarcan más del 80 % de la producción ilícita de opio y alrededor de 70 % de la producción mundial de cocaína³. Cada país ha soportado muchos años de conflictos violentos y está inmerso en algún tipo de proceso de paz.

Los testimonios en este informe ofrecen información valiosa sobre cómo las drogas ilícitas, y las políticas de drogas, inciden en las dinámicas de la violencia y la paz, la pobreza y el desarrollo, y la inseguridad

y la resiliencia. Al escuchar estas voces marginadas, se cree que los especialistas en políticas de drogas y desarrollo pueden sintonizarse mejor, con la manera en que la economía de las drogas ilícitas genera impactos en los esfuerzos por disminuir la pobreza, brindar acceso a los servicios públicos, e impulsar el desarrollo económico, como también sobre las estrategias para combatir la desigualdad e inseguridad, y reducir la violencia y el daño.

Los testimonios en este informe ofrecen información valiosa sobre cómo las drogas ilícitas, y las políticas de drogas, inciden en las dinámicas de la violencia y la paz, la pobreza y el desarrollo, y la inseguridad y la resiliencia.

Voces desde los territorios fronterizos 2020 no pretende hacer recomendaciones de política pública, ni tampoco, en esta etapa del proyecto, identificar “lo que funciona”. Más bien, el objetivo

es mostrar cómo estas voces y estos hallazgos revelan ideas importantes e implicaciones de política pública para quienes buscan comprender y apoyar más robustamente los procesos de paz, de disminución de la pobreza y de desarrollo en contextos de fragilidad y afectación por las drogas.

En la introducción, se ahonda en lo que puede percibirse como el actual “estancamiento en la política pública” por la encrucijada de la lucha antinarcóticos, la construcción de paz y las estrategias de desarrollo. Luego se esbozan algunos puntos de partida para superar este estancamiento.

Los capítulos I, II y III presentan los tres mensajes principales de la investigación con las comunidades fronterizas de cada uno de los tres países estudiados. Al combinarlas, las voces encapsuladas en estos mensajes principales permiten explorar las intersecciones entre las drogas, los modos de vida y las experiencias de violencia a lo largo de la cadena de valor de las drogas: desde su producción en Colombia, su comercialización y transporte en Afganistán, hasta su consumo en Myanmar.

En **Colombia**, los testimonios de los cocaleros y recolectores en tres regiones fronterizas dejan un mensaje claro:

- 1. Los cocaleros son campesinos y no narcotraficantes ricos**, como a menudo se les presenta en los discursos nacionales e internacionales para justificar la militarización de la estrategia antinarcóticos.
- 2. La situación económica de muchos habitantes de la frontera colombiana ha mejorado por la coca, pero a un alto precio**: los campesinos cocaleros se enfrentan con una disyuntiva compleja entre, por un lado, aumentar modestamente sus ingresos para invertir en educación, atención médica y adquisición de tierra, y, por el otro, vivir la profundización de la violencia e inseguridad que trae consigo la coca.
- 3. Si bien las comunidades productoras de coca colombianas sufren de exclusión social, económica y política, sus integrantes son ciudadanos organizados y activos**. Las personas que dan testimonio en este informe hablan con orgullo de haber construido sus propias escuelas y carreteras, y de organizar protestas o huelgas.

En **Afganistán**, los testimonios muestran que:

- 1. Las redes de comercio ilícito son fundamentales para los ingresos y la supervivencia en los territorios fronterizos**. Simultáneamente, las redes lícitas e ilícitas, íntimamente conectadas y los comerciantes y transportadores, a menudo tranzan con múltiples mercancías tanto lícitas como ilícitas.

- 2. Las redes y rutas legales e ilegales son altamente adaptables, y responden a los cambios en las dinámicas del conflicto y a los métodos de regulación**. Generar mayores restricciones en la regulación y la gestión aduanera tiene un impacto sobre los mercados y las relaciones comerciales, lo cual afecta negativamente el bienestar económico y social de las comunidades fronterizas.

- 3. El aumento de flujos comerciales ha contribuido al auge de los pueblos limítrofes, lo cual crea oportunidades económicas y mayor inseguridad y desigualdad en estas comunidades**. Esto, de nuevo, demuestra cómo las economías ilícitas generan costos y disyuntivas para los individuos, los hogares y las comunidades.

En **Myanmar**, los testimonios revelan que:

- 1. El aumento del daño relacionado con el consumo de drogas ha permeado la experiencia del cese del fuego y del desarrollo económico de las poblaciones fronterizas en los estados de Kachín y Shan**. Las formas emergentes de gobernanza fronteriza y la expansión de las industrias extractivas y de las plantaciones agrícolas han contribuido a arraigar, más que a desplazar, la economía de las drogas ilícitas.
- 2. De la producción de opio depende el sustento de muchos hogares pobres, pero los patrones cambiantes del uso de drogas crean nuevas formas de vulnerabilidad y pobreza**. Esto resalta la complejidad de las disyuntivas que subyacen a los problemas de las drogas y la necesidad de dar respuestas matizadas.
- 3. Los jóvenes se han vuelto particularmente vulnerables a los daños relacionados con las drogas en las fronteras de Myanmar**. Estos hallazgos operan en contra de suponer que la reducción del conflicto armado, el aumento de la presencia del Estado y la integración económica de las regiones marginadas generan automáticamente una reducción de la economía de las drogas ilícitas en estas regiones.

En el capítulo IV se analizan transversalmente estos tres casos para reflexionar sobre las implicaciones más amplias para la política pública en los sectores de la política de drogas, el desarrollo y la construcción de paz.

Una mirada más cercana a los territorios fronterizos

Voces desde los territorios fronterizos presenta voces y perspectivas de siete regiones fronterizas en Colombia, Afganistán y Myanmar. Juntos, estos son tres de los mayores productores de drogas ilícitas del mundo. Cada país ha soportado muchos años de conflictos violentos y está inmerso en algún tipo de proceso de paz.



En Colombia estudiamos la **producción**, hablando con los cultivadores y recolectores de coca.

Desde su producción, comercialización y transporte, hasta su consumo

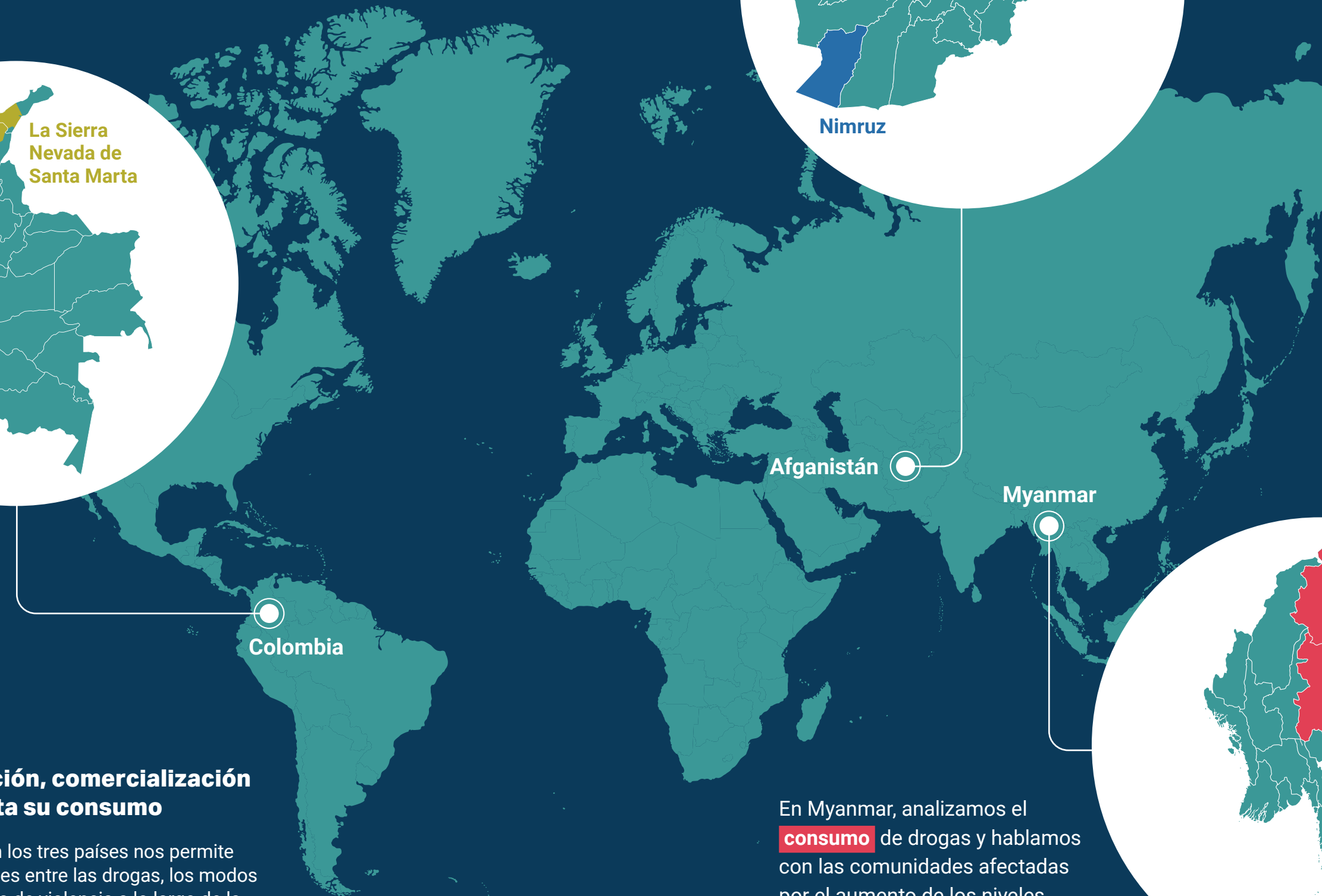
Nuestra investigación en los tres países nos permite explorar las intersecciones entre las drogas, los modos de vida y las experiencias de violencia a lo largo de la cadena de valor de las drogas.



En Afganistán, investigamos el **tráfico** y hablamos con los comerciantes y transportistas de opio.



En Myanmar, analizamos el **consumo** de drogas y hablamos con las comunidades afectadas por el aumento de los niveles de consumo de drogas.



Un estancamiento en la política pública

La guerra global contra las drogas no ha alcanzado su meta declarada de construir un “mundo libre de drogas”. De hecho, se ha dado un aumento mundial en la producción y en el consumo de drogas ilícitas⁴. Asimismo, se han documentado ampliamente los impactos adversos de la militarización de las políticas anti-narcóticos y de los programas enfocados en la reducción de la oferta en el Sur global⁵.

Es difícil defender, creíblemente, el argumento de que la guerra contra las drogas ha tenido éxito. Ahora bien, algunos comentaristas observan que esta “guerra” persigue objetivos poco relacionados con las drogas, como ganar elecciones, estigmatizar comunidades marginadas, acceder a recursos o fortalecer a grupos dominantes⁶. Cada vez es más claro que la guerra contra las drogas es, de hecho, una guerra contra la gente y, en particular, contra las personas más marginadas⁷.

Ante el creciente reconocimiento de estas falencias y costos sociales, ha aumentado el clamor por políticas de drogas más humanas, alineadas con iniciativas integrales de promoción del bienestar, como los ODS.

Existe una creciente aceptación de la necesidad de integrar el tema de las drogas en las problemáticas del desarrollo y la construcción de paz⁸, y entenderlas como un fenómeno inherente a la vida humana, en lugar de emplear discursos moralizantes asociados a la seguridad o a la criminalidad.

Sin embargo, hay grandes obstáculos para concretar políticas de drogas más integrales, que tomen en cuenta las dinámicas de los conflictos y se orienten hacia la promoción del desarrollo. Primero, la política de drogas y el desarrollo se guían por metas, métricas y estrategias de política pública diferentes, y a veces opuestas.

En el control de drogas, estas siguen tratándose principalmente como un problema de oferta, bajo la jurisdicción de las agencias de fiscalización. Al mismo tiempo, muchas agencias de desarrollo y construcción de paz son reacias a involucrarse directamente en el tema de las drogas⁹.

La competencia entre las agencias, en sus misiones y fuentes de financiación, contribuye a generar silos de conocimiento y políticas públicas descoordinadas. Esta división se amplía por la divergencia en las culturas organizacionales y las metodologías de trabajo dispares que caracterizan a las agencias de drogas y de desarrollo. En el mundo del control de drogas se prefiere la actuación por medio de alianzas interestatales y se favorece una ejecución centralizada

y jerárquica. En cambio, en el mundo del desarrollo, se prefiere, al menos retóricamente, la participación local y los abordajes de “abajo arriba”, en los que, junto al Estado, se suman la sociedad civil y el sector privado.

Cada vez es más claro que la guerra contra las drogas es, de hecho, una guerra contra la gente y, en particular, contra las personas más marginadas.

En el terreno, los países afectados por las economías ilícitas y en difícil tránsito hacia la paz, a menudo, viven la desconexión profunda entre las agencias contra drogas y las que se enfocan en el desarrollo y la construcción de paz (o, también, dicho sea de paso, la seguridad y el bienestar).

Si bien estas categorías y misiones contienen un valor semántico para las mismas agencias, carecen de total significado para las comunidades y los funcionarios locales, quienes hacen todo lo posible por lidiar en sus territorios con los desafíos de la violencia, la economía ilícita, la pobreza crónica y el bienestar comunitario.

Segundo, existe un gran vacío en la comprensión de cómo reconciliar en la práctica las políticas de drogas, construcción de paz y desarrollo. No hay evidencia sistemática de lo que “sí funciona”, aunque haya gran evidencia de lo que no funciona, al menos en lo que atañe a la guerra contra las drogas.

Pero no se trata solamente de romper los silos de conocimiento y superar la desconexión entre las agencias de lucha contra las drogas, construcción de paz y desarrollo. Se requiere, también, formular “preguntas difíciles” sobre el impacto de las drogas y de las políticas antinarcóticos en los procesos de desarrollo y la transición de la guerra a la paz. Al mismo tiempo, se requiere confrontar las disyuntivas entre las metas de la política de drogas, la reducción de la pobreza y la disminución de la violencia armada a gran escala.

En el terreno, los países afectados por las economías ilícitas y en difícil tránsito hacia la paz, a menudo, viven la desconexión profunda entre las agencias contra drogas y las que se enfocan en el desarrollo y la construcción de paz (o, también, dicho sea de paso, la seguridad y el bienestar).

De muchas formas, pueden evidenciarse las tensiones y disyuntivas entre la política antinarcóticos convencional y el clamor por una política que tome en

cuenta las dinámicas del conflicto, y se oriente hacia la promoción del desarrollo. Por ejemplo, la criminalización de los cultivadores de coca y amapola riñe con el principio de participación, proclamado por los programas de desarrollo alternativo (DA) para estos actores que participan en la producción ilícita.

La búsqueda de resultados rápidos, basados en el número de hectáreas erradicadas, socava los esfuerzos de largo aliento que se requieren a la hora de construir modos de vida alternativos. Una política antinarcoóticos ligada a los objetivos contrainsurgentes puede terminar perjudicando la legitimidad del Estado en los territorios fronterizos y acabar con el sustento de los cultivadores.

Más aún, llevar a cabo operativos contra algún “capo” particular, a veces, desestructura los acuerdos políticos y provoca mayor inseguridad, por detonar nuevas disputas o fraccionar organizaciones y actividades delictivas previamente estables, que de repente caen en el caos de la competencia por el control de los mercados ilícitos.

La investigación en Afganistán y Myanmar evidencia que los acuerdos políticos informales pueden ser de gran importancia para estabilizar los conflictos y construir Estado en zonas donde hay una presencia

duradera de las economías ilícitas de las drogas y el gobierno central busca gobernar a través de élites regionales potencialmente rebeldes¹⁰. Sin embargo, estos acuerdos pueden chocar con los objetivos de control de drogas.

La búsqueda de resultados rápidos, basados en el número de hectáreas erradicadas, socava los esfuerzos de largo aliento que se requieren a la hora de construir modos de vida alternativos.

Estos ejemplos muestran que la relación entre la lucha antinarcoóticos, el desarrollo enfocado en los más vulnerables, los objetivos de paz y de construcción de Estado no es unidireccional ni necesariamente complementaria¹¹.

Este informe no pretende presentar evidencia sistemática de cómo reconciliar estas tensiones. No obstante, sí ofrece algunas pistas para guiar a los tomadores de decisiones y a los profesionales sobre los tipos de problemas y abordajes que podrían considerarse a la hora de enfrentar estas disyuntivas, como también comprender más claramente la distribución desigual de los costos y beneficios de las intervenciones.



El camino a Muse, Estado de Shan, Myanmar. Foto por SHAN.

Un camino por seguir

De cara al estancamiento en la política pública antes descrito, se requieren nuevos enfoques para comprender y gestionar mejor la economía de las drogas ilícitas, especialmente en medio de las dinámicas de conflicto armado y de construcción de paz. Aquí se traza un posible camino por seguir, y se proporciona una serie de puntos de partida para el proyecto Drogas y (des)orden, con el objetivo de abordar e intentar superar este estancamiento.

Involucramiento de las voces marginadas

El campo de las drogas es objeto de narrativas múltiples y controvertidas. Pero algunas narrativas, principalmente las de los grupos más poderosos asociados con las élites nacionales y los donantes internacionales, tienden a dominar y ahogar otras perspectivas y voces más “marginadas”.

En todo el Sur global, los participantes en las economías ilícitas de las drogas (productores, transportadores o consumidores) suelen tener poca o nula representación en los debates internacionales y nacionales acerca de las políticas de drogas, desarrollo y construcción de paz. Sin embargo, estas personas son las más afectadas por la guerra global contra las drogas.

Las políticas que busquen enfrentar las drogas, apoyar el desarrollo y construir la paz solo podrán hacerlo si se sintonizan con la forma en que las drogas inciden en los modos de vida y en las estructuras de poder de las regiones fronterizas, y si comprenden la distribución desigual de los riesgos y las oportunidades para los participantes de estas economías ilícitas.

Por tanto, se cree que es necesario escuchar y aprender de las voces y experiencias de los individuos y las comunidades que viven en las regiones fronterizas afectadas por las drogas, de una manera mucho más seria, sostenida y profunda.

Una mirada a los territorios fronterizos

Por lo general, las economías de las drogas ilícitas prosperan en las zonas fronterizas. En estas regiones transnacionales, confluyen las drogas y los conflictos armados, y la legitimidad del estado tiende a permanecer fuertemente en disputa. Por eso, estos territorios se vuelven políticamente sensibles y se ven como un problema de orden público por las élites nacionales.

Se critica, pues, la tendencia en la política pública de ver a los territorios fronterizos como zonas marginales, desconectadas y carentes de gobierno, que deben pacificarse, incorporarse y desarrollarse. Esta perspectiva, centrada en el Estado, trata a los territorios

fronterizos como si fueran receptores pasivos de las políticas e iniciativas estatales, y hace caso omiso del papel que desempeña la periferia en la configuración del poder central. De hecho, los territorios fronterizos distan mucho de ser zonas de atraso y desconexión, y son más bien lugares donde se destaca el ingenio, la innovación y la transformación.

El proyecto Drogas y (des)orden considera a los territorios fronterizos lugares estratégicos para comprender los procesos que conducen a la formación del Estado y al desarrollo. Este abordaje explora la manera en que estos territorios pueden desempeñar un papel preponderante en la estructuración de los centros nacionales y globales de poder.

El objetivo es mostrar cómo la dinámica de los territorios fronterizos, incluida la producción de drogas ilícitas, no es tanto el resultado de su pobre integración política y económica, sino el producto de la manera en que estos procesos integradores se imponen, resisten y se negocian por múltiples grupos de actores, intereses y relaciones que operan a escala local, nacional, transfronteriza y global.

Desafío a la excepcionalidad de las drogas

Las agencias de lucha antinarcóticos suelen tratar a las drogas de uso ilícito como si fueran excepcionales. Este “fetichismo” con las drogas les confiere atributos inherentes que parecieran engendrar automáticamente criminalidad, violencia y fragilidad estatal.

El fetichismo que rodea a las drogas también se refleja en la tendencia de analizar a los territorios productores solo a través del filtro de las drogas. Esto lleva a una fijación con las métricas de drogas y a que se pasen por alto las dinámicas socioeconómicas y políticas generales, en las que el tráfico de estas sustancias es solamente una parte.

En términos de métodos de investigación, esto ha llevado a formular preguntas estrecha y directamente ligadas a las drogas, en lugar de explorar los modos de vida locales, las estructuras de poder y la interacción que las drogas tienen con estos fenómenos.

El fetichismo que rodea a las drogas también se refleja en la tendencia de analizar a los territorios productores solo a través del filtro de las drogas.

En términos analíticos, esto ha significado que los motivos que llevan a la participación de los individuos en la economía de las drogas se reduzcan a un ánimo



Plantación de arroz en el municipio de Tangyan, norte del estado de Shan, Myanmar. Foto por SHAN.

de lucro simplista. Mientras tanto, con frecuencia, se le atribuye directamente a la política antidrogas muchos de los cambios en las economías de las drogas (como las variaciones en los niveles de producción), los cuales pueden más bien obedecer a transformaciones políticas y económicas más amplias¹².

El proyecto Drogas y (des)orden busca desafiar este fetichismo y la idea de una relación fija entre las drogas, el conflicto armado y la fragilidad del Estado. Por ejemplo, se pregunta: ¿qué hace que las economías ilícitas de las drogas sean violentas (o no)? También se cuestiona el supuesto de que la erradicación de las drogas vaya necesariamente a finalizar la violencia en los territorios fronterizos que se estudian.

Repensar la relación entre las drogas, el desarrollo y la violencia

El fetichismo de las drogas lleva a pensar que las economías de las drogas operan fuera de los procesos convencionales del desarrollo. Usualmente, estos se definen en clave de la construcción del Estado, del crecimiento económico, de la disminución de la pobreza y de la reducción en los niveles de violencia armada.

Concebir a las drogas como un proceso residual o destructor de los procesos de desarrollo ha fomentado un conjunto particular de narrativas políticas. Se supone que, con una mayor presencia estatal y un creciente desarrollo económico, como también la posterior integración de los territorios productores en las estructuras políticas nacionales y los mercados globales, se logrará automáticamente el desmantelamiento de las economías ilícitas de las drogas y se impulsará la transición a la paz.

El proyecto Drogas y (des)orden reta estos supuestos. Con base en una creciente bibliografía investigativa, demuestra cómo la producción de drogas se vincula tanto a los periodos de expansión como de colapso del Estado; promueve la estabilización del conflicto armado y la financiación de economías de guerra; genera bienestar y crecimiento económico, resultado de la marginalización económica¹³.

Al integrar las investigaciones sobre las drogas, el desarrollo y la transición a la paz, se busca profundizar en la comprensión de cómo las economías de drogas ilícitas moldean —y son moldeadas por— grandes

procesos de transformación política y económica, suponiendo que estos procesos algún día las lleguen a desplazar.

Reconocer dilemas y disyuntivas

Todo nuevo enfoque debe primero reconocer que los tomadores de decisiones y los individuos en ambientes afectados por la economía de las drogas ilícitas se enfrentan con disyuntivas difíciles.

Los hogares se topan con estas disyuntivas a la hora de decidir si participan o no en las economías ilícitas. Como se describe en este informe, las comunidades productoras de coca en Colombia han logrado sustantivos avances socioeconómicos, pero a costa de soportar una violencia arraigada. En Myanmar, el cultivo de opio ha sido, durante mucho tiempo, un componente esencial para el sostenimiento de las comunidades más pobres del país. Sin embargo, el aumento del consumo problemático de drogas está generando, ahora, nuevos desafíos para las familias y las comunidades.

Los gobiernos también enfrentan dilemas complejos al elegir entre los objetivos frecuentemente contradictorios de la lucha contra el narcotráfico, el desarrollo en favor de los más vulnerables, la construcción de paz y la construcción del Estado. Por ejemplo, un gobierno puede buscar satisfacer la exigencia de “logros” tangibles y cortoplacistas en

la lucha antinarcóticos, pero al hacerlo perturba las economías y estructuras de poder locales, o atiza la competencia entre las organizaciones armadas involucradas en el tráfico de drogas.

Por otro lado, los acuerdos informales que rodean el tráfico de drogas (como los de protección, impunidad o acceso a la economía ilícita) pueden dar paso al cese del fuego y saldar pactos políticos entre los gobiernos y sus detractores. A su vez, esto reduce el conflicto violento y facilita una presencia del Estado más fuerte en las áreas disputadas.

Todo nuevo enfoque debe primero reconocer que los tomadores de decisiones y los individuos en ambientes afectados por la economía de las drogas ilícitas se enfrentan con disyuntivas difíciles.

Por tanto, los discursos que ofrecen soluciones en los que todo es “gana-gana” tienden a ser falsos, deshonestos e incluso contraproducentes. La investigación seria y el diálogo honesto sobre la política pública deben partir de un reconocimiento de los dilemas y disyuntivas, en esta materia. También deben basarse en una comprensión del contexto que determina o influye en estas disyuntivas, y sus consecuencias en la distribución del poder.



Transporte de mercancías en tránsito a Pakistán en mulas, Afganistán. Foto por OSD.

Acerca de Voces desde los territorios fronterizos 2020

Voces desde los territorios fronterizos 2020 es uno de varios productos del proyecto Drogas y (des)orden, cuya finalidad es dilucidar las experiencias y perspectivas de las personas involucradas en las drogas ilícitas, en siete regiones fronterizas de Colombia, Afganistán y Myanmar.

esta investigación revela una cacofonía de voces a menudo discordantes, provenientes de fuentes variadas en cuanto a sus rasgos identitarios; actividades; ubicaciones, etcétera.

Está destinado a una amplia audiencia de investigadores, profesionales y formuladores de políticas públicas que trabajan en temas relacionados con las drogas, el desarrollo y la construcción de paz.

Claro está que las “voces” de los territorios fronterizos no son homogéneas ni armónicas. Más bien, esta investigación revela una cacofonía de voces a menudo discordantes, provenientes de fuentes variadas en cuanto a sus rasgos identitarios (edad, etnia, género, religión, etc.); actividades (lícitas e ilícitas, producción, consumo, tráfico, posición jerárquica o de clase); ubicaciones (capital provincial, distritos fronterizos, zonas marginadas, núcleos de tráfico), etcétera.

Esto, necesariamente, lleva a preguntarse sobre cuáles voces priorizar. La producción de este informe ha implicado la selección de una gama amplia y compleja de material. En términos más generales, la “producción” de “evidencia” es un proceso imperfecto y politizado, desde las decisiones en torno a qué “datos” recopilar hasta cómo analizar, redactar y compartirlos.

Vale la pena destacar la importancia de ser transparentes y abiertos sobre la naturaleza de este proceso. No se pretende ser totalmente imparcial, ni representar todas las voces. Esta investigación no captura las perspectivas y

experiencias de personas de todas las etnias, por ejemplo. Ha costado, especialmente en Afganistán, garantizar la igualdad de acceso a las voces de mujeres y hombres.

No obstante, se hizo un esfuerzo consciente de resaltar las narrativas de personas “comunes” como los coccaleros y recolectores, los transportadores y comerciantes transfronterizos, las personas que usan drogas y sus familiares, en lugar de centrarse en las élites políticas y económicas.

Al hacerlo, el objetivo es compartir ideas fundamentadas en lo local que permitan vislumbrar los tipos de “paz” y “desarrollo” que están proponiéndose o resistiéndose en la periferia del Estado en Afganistán, Colombia y Myanmar, y la manera en que las economías de las drogas ilícitas se inmiscuyen en la vida cotidiana de las personas.

Los equipos de investigación en cada país escogieron mensajes principales utilizando tres criterios claves: (1) los mensajes principales se extrajeron directamente de la investigación del proyecto Drogas y (des)orden. Esto abarcó cientos de entrevistas realizadas en 2018 y 2019; (2) estos mensajes se centran en los problemas recurrentes enfatizados por los informantes en los sitios de estudio de las regiones fronterizas; (3) estos problemas recurrentes ofrecen unos contenidos sorprendentes, contraintuitivos y / o relevantes para la política pública. Para cada país, se ofrecen mayores detalles sobre el proceso de selección de mensajes principales y los datos de donde se derivan.

Claro está que las “voces” de los territorios fronterizos no son homogéneas ni armónicas. Más bien, esta investigación revela una cacofonía de voces a menudo discordantes,

Se espera que este informe proporcione una representación precisa, honesta y novedosa de las luchas, adversidades y, en ocasiones, triunfos de los y las habitantes de las regiones fronterizas.

Colombia

“Donde vivo la economía de todo el tiempo ha sido la mata de coca. No hay ninguna mata que la reemplace.”

Cultivador de coca, Puerto Asís, octubre de 2018





A muchos pueblos solo se puede acceder en barco. Puerto Asís, Colombia. Foto por Frances Thomson / Universidad Nacional de Colombia.



Sobre los territorios fronterizos

Colombia es un país con gran diversidad regional, ambiental y étnica, con una población de aproximadamente 48 millones de personas¹⁴. Se ubica en el puesto 79 de 189 países en el índice de desarrollo humano (IDH) del Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo (PNUD)¹⁵, y el Banco Mundial lo clasifica en el grupo de “ingreso mediano alto”¹⁶. Sin embargo, Colombia es también uno de los países más desiguales del mundo¹⁷. Por ejemplo, existe un fuerte contraste entre la notable riqueza de algunas de las ciudades principales del país y las condiciones de vida de muchas familias rurales sin acceso a servicios de electricidad, alcantarillado o acueducto.

Colombia ha soportado muchos periodos de conflicto armado. El más reciente se dice, a menudo, que arrancó en la década de los años 1960, cuando se formaron varios grupos armados. Entre estos se incluyen las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Ejército de Liberación Popular (EPL). Sin embargo, los orígenes de estos grupos se remontan aún más atrás, a un periodo de guerra civil conocido como *La Violencia* durante las décadas de 1940 y 1950, aproximadamente (aún se debate cuándo exactamente comenzó y finalizó), junto a la subsiguiente ofensiva anticomunista liderada por el Estado.

En las décadas de 1970 y 1980, las y los intermediarios colombianos empezaron a construir una economía de las drogas ilícitas centrada en la exportación de cocaína. Casi al mismo tiempo, empezó la proliferación de

grupos paramilitares antisubversivos a lo largo del país. Una serie de factores llevaron a varios narcotraficantes prominentes a unirse a la guerra contra las guerrillas, toda vez que muchos grupos paramilitares, constituidos independientemente por “narcos” establecidos, también entraron en el tráfico de drogas.

Por ejemplo, existe un fuerte contraste entre la notable riqueza de algunas de las ciudades principales del país y las condiciones de vida de muchas familias rurales sin acceso a servicios de electricidad, alcantarillado o acueducto.

El cultivo de coca se expandió a lo largo de Colombia en las décadas de 1980 y 1990, especialmente (pero no exclusivamente) en las “zonas de colonización” del sur, donde la gente se asentó tras ser desplazada por la violencia y/o la concentración de tierras. El cultivo de coca les ofrecía a las y los colonos una fuente de ingreso en áreas donde había poca infraestructura o escaso apoyo estatal para la agricultura, y los costos de transporte a los mercados eran excesivamente altos.

Al mismo tiempo, este cultivo ayudó a sostener el conflicto armado en el cual las y los civiles, especialmente en las regiones cocaleras, han sido las principales víctimas. Además de financiar grupos armados ilegales, la economía de la coca provocó y sirvió de pretexto para las respuestas represivas y

militarizadas del Estado, incluidas las fumigaciones aéreas, las cuales han tenido consecuencias nefastas para las y los habitantes locales.

El Acuerdo de Paz de 2016 entre el Gobierno colombiano y las FARC-EP fue el comienzo de un nuevo capítulo en la historia del país. Lo que esto significará sigue siendo incierto. La situación es compleja: cientos de mujeres y hombres líderes sociales y activistas comunitarios han sido asesinados desde la firma del Acuerdo; el programa de sustitución de cultivos tambalea, y el ELN, los grupos paramilitares sucesores, y las bandas criminales involucradas en el tráfico de drogas ilícitas han logrado imponerse en muchos territorios desocupados por las FARC.

Mientras tanto, las y los disidentes de las FARC-EP (aquellos que no participaron en el Proceso de Paz) están reorganizándose. A pesar de las incertidumbres, la economía de drogas ilícitas y las políticas para enfrentarla serán fundamentales para la configuración de esta nueva fase.

El equipo de Drogas y (des)orden trabajó en varios territorios fronterizos de Colombia, afectados por el conflicto armado y las economías de las drogas ilícitas. Ahora bien, para la versión 2020 de las *Voces de los territorios fronterizos*, se concentró en tres municipios: Puerto Asís, Santa Marta y Tumaco, donde se enfocaron los esfuerzos en las primeras fases de la investigación.

Puerto Asís, Putumayo

Puerto Asís es un municipio de Putumayo, un departamento (similar a una provincia o estado) en la frontera sur de Colombia. Bordea seis de los otros doce municipios de este departamento, y al Ecuador en el sur. Esta última frontera la traza parcialmente el río Putumayo, un tributario del río Amazonas y la arteria fluvial de la región. Este y otros ríos son claves para la vida diaria de las zonas rurales de Puerto Asís, conformadas por miles de cultivos familiares, entrecruzados por la selva tropical, muchos sin acceso vía carretera.

Durante décadas, el cultivo de coca ofreció a las y los productores campesinos un camino para acceder al mercado (en algunas áreas, es el único cultivo con una mínima viabilidad comercial).

En Puerto Asís residen aproximadamente 63,067 personas, de las cuales cerca del 56 % vive en la cabecera municipal con el mismo nombre. Un 12 % de la población se autoidentifica como indígena y otro 7 % como afro-colombiano/a, negro/a o mulato/

a¹⁸. Al menos, hay seis resguardos en el municipio, y también una Zona de Reserva Campesina. Los primeros son territorios indígenas, gobernados por cabildos indígenas bajo jurisdicción especial, protegidos por títulos colectivos e inalienables. La última es un área con designación especial que incluye títulos de tierra privados pero sujetos a reglas y regulaciones específicas, con el fin de promover y apoyar la economía campesina.

La población mestiza de la subregión del bajo Putumayo, en la cual se encuentra Puerto Asís, era mínima hasta mediados del siglo XX. Varios factores estimularon una colonización acelerada en este periodo, entre estos, la concentración de la propiedad rural en departamentos cercanos que obligó a muchas familias a migrar en búsqueda de tierra. También incidieron en este fenómeno el desplazamiento de una multitud de personas durante el periodo de guerra civil conocido como *La Violencia*, antes mencionado, así como el surgimiento de oportunidades comerciales y de trabajo asalariado ligadas al primer *boom* petrolero de esta región¹⁹.

El sector petrolero aporta el 63 % del producto interno bruto (PIB) del Putumayo²⁰. Como Puerto Asís es uno de los principales municipios petroleros en este departamento, probablemente el sector petrolero también represente una proporción significativa del PIB municipal.

Sin embargo, la industria de la coca / cocaína es tan importante como el petróleo. Por ejemplo, unas 4.506 familias del municipio se vincularon en el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), fruto del reciente Acuerdo de Paz. Durante décadas, el cultivo de coca ofreció a las y los productores campesinos un camino para acceder al mercado (en algunas áreas, es el único cultivo con una mínima viabilidad comercial).

Esto ha generado un empleo rural bien remunerado y, a raíz de los ingresos obtenidos, ha estimulado la demanda de bienes y servicios, la cual contribuye al comercio local. Pero estos beneficios se han pagado a un precio muy alto.

La expansión de los cultivos de coca en el bajo Putumayo en la década de los años 1980 obedeció a la primera oleada de violencia narcoparamilitar en la región. El Cartel de Medellín, con el liderazgo de Rodríguez Gacha, inició su colaboración con las fuerzas del Estado para combatir a los grupos insurgentes y asesinar a la población civil acusada de apoyarlos.

La acción civil y la lucha contra las guerrillas luego condujo a la expulsión de estos primeros grupos narcoparamilitares. Esto, junto a la desmovilización del EPL en 1991, les permitió a las FARC-EP consolidar su poder en el bajo Putumayo, incluido su dominio

Playa 'Bocagrande' en Tumaco, Colombia. Foto por Diana Machuca/Universidad Nacional de Colombia.



de la economía cocalera²¹. Pero pronto nuevos grupos los remplazaron.

Las ofensivas militares / paramilitares de finales de los años 1990 y comienzos y mediados de los años 2000 desestabilizaron la "hegemonía" de las FARC-EP en la región. El Bloque Sur del Putumayo perteneciente a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) se desmovilizó oficialmente en marzo de 2006. Las AUC era una organización sombrilla formada en 1997 que unió a diversos grupos paramilitares.

Mientras tanto, y hasta el reciente desarme de las FARC-EP, las fuerzas estatales continuaron su lucha contra las FARC²². Esta configuración del conflicto armado y la economía de la coca vienen transformándose en Puerto Asís (y el resto del país) desde los Acuerdos de Paz de 2016; y la naturaleza de este nuevo escenario sigue siendo incierta.

Tumaco, Nariño

El municipio de Tumaco se localiza en el departamento de Nariño, en el suroeste de Colombia. El municipio, y su cabecera del mismo nombre, albergan el segundo puerto en importancia de la costa pacífica colombiana. Sus fronteras son Ecuador hacia el sur, el océano Pacífico hacia el oeste y noroeste, y otros municipios nariñenses hacia el norte y este.

En 2019, se estimaba que 217.079 personas residían en el municipio, con un poco más de la mitad (cerca del 57 %) en zonas urbanas. La mayoría de la población tumaqueña es afro-descendiente (80 % de los residentes se autoidentifican como negros, mulatos o

afrocolombianos) y 55 % del área municipal pertenece a varios "territorios colectivos de comunidades afrodescendientes".

A estos territorios los gobiernan los Consejos Comunitarios (entre los cuales hay 16 en Tumaco), protegidos por títulos especiales de propiedad colectiva y sujetos a reglas y regulaciones especiales bajo la ley colombiana. Un 4,6 % de la población se autoidentifica como indígena y hay 15 resguardos (definidos previamente) en el municipio²³.

Ya en 2016, Tumaco tenía más hectáreas de coca que cualquier otro municipio en el país.

Los misionarios jesuitas se asentaron en el área que ahora se conoce como Tumaco hacia comienzos y mediados de los años 1600, buscando evangelizar y controlar a la población indígena local. Durante la Colonia, la costa tumaqueña servía como un punto de salida del oro extraído de la vecina población de Barbaças, y como principal puerta de entrada para personas esclavizadas provenientes del África que trabajaban en estas minas. La pequeña villa portuaria colonial creció significativamente entre mediados de los siglos XIX y XX, convirtiéndose en una de las ciudades principales de Colombia sobre la costa Pacífica²⁴.

Varios factores impulsaron la migración hacia el municipio: la abolición de la esclavitud en 1851 (lo cual propició la reubicación de muchas familias libres hacia la zona costera); el surgimiento de dos nuevas economías de exportación a mediados y finales del

siglo XIX (en particular, la del látex de caucho, extraído de las selvas naturales y las plantaciones emergentes en la región, y la de la recolección de nueces de tagua silvestres para la producción de botones y otros productos de “marfil vegetal”); la construcción de la línea férrea que conectaría a Tumaco con Pasto a finales de la década de los años 1920 ; y, finalmente, la llegada de numerosas multinacionales exportadoras de madera y el auge maderero entre las posteriores décadas de 1940 y 1970²⁵.

Diversos actores armados (el ELN, las FARC-EP, y grupos asociados al Cartel de Cali) habían entrado y salido de Tumaco a partir de las décadas de 1970 y 1980. Pero solo fue hacia finales de los años 1990 que el municipio se convirtió en un punto focal del conflicto armado.

Durante este periodo, las FARC-EP se establecieron con mayor permanencia en el área, con la aparente intención de expandir la economía de la coca bajo su mando. Los grupos paramilitares de las AUC, específicamente el nuevo frente “Liberadores del Sur”, también se asentó en el área hacia finales de la década de los años 1990, con el fin de combatir a las guerrillas y sus supuestos colaboradores, como también controlar las zonas de tránsito y el eslabón de transporte relacionado, particularmente, con el comercio de cocaína²⁶.

En los años siguientes, el cultivo de coca creció por todo el municipio. Los operativos militares (contrainsurgentes y antinarcóticos) de comienzos y mediados de la primera década de este siglo contribuyeron a la expansión del cultivo de coca (y la presencia de las FARC-EP) en la región. Esto afectó a los departamentos cercanos del Putumayo, Caquetá y Meta. Se dice que los cultivos de coca, las y los cultivadores/recolectores, y la actividad armada fueron “desplazados” de otras partes del país hacia Tumaco y, más generalmente, al departamento de Nariño²⁷.

Ya en 2016, Tumaco tenía más hectáreas de coca que cualquier otro municipio en el país. Alrededor de 16.658 familias del municipio se vincularon al PNIS, en desarrollo del Proceso de Paz. Sin embargo, así como en Puerto Asís, el futuro de Tumaco sigue siendo incierto, sobre todo respecto a la economía de la coca y a las dinámicas del conflicto armado en la región.

Santa Marta, Magdalena

Santa Marta, localizada en la costa del mar Caribe, en el norte de Colombia, es la ciudad más antigua del país (fundada en 1525) y capital del departamento del Magdalena. A este municipio, en el cual la ciudad es solo una parte, lo define íntegramente la Sierra Nevada de Santa Marta, un sistema montañoso piramidal. La Sierra abarca gran parte del territorio municipal y se extiende a los departamentos vecinos de La Guajira y el Cesar.

Hacia mediados de la década de los años 1970, la Sierra se convirtió en el epicentro de la producción de marihuana. El auge de la marihuana, llamada la bonanza marimbera, tuvo un impacto significativo en las estructuras agrarias, económicas y políticas de la región.

En 2019, en el municipio de Santa Marta residían aproximadamente 515.717 habitantes, de los cuales 7,47 % se autoidentifican como afro-colombianos/as, negros/as o mulatos/as, y 0,98 % se autoidentifican como indígenas. La gran mayoría de la población de Santa Marta es urbana; solo el 3,2 % reside en la zona rural, pero esta última representa más del 90 % del área terrestre del municipio²⁸.

Santa Marta cuenta con inmensos recursos naturales y un enorme legado cultural, arqueológico e histórico. Uno de los eslóganes turísticos de la región hace alarde de “la magia de tenerlo todo”. De hecho, el turismo es una parte central de la economía municipal, seguido por el comercio, otras actividades que circundan el puerto, y, en menor medida, la pesca y la agricultura. El municipio en su conjunto es más rico y robusto económicamente que Puerto Asís y Tumaco; sin embargo, presenta una fuerte disparidad entre las áreas urbanas y rurales.

Esta investigación se centra en la zona rural de la Sierra Nevada, donde se traslapan múltiples jurisdicciones. Estas incluyen varios municipios de los tres departamentos con territorio en la cordillera, tres agencias ambientales regionales, dos parques naturales, una reserva forestal y nueve resguardos indígenas (definidos previamente).

Un número apreciable de campesinos y campesinas se asentó en la Sierra Nevada hacia finales del siglo XIX. Lo hicieron en medio del auge cafetero focalizado en el área de influencia de Santa Marta e impulsado principalmente por empresarios extranjeros que fundaron grandes haciendas. A mediados del siglo XX, la migración hacia la Sierra Nevada se intensificó. Muchas personas huyeron hacia la región para escapar de la guerra civil antes descrita (*La Violencia*), la cual devastó la región andina al interior del país. Otras oleadas migratorias acompañaron la inauguración, en 1971, de la Troncal del Caribe, la vía más importante de esta zona.

Hacia mediados de la década de los años 1970, la Sierra se convirtió en el epicentro de la producción de marihuana. El auge de la marihuana, llamada la *bonanza marimbera*, tuvo un impacto significativo en las estructuras agrarias, económicas y políticas de la región. La bonanza decayó en la siguiente década, en medio de la represión de las campañas antinarcóticos lideradas por el Estado y una fumigación aérea en extremo



'Casa de cafetero'. Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia. Foto por Universidad Nacional de Colombia.

agresiva. Pero, en ese entonces, las estribaciones del norte y costeras de la Sierra (donde se ubica la ciudad de Santa Marta) ya se habían consolidado como lugares de narcotráfico y de producción de coca.

Si bien los grupos paramilitares y diversas guerrillas habían competido en la década de 1980, en la de 1990 grupos paramilitares locales se consolidaron y expandieron su control territorial. El conflicto armado se intensificó en la primera década de este siglo, con la llegada de las antes mencionadas AUC, la federación nacional paramilitar. Tras derrotar y absorber a los paramilitares locales, las AUC ampliaron su influencia sobre las actividades políticas y económicas (tanto lícitas como ilícitas) en la Sierra Nevada y las áreas circundantes.

Cuando se les preguntó a las y los entrevistados sobre los impactos del reciente Proceso de Paz, consistentemente afirmaron que el conflicto armado terminó en la región hace más de diez años. Los paramilitares que operaban en Santa Marta, y más ampliamente en la Sierra, se desmovilizaron junto a las otras fuerzas de las AUC, en 2006.

En ese entonces, el Gobierno comenzaba a implementar su política de Desarrollo alternativo (DA) en el área. Esto incluía el programa de Familias Guardabosques, iniciado en 2004, el cual vinculó a cerca de 1.600 familias en Santa Marta.

En adelante, tanto los cultivos de coca como los niveles de violencia disminuyeron. Pese a esto, aún

persisten múltiples formas de violencia organizada, sobre todo el legado paramilitar, y la región sigue siendo una de las mayores rutas del narcotráfico en el país.

Comentarios sobre la metodología

Los mensajes principales surgen a partir de tres fuentes claves. Primera, durante todo este proyecto de investigación, se sostuvo un diálogo permanente con las y los líderes de organizaciones que unen a campesinos y campesinas de todo el país involucrados en los cultivos de uso ilícito. En las conversaciones, se identificaron varios temas recurrentes que reflejan las perspectivas de estos y estas líderes, especialmente sobre el mundo de la producción de coca.

Segunda, los mensajes claves se basan en más de 150 entrevistas abiertas o semiestructuradas con cultivadores, cultivadoras, recolectoras y recolectores de coca de los tres territorios fronterizos colombianos (Puerto Asís, Tumaco y Santa Marta). Estas entrevistas se realizaron por el equipo de investigación durante varias salidas de campo, en 2018 y 2019.

Tercera, los mensajes se basan en las opiniones y experiencias comunicadas en una encuesta (realizada en junio de 2019) con campesinos y campesinas registrados en el Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito en dos de los municipios de mayor importancia para la producción de coca en Colombia: Tumaco y Puerto Asís.

Mensajes principales

1. Muchas personas en los territorios fronterizos de Colombia han progresado económicamente gracias a la coca, pero a un alto precio

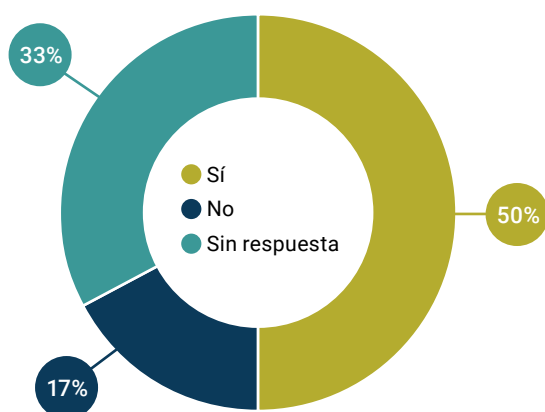
En [donde vivo] la economía de todo el tiempo ha sido la mata de coca. No hay ninguna mata que la reemplace. 200 gramos [de pasta de coca], por barato, son \$300.000. Sirve para el sustento. Para usted hacerse esa suma con productos lícitos es muy difícil. ¿Por qué es difícil? En el caso mío, me toca sacar de allá de la finca plátano o yuca en caballo. Cuando ya llega a la orilla de la carretera, con un sol como el de hoy, eso ya llegan negros. Para sacarlos acá a la plaza, ¿quién se los recibe? Nadie. (Cultivador de coca, Puerto Asís, octubre de 2018).

La producción de coca garantiza el ingreso, crea empleo y fortalece la economía local

El cultivo de coca les brinda a las y los campesinos una entrada garantizada al mercado. Lo hace en un contexto de altos costos de transporte, inestabilidad de la demanda y altas fluctuaciones de precio para la producción lícita. La coca les permite generar ingresos constantes que son un poco más altos que los de otras economías agrarias. Por consiguiente, muchas y muchos campesinos en los territorios fronterizos de Colombia perciben (o percibían) que la producción de coca es la única opción económica (ver gráfica 1.1).

La coca también genera oportunidades sustanciales y comparativamente bien remuneradas de empleo asalariado, sobre todo, pero no únicamente, durante la temporada de cosecha. Estos ingresos de la coca, a su vez, fortalecen otros sectores, al aumentar la demanda local de bienes y servicios. Como resultado, la economía de la coca produce avances socioeconómicos notables.

Gráfica 1 Pregunta: ¿Considera que los cultivos de uso ilícito eran la única alternativa económica para su familia?



Las/los cultivadores de coca invierten sus ingresos en rubros como educación, salud y tierra

Las y los cultivadores y recolectores han utilizado sus ingresos de la coca para realizar mejoras a sus hogares, pagar la educación de sus hijos e hijas y financiar los tratamientos médicos de sus familiares. También han adquirido tierra y otros activos, como motos y paneles solares. Muchos no habrían podido acceder a estos servicios o activos sin la economía cocalera. En algunas comunidades, las personas también agruparon sus ingresos de la coca entre todos y todas para pagar la construcción de escuelas, senderos y carreteras, e incluso los salarios de las y los maestros.

Cuando lo [del auge de] la coca, lo primerito [... que] hice [fue] la planchita, [para] la mitad de la casa. Después, ya empezamos a comprar el ladrillo, porque como también hay que comprar los insumos de la finca, porque eso no crece solo, entonces así, hice la plancha de mi casa, la mitad. Después ladrillos. Y ahí pues ya fue lo de la finca, ya los muchachos que comprar un televisor. (Excultivadora de coca, Tumaco, febrero de 2019).

Después de que yo tuve a mi primer hijo, yo recuerdo que nosotros también teníamos coca. Es que era muy rentable. Uno de una sola cosecha sacaba plata para la luz, el televisor que era lo primero que uno compraba para ver la novela, Marimar... después el motorcito para andar en el río. (Excultivadora de coca, Tumaco, mayo de 2018).

Entonces ya con la plata de la coca uno tiene economía: compra bestia, mejora la casa, invierte en la vivienda, en tejas y alambreadito. [...] Todo lo que se hizo [en este pueblo] fue con la plata de la coca entre todos. El sudor de uno y la plata de la coca. Cuando llegamos, nosotros pagamos la profesora como dos años, que era una vecina que dijo que estaba preparada. Y después ya metieron profesor público [pagado por el Estado]. (Excultivador y recolector de coca, Puerto Asís, septiembre de 2019).

En mi caso, no soy mal agradecida con la coca. Yo he tenido situaciones críticas. Como le digo tengo un hermano discapacitado, mi madre, mis hermanos pequeñitos [a quienes cuido]. Cuando

mamá se enfermó, yo ahí si tenía como para comprar una casita, [pero] me dejé sacar mucha plata de los médicos. [Entrevistador: ¿Usted pagaba los servicios médicos con el dinero proveniente del cultivo de coca?] Sí. ¿Para qué va uno a decir que no? (Excultivadora de coca, Puerto Asís, octubre de 2018).

[Cuando teníamos] plantas, podíamos ver televisión, comprar gasolina, podíamos salir al pueblo, comprar nuestra ropa. Nuestros hijos estrenaban cada vez que podían, cada cosecha, estrenaban un par de zapatos, un par de todo. Ahora [desde que dejamos la coca] usted los va a ver y los hijos míos, todos los zapatos remendados, parchados. Porque acá el sueldo que le dan a mi esposo, no le da para comprar zapatos. Si algo por allá en diciembre [con el bono navideño]... [Esa] neverita la compramos de segunda, esa lavadorita, esa estufa la tenemos desde que nosotros trabajamos allá [en el cultivo de coca]. (Excultivadora y recolectora de coca, Puerto Asís, septiembre de 2018).

Las mujeres que trabajan en la economía de la coca obtienen mejores ingresos que en otros sectores

Estos avances socioeconómicos han beneficiado a los hombres y a las mujeres. Las mujeres que participan en la economía de la coca logran mejores ingresos que las que no, y casi lo mismo que sus contrapartes hombres, una igualdad relativa que en general no se da en muchas economías rurales.

Acá los hombres no miran en menos a las mujeres, ni las mujeres nos sentimos menos que los hombres. Somos parejos los raspadores. (Recolectora de coca, Puerto Asís, septiembre de 2019).

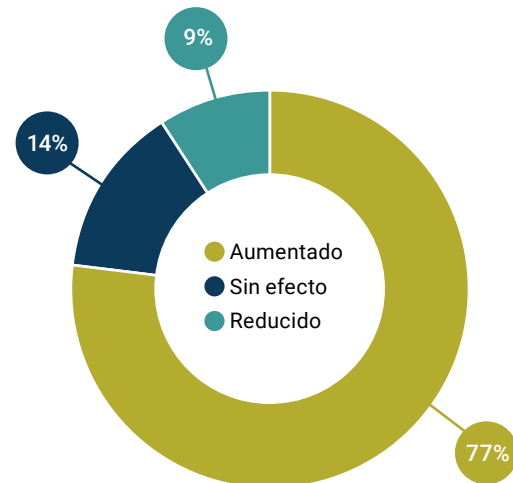
[Durante el auge de la coca] yo vendía harta cerveza, aguardiente, esos pollos de engorde criollos los vendía, y siempre la plata estaba ahí. [...] Yo puedo decir que, si así estuviera la economía hoy, nunca desearía tener marido porque yo sabía que todos los fines de semana vendía y tenía mi plata en el bolsillo para mis necesidades y para mi comida. (Lideresa del Consejo Comunitario, Tumaco, febrero de 2019).

El riesgo de la violencia

Trágicamente, las y los cultivadores y recolectores de coca (y las regiones donde trabajan) han pagado un alto precio por estos modestos avances socioeconómicos. Como la coca es ilícita, las y los productores son vulnerables a los ataques de grupos armados ilegales y del propio Estado, y tienen poco o

nulo acceso a instancias institucionales. La gráfica 1. 2 muestra cómo la mayoría de las y los encuestados asocian la producción de coca en sus regiones con aumentos en la violencia. Sin embargo, casi la mitad evalúa que su experiencia en la participación en la economía de la coca ha tenido aspectos tanto positivos como negativos (ver gráfica 1.3).

Gráfica 2 Pregunta: ¿Considera que la producción de coca en la región ha aumentado la violencia, reducido la violencia, o no ha tenido ningún efecto en los niveles de violencia?



Como le digo, en el 98 comienza a llegar la coca, cuando pasó lo de Caquetá que a todos los sembradores los sacaron, todos se vinieron directamente acá. [...] Pero también fue una estrategia de las FARC, a algunos los trajeron y entonces comenzaron a sembrar coca. Nosotros teníamos más o menos en ese territorio de la zona 3, 9.000 hectáreas para dejarlas en reserva y en bosque. Y comenzó la colonización de nuestro territorio siendo controlado por las FARC.

La FARC les decía a nuestros campesinos del Consejo Comunitario "siembran o se van porque son sapos". [...] Sí, pero esos predios eran colectivos. Ahí empezó el desastre y no solo en [nuestro Consejo Comunitario]. Comenzó a extenderse dentro del municipio de Tumaco. (Líder de Consejo Comunitario, Tumaco, septiembre de 2019).

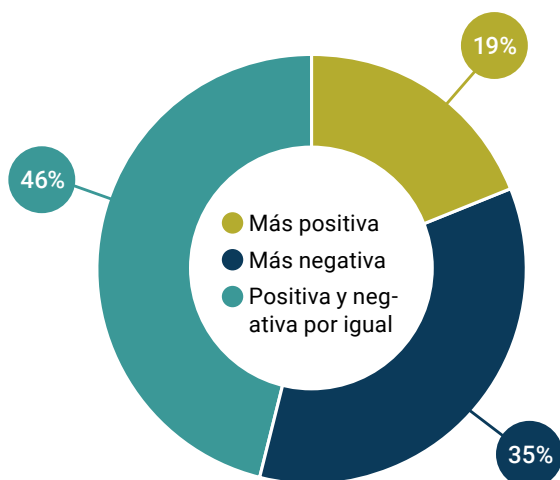
Normalmente la noticia de muertes [a manos de los] grupos [armados] nosotros la mirábamos por televisión. Cuando ya empieza a llegar el narcotráfico, la coca aquí a Tumaco, ya esas cosas las empieza a ver uno personalmente, que muerte, que desaparición [...] todo eso que para uno era lejos. (Líder de Consejo Comunitario, Tumaco, febrero de 2019).



Mula en Siberia, corregimiento de Ciénaga, Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia. Foto by Universidad Nacional de Colombia.

Es que en la coca hay problemas [...] Acá ha habido mucha muerte por el cultivo de la coca... [Hay] muchachos que se ponen a trabajar con narcotraficantes y por cualquier deslíz los matan. *(Cultivadora de coca, Puerto Asís, junio de 2019).*

Gráfica 3 Pregunta: ¿Su experiencia con la coca fue principalmente negativa, positiva, o negativa y positiva por igual?



Hay abandono del Estado y sobrevivimos con la mata de coca porque nos toca. Muchos nos hemos concientizado con tanto muerto [por la coca]. [...] Si hay oportunidades, si nos dan facilidades, nadie le jalaría a la coca porque es muy esclavizante. *(Cultivador de coca, Puerto Asís, septiembre de 2019).*

[Durante el auge de la coca] ...esa era otra cosa, como eso era cada ratico que había plata ... como eran tantas hectáreas, cuando usted terminaba de raspar esta... entonces cuando usted terminaba aquella, y tenía que volver aquí, ya otra vez esta estaba de raspar. O sea, en ningún momento se dejaba de raspar, eso generaba muchísimo dinero, muchísimo se movía la economía de la zona, pero también era demasiada la violencia, el irrespeto... *(Excultivadora y recolectora de coca, Santa Marta, marzo de 2019).*

La necesidad de alternativas viables que salvaguarden los avances socio-económicos

La vida cotidiana en medio de la ilegalidad no es fácil y, por este motivo, la mayoría de las personas que producen coca preferirían trabajar en economías legales viables. El mayor desafío es, entonces, el diseño e implementación de políticas que permitan a las y los campesinos trabajar en economías agrícolas sostenibles y lícitas, las cuales salvaguarden los avances socioeconómicos derivados de la producción de coca, pero sin los riesgos y costos asociados.

2. Las y los cultivadores de coca en Colombia son campesinas/os y no llevan una vida de narcotraficantes

Un campesino cocalero, el dueño normal, como [en] cualquier otro cultivo, se levanta, la gente desayuna, los raspachines, se va una persona a darles el corte, “de este lado hasta esta mata coges tú, de esta hasta allá usted, y así seguidamente”. El raspachín recolecta, raspa su mata, se pesa, trabajaban hasta las 4-5 de la tarde, porque como ahí sí le pagan es por kilo. *(Excultivadora de coca, Santa Marta, marzo de 2019).*

Las y los cultivadores de coca en Colombia son principalmente *campesinos/as* quienes dependen de la tierra para obtener su sustento. De hecho, la gran mayoría de las y los participantes en el PNIS se autodenominan *campesinas/os* (ver gráfica 1. 4).

El cultivo de coca no es una manera particularmente rápida ni fácil de hacer dinero

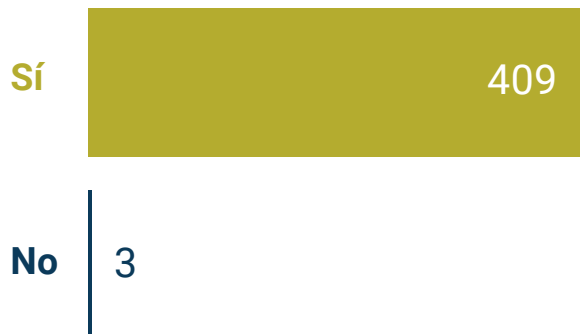
La producción de coca involucra la preparación de la tierra, sembrar, desyerbar, fertilizar, y cosechar con la familia y jornaleros/as empleados/as, así como con cualquier cultivo. En este sentido, la producción de coca no es una manera particularmente rápida ni fácil de hacer dinero (como a ratos se insinúa), y las familias que cultivan coca no difieren de otras familias campesinas. La mayor diferencia entre el cultivo de coca y demás cultivos es que la coca genera ingresos más altos.

Aliado con un familiar me hice finca, y con eso pude mantener la mujer antes del parto. Con el tí hicieron mediería, él tenía la tierra y sembraron a medias. Pero yo era muy pegado a la raspa. Me dio duro levantar una finca de coca, porque es duro. Usted tiene que plantarla, quitarle la hierba alrededor de la mata con la mano, pero usted la ve frondosa, bien cuidadita, bien fumigadita, y usted se siente orgulloso. *(Cultivador y recolector de coca, Puerto Asís, septiembre de 2019.)*

Muchas y muchos cultivadores de coca también tienen otros cultivos

Adicionalmente, muchas y muchos cultivadores de coca también tienen otros cultivos y animales (cerdos, gallinas y vacas), especialmente para el consumo familiar y también, en algunos casos, para la venta en mercados locales, cuando existe esa posibilidad. De hecho, las y los cultivadores frecuentemente invierten sus ingresos de la coca en otras actividades agrícolas. Esto es una parte de su estrategia de diversificación que les permite reducir los riesgos asociados al monocultivo.

Gráfica 4 Pregunta: ¿Se considera usted campesino/a?



Inclusive los que sembraban coca también tenían plátano, yuca, ñame, todas estas cosas que les servían para sostenerse. *(Excultivadora de coca, Santa Marta, marzo de 2019).*

[Mi finca es] como cinco hectáreas. Yo le tengo chontaduro, coca, de todo, chiro, plátano, lo que produzca la tierra. Árboles frutales, todo eso tengo. [Entrevistador: ¿y más o menos de coca cuánto tiene cultivado, o sea, qué tamaño?] Ah, eso es poquitico. [Entrevistador: ¿Cómo media hectárea?] O menos. Con no más eso nos alcanza para mantener las otras planticas. *(Cultivadora de coca, Tumaco, abril de 2019).*

[Además de coca] también hay plátano, yuca, maíz, gallinas, cerdos, solamente para el sustento no para el comercio. *(Cultivador de coca, Puerto Asís, mayo de 2018).*

La economía de la coca permite un modesto avance social

Si bien las y los cultivadores de coca obtienen mayores ingresos que otras y otros campesinos que no cultivan coca, sus patrones de consumo son bastante similares a los de otras familias rurales de clase media. En contraposición a las imágenes populares de “narcos” ostentosos, las y los cultivadores de coca gastan sus ingresos en la educación de sus hijos, en tierra, carros/motos y vivienda (ver gráfica 1.5).

La economía de la coca les permite a las familias campesinas acceder a los servicios y obtener los activos que, de lo contrario, estarían fuera de su alcance, sin volverlos ricos en ninguna medida. La riqueza generada en la industria de la cocaína la acumulan las y los narcotraficantes y no las personas que cultivan coca.

[Yo] no le he visto la ganancia de esa forma, porque la gente ha tenido como dice el cuento, la dinámica ha estado en sembrar poco, lo esencial.[...] porque no había mentalidad de volverse rico, simplemente de vivir cómodamente. *(Cultivador de coca, Puerto Asís, mayo de 2018).*

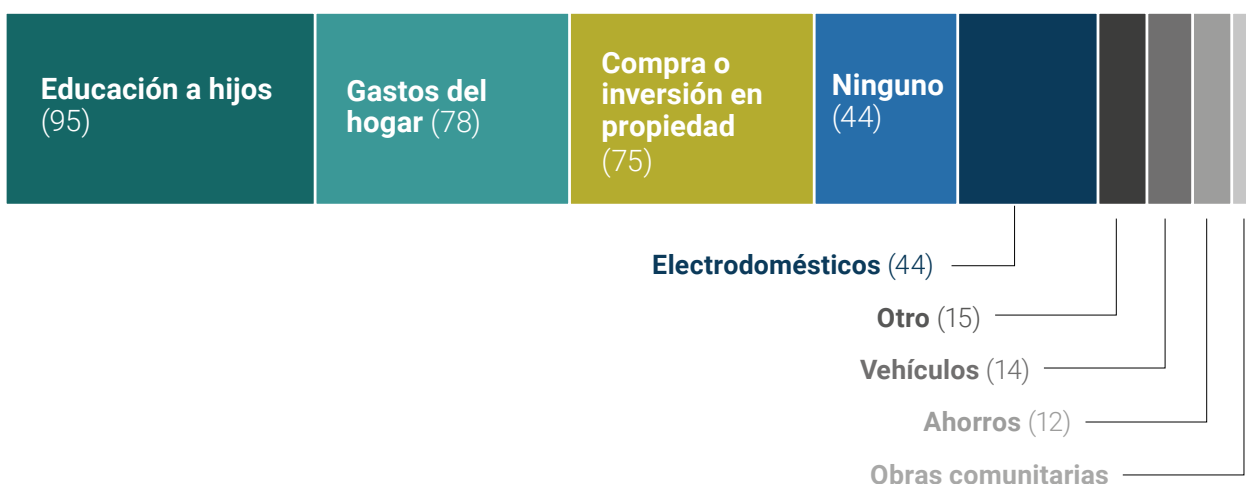
La coca solo da para la comida y el estudio. [...] No es como dice el gobierno que [la gente] se enriquece con la coca. *(Cultivador de coca, Puerto Asís, septiembre de 2019).*

Hay mucha gente por acá [que cultiva coca], pero yo no conozco el primero que tenga plata, que tenga riqueza. Quien se enriquece es quien la comercializa. Pero el que la cultiva no. Con la coca usted coloca los palitos, dos o tres abonadas y a cogerla, 200 o 300 gramos, da para el arroz. *(Cultivador de coca, Puerto Asís, octubre de 2018).*



Una típica casa de campo en Putumayo, Puerto Asís, Colombia. Foto de Frances Thomson / Universidad Nacional de Colombia.

Gráfica 5 Pregunta: ¿En cuáles rubros se gasta los ingresos derivados de la producción de coca?



El Estado colombiano trata a las y los campesinos cultivadores de coca como si fueran criminales

A pesar del hecho de que las y los cultivadores de coca sean simples familias agricultoras, el Estado colombiano los trata como si fueran criminales. La política antinarcóticos colombiana aún participa en el discurso de guerra contra las drogas. Esto se usa para justificar una guerra contra el campesinado que cultiva coca.

A lo largo de las décadas, esta guerra ha involucrado la aspersión aérea de cultivos de coca con un coctel químico (incluido, pero no limitado al glifosato) y la erradicación manual militarizada. Las consecuencias han sido nefastas para la salud (en el caso de la primera estrategia) y para los modos de vida de las familias cultivadoras de coca y sus comunidades circundantes. A la fecha, el Gobierno colombiano no les ha ofrecido a estas familias campesinas una alternativa económica viable diferente del cultivo de coca.

No, en ese tiempo no, solo perseguían a los narcotraficantes grandes. En un tiempo sí se llevaban a todo el que lo encontraban trabajando. A mí me cogieron una vez, pero por aquí saliendo. [...] Me detuvieron, me cogieron con pasta [de coca] y me dieron casa por cárcel. *(Cultivadora de coca, Puerto Asís, junio de 2019).*

[Cuando] vino la erradicación forzosa, dijimos “sembramos chocolate”. Vinieron asociaciones, entidades a colaborar y se sembró, todos con buena asistencia técnica. Pero al tiempo no dio, la gente se echó para atrás, no daba para subsistir la persona, la familia, no. [...] Pues mucha gente quedó endeudada. [...] No es como dice el Gobierno, que a veces habla mal del campesino, que nosotros somos los creadores de la guerra, [pero] nos obligan a nosotros a sembrar [coca] porque no hay otra opción, no tenemos apoyo. *(Cultivadora de coca, Tumaco, abril de 2019).*

A nosotros nos llegaron a fumigar hasta 15 días seguidos, nos fumigaban en la vereda. ...

Nosotros teníamos sembrado hectárea y media en plátano y chiro, lo que llaman para hacer bocadillo. [La fumigación] nos acabó la comida, el maíz, la yuca, de todo eso no quedó nada. Quedamos sin comida, lo único que nos quedó fueron unas esquinas de coca. *(Cultivador de coca, Puerto Asís, mayo de 2018).*

¿Qué más puede hacer el campesino? El miedo es ser judicializados de nuevo. Somos campesinos, y somos cultivadores de coca. [...] Porque en la tele es todo muy bonito, pero en la realidad, no se puede dar el sustento a los niños. Nosotros no estamos tapados en plata, pero la coca nos ha mantenido. *(Cultivador de coca, Puerto Asís, septiembre de 2019).*

3. A pesar de su exclusión social, económica y política, las y los productores de coca colombianos son ciudadanas y ciudadanos organizados y activos

Se organizan mingas [iniciativas de trabajo colectivo a través de las juntas de acción comunal] cada fin de mes. Acá todavía se hacen empalancado de caminos [poner madera en los caminos para prevenir que se llenen de lodo]. La participación es bien. [...] La escuela sí se construyó con una minga. ... Como no hay más que río [para transporte], la única alternativa es la coca. Si el gobierno cumple y hay carreteras, entonces se cambia la coca.

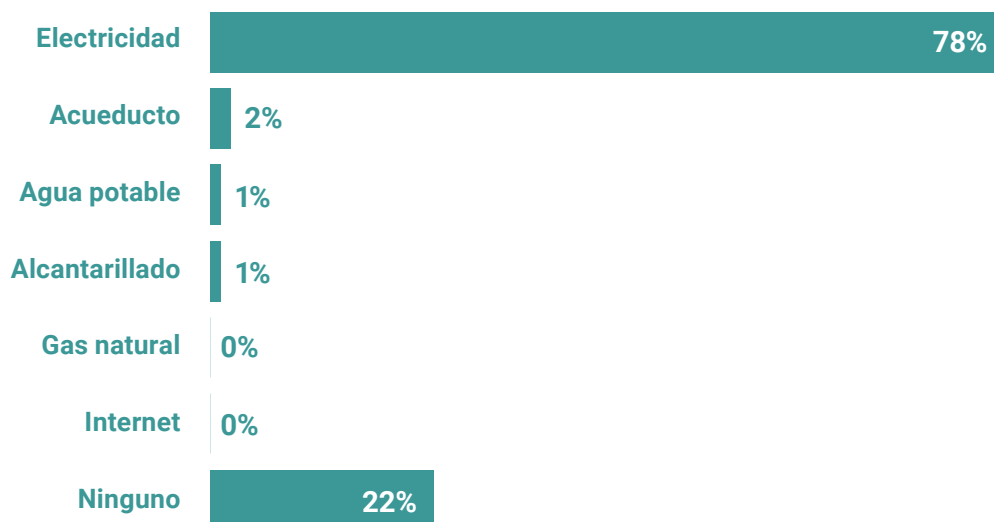
Hay plantas solares que la gente les ha comprado con cualquier cosita que les va quedando. La empresa petrolera llegó a otras comunidades a regalar planta solar y esa gente [los beneficiarios] la vendía barata y entonces la gente se las compraron. [...] A parte de eso] electricidad no hay. Acá no hay servicios públicos. El baño es con el agüita que uno saca del aljibe con motobomba

[que nosotros compramos]. El aljibe porque el río está contaminado por la empresa [petrolera] y es más práctico que ir al río. *(Cultivador de coca, Puerto Asís, septiembre de 2019).*

La exclusión social, económica y política

Las y los cultivadores y recolectores de coca colombianos enfrentan múltiples formas de exclusión. Una de las manifestaciones más claras de exclusión, la cual también afecta más ampliamente a otras comunidades en territorios fronterizos, es la falta de acceso a servicios públicos básicos. La mayoría de las familias que trabajan en la economía cocalera carecen de acueducto, saneamiento/alcantarillado, gas natural o internet en sus hogares (ver gráfica 1.6). Y aunque el gráfico a continuación indica que la mayoría tiene electricidad, las cifras incluyen fuentes de autoabastecimiento eléctrico con generadores de diésel o paneles solares.

Gráfica1. 6 Pregunta: ¿Cuáles de estos servicios públicos tiene usted en su casa?



Otras expresiones de exclusión incluyen los altos niveles de informalidad en la tenencia de tierra y la deficiencia en la infraestructura de transporte, como las vías y puentes, en las áreas cocaleras. Esto hace muy difícil que las familias campesinas en los territorios fronterizos colombianos participen en mercados agrícolas lícitos.

No hay vías [en mi zona], hasta el momento no hay vías, no ha cambiado nada, desde los 70 o 50 que decíamos, está igual ... [Necesitamos vías ... tenemos que viajar en bote] hora y media, hasta La Libertad. Ahora nos da la vuelta que daba antes que eran como 3 días. Ahora hasta La Libertad [...] y de ahí] hora y media en bote [hasta Puerto Asís...] en moto o en carro, más que todo en moto. Para llevar las cosas sí es en chiva [un tipo de bus rural... y en nuestro distrito]hay caminos [para moverse] en caballo y a pie. *(Cultivador de coca, Puerto Asís, mayo de 2018).*

En muchos casos es posesión. De hecho, aún hoy en día la mayoría de los campesinos sufre. Nosotros vamos a presentar un proyecto y no nos dan uso de suelo porque no tenemos documentos legales de la tierra, sino [que tenemos] escrituras, sana posesión, certificado de [tradición] y libertad, pero... eso no sirve para nada.

Entonces la gente vive entre la legalidad pero entre la ilegalidad. No se paga impuestos, no se paga nada porque no hay un documento legal. Y si usted va allá a sacar papeles entonces eso le piden esta vida y la otra, que tiene que llevar un perito, que tiene que ir el IGAC, que tiene que no sé qué... Y no todo el mundo tiene el dinero para ir a hacer eso, entonces son muy pocos los campesinos en la Sierra que tienen títulos legales de la tierra. *(Ex cultivadora de coca, Santa Marta, marzo de 2019).*

Las y los cultivadores y recolectores cocaleros también han sido excluidos del debate público (incluido el de las políticas antinarcóticos) y muchos funcionarios gubernamentales y sectores de la sociedad civil no los reconocen como interlocutores válidos.

Fuerte agencia

Sin embargo, las familias campesinas involucradas en la economía cocalera tienen una capacidad de agencia notable, en particular a través de la organización local como las juntas de acción comunal (las cuales muestran altos niveles de membresía, como lo indica la gráfica 1.7), y los Consejos Comunitarios Afro.

Hemos propuesto alternativas con proyectos para seguridad alimentaria, educación e ingreso. Estamos cansados de tocar puertas para que ayuden con créditos porque hacen caso omiso. Estamos concientizados del problema social de las drogas. Es posible y queremos apostarle a la producción orgánica, reforestar, alimentos limpios. El bosque es un diamante en bruto que da sin necesidad de destruirlo. Nos ilusionamos con los bonos de carbón.

A nosotros nos dicen prohibido tumbiar el bosque. Nos ponen leyes de represión, pero no nos dan el incentivo. Conservar el bosque nativo es una alternativa [potencial], ¿pero dónde están los recursos? ... siempre he estado comprometido con el tema organizativo de la comunidad. La Junta de Acción Comunal se constituyó el 7 de mayo de 1997. Todo se ha hecho a pulso, nada ha sido con ayudas. Trabajando a lomo, y a bestia. *(Cultivador de coca y líder comunitario, Puerto Asís, septiembre de 2019).*

En este momento tenemos un grupo de Whatsapp por si hay algún proyecto o algo, pues hacemos reuniones y todo eso. Las 32 veredas están comunicándose constantemente, a diario “pasó esto, reunión de esto, reunión de aquello”...”.

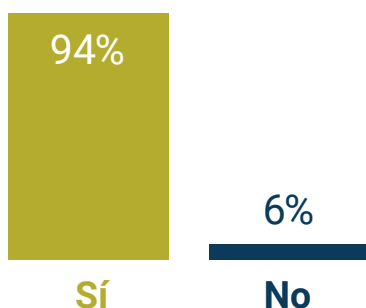
En estos momentos apenas estamos haciendo diálogos con la alcaldía porque la alcaldía nos tiene estigmatizados también, que nosotros éramos paracos [paramilitares], nunca pararon de decirnos eso. [...] porque como vivíamos acá, entonces según decían siempre que esta era zona de paracos, siempre nos calificaban como paracos. *(Pobladora de una antigua zona de producción de coca, Santa Marta, mayo de 2019).*

Muchos integrantes de las comunidades cuentan con orgullo cómo a través de iniciativas colectivas (con frecuencia llamadas *mingas*) y usando recursos propios, han construido sus propias escuelas y vías, y han organizado protestas y paros que han obligado a los funcionarios del Gobierno a prestarles atención y sentarse a la mesa de negociación.

Con la coca hemos hecho todo, nosotros con la coca hemos garantizado nosotros medianamente los derechos fundamentales que el Estado no nos ha dado. [...] Por ejemplo,] el tema de las vías, porque nosotros mismos hicimos las carreteras. [...] En el 97 después del paro del 96 que entramos la carretera a la vereda [...] Todos los campesinos de la vereda empezamos a aportar. Siempre nos tocaba hacer las mingas para salir a trabajar...

Y eso fue así, todas las vías se han hecho de esa forma, con la coca aportando, todos ponemos. [...] Por ejemplo, nosotros en la vereda, mi papá en ese tiempo aportó 800 mil pesos más el trabajo que nosotros hacíamos para la vía; y cada campesino tenía que dar su cantidad de plata. [...] Pedíamos a la alcaldía que nos colaboraban pues igualmente así. Pero ha sido más el esfuerzo de nosotros, que los mismos beneficios que hemos recibido directamente de las alcaldías para eso. *(Líder comunitario, Puerto Asís, septiembre de 2018).*

Gráfica 1.7 Pregunta: ¿Pertenece a una junta de acción comunal?



Presentar los resultados de la encuesta a las comunidades de cultivadores de coca en Tumaco, Colombia. Foto por Sebastián Cristancho / Universidad Nacional de Colombia.

El Estado no ha cumplido muchas de las reformas prometidas ni los programas destinados a enfrentar la exclusión

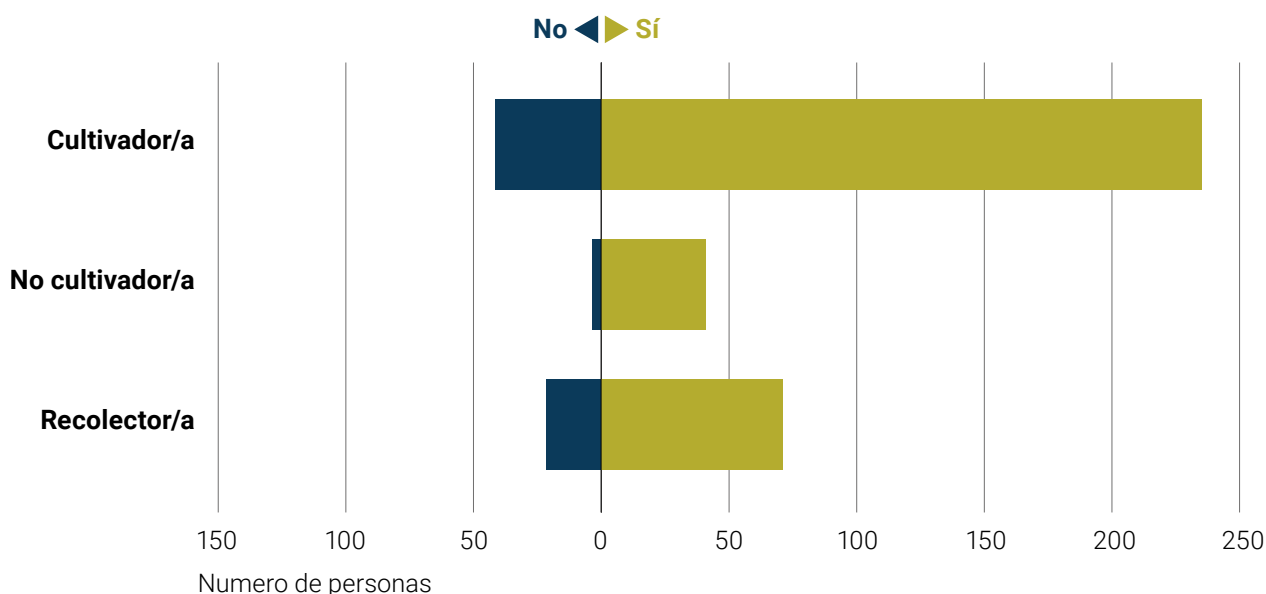
El Programa Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) y el Acuerdo de Paz de 2016, del cual forma parte, fueron diseñados para contrarrestar la exclusión (social, económica y política) de las familias campesinas, en particular de las y los cultivadores y recolectores de coca. Por ejemplo, el PNIS incluye varios espacios de participación que han permitido una interacción directa entre funcionarios/as del Gobierno y las y los delegados de subregiones rurales cocaleras en las fases de planificación e implementación del programa.

El PNIS también pretendía articularse con los planes de desarrollo locales y regionales orientados a mejorar la infraestructura rural y asegurar el acceso a bienes

públicos en áreas priorizadas. Pese a ello, el Gobierno ha hecho poco para avanzar en estos aspectos del PNIS. El Gobierno también ha detenido las reformas legales prometidas, las cuales buscaban eximir temporalmente de enjuiciamiento criminal a las y los pequeños cultivadores de coca.

Los participantes en el programa han expresado su frustración con el Gobierno, al sostener que este no ha cumplido los acuerdos, mientras ellos sí lo han hecho (ver gráfica 1.8). Estos mismos acuerdos son una expresión más de la exclusión de la que son objeto las y los cultivadores y recolectores de coca. En clara violación de los principios básicos de ciudadanía, la inmensa mayoría de las familias que participan en el programa de sustitución de cultivos no han recibido una copia del contrato que firmaron con el Estado (ver gráfica 1.9).

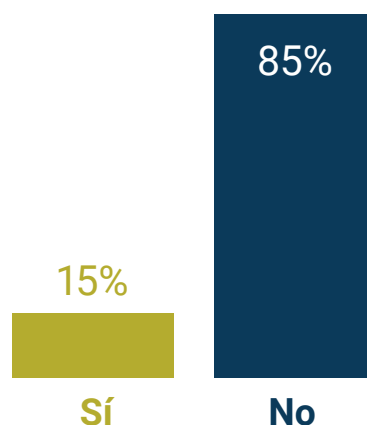
Gráfica 1. 8 Pregunta: ¿Considera que los compromisos adquiridos por las personas inscritas en el PNIS se van a cumplir?



Quando ellos vinieron que bueno teníamos que erradicar la coca. ¿Qué hicimos? La erradicamos y quedamos así. Porque esta es la hora que a mí no me han dado ni un solo pago y cerramos la coca y sembramos el chocolate, ese chocolate todavía no está generando ingresos. Nosotros que a veces sí comemos dos comidas, a veces una. (Excultivadora de coca, Tumaco, febrero de 2019).

El Gobierno dice que está cumpliendo, pero es mentira ... Se firmó de parte y parte, pero el Gobierno mandó erradicadores, y quieren que vivamos de la nada. ... No es que la gente esté amañada con la hoja de coca, pero somos seres humanos [con necesidades básicas] y el cambio no se ve. (Cultivador de coca, Puerto Asís, septiembre 2019).

Gráfica 1. 9 Pregunta: ¿Tiene copia del contrato individual con el Programa Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos?



Afganistán

“ Los jóvenes arriesgan sus vidas para sostener sus familias contrabandeando drogas en las noches, pues es su única fuente de ingreso.”

Excomandante de grupo armado, ciudad de Zaranj, Nimruz, 2019





Sobre los territorios fronterizos

Afganistán es un país montañoso y sin litoral marítimo, con una población de aproximadamente 38 millones de personas²⁹. Se le clasifica como un país de “ingreso bajo” y se ubica en el puesto 168 de 188, según el IDH³⁰. En 2016, se estimaba que 54,5 % de la población afgana vivía por debajo de la línea de la pobreza³¹.

Al localizarse en la histórica Ruta de la Seda, Afganistán siempre ha estado inmerso en redes sociales interregionales y en múltiples formas de intercambio económico, religioso y cultural. Su ubicación estratégica ha expuesto al país a muchas campañas militares a lo largo de su historia, desde Alejandro Magno, pasando por las invasiones persas y mongolas, hasta las incursiones de potencias coloniales europeas. Cada una ha dejado una huella cultural y demográfica perdurable. Después de su fundación como un Estado “tapón” en el siglo XIX para separar a los imperios ruso y británico, Afganistán alcanzó su independencia en 1919, bajo el rey Amanullah Khan.

El país entró en un periodo de relativa paz y estabilidad a partir de la década de los años 1930, hasta el estallido de la guerra en 1978. Durante la Guerra Fría, los gobernantes afganos llevaron a cabo un programa de modernización gradual y de neutralidad política, asegurando ayuda externa de ambas superpotencias. Esta estrategia reforzó la larga dependencia del país a la financiación externa, y también redujo los incentivos para que los gobernantes afganos construyeran un pacto fiscal y social con su población.

El surgimiento de los talibanes, a mediados de la década de los años 1990 trajo algo de estabilidad, pero profundizó el aislamiento internacional del país. Esta situación cambiaría radicalmente con la intervención en 2001, liderada por EE.UU. que suplantó al régimen talibán.

La penetración del Estado y la provisión de servicios eran limitados en el Afganistán rural, lo cual generaba una fuerte contradicción entre el Estado enclave financiado con recursos extranjeros y una población rural excluida de estos beneficios. A la larga, estas contradicciones estallaron en la Revolución Saur de 1978, la cual trajo un gobierno comunista, una extensa agitación civil, y la invasión soviética de 1979 para apuntalar al régimen. Luego vendrían diez años de guerra soviético-afgana, con millones de muertos y desplazados en el país.

Desde entonces, Afganistán ha vivido diferentes fases de conflicto armado, intercaladas con fases de relativa estabilidad. Después de la retirada soviética en 1989, se daría una guerra civil regional que condujo al colapso del Estado, destruyó gran parte de la infraestructura restante e insertó el país en un sistema regional sumamente volátil de economía de guerra y conflicto armado.

El surgimiento de los talibanes, a mediados de la década de los años 1990 trajo algo de estabilidad, pero profundizó el aislamiento internacional del

país. Esta situación cambiaría radicalmente con la intervención en 2001, liderada por EE.UU. que suplantó al régimen talibán.

El gobierno que surgiría después del Acuerdo de Bonn, liderado por el presidente Karzai, inicialmente generó expectativas de que el país haría una transición sostenible a la paz. Sin embargo, luego vendría una nueva fase de conflicto armado que se ha intensificado con el paso del tiempo, y que ha desplazado a 3,5 millones de afganos³². El país ha permanecido en la categoría de "alerta máxima" en el Índice de Estados Frágiles en las dos primeras décadas del siglo XXI.

Si bien hay una larga historia de cultivo de amapola y consumo de opio en Afganistán, el periodo de guerra impulsó un aumento significativo de la producción y tráfico de opiáceos, y Afganistán suplantó a Burma como el líder global de la producción de opio ilícito.

El alcance geográfico y la producción total de opio aumentaron paulatinamente durante las décadas de 1980 y 1990³³. La prohibición impuesta por los talibanes en 2000-2001 originó una caída estrepitosa pero efímera en la producción de amapola. No obstante, después de la intervención militar liderada por Estados Unidos y, en particular, desde finales de los 2000, la producción de esta planta repuntó.

En 2017, el cultivo de adormidera alcanzó el récord de 328.000 acres o 132.737 hectáreas³⁴. Desde entonces, la economía de opio ilícito representa aproximadamente 20 % a 32 % del PIB afgano, más que la suma de todas las exportaciones de bienes y servicios del país³⁵. En 2018, luego de una fuerte sequía que redujo la producción, se estima que la economía de opio ilícito bajó, y este representó entre 6 % y 11 % del PIB³⁶.

Si bien hay una larga historia de cultivo de amapola y consumo de opio en Afganistán, el periodo de guerra impulsó un aumento significativo de la producción y tráfico de opiáceos

Después de varios meses de negociación y una reducción temporal de la violencia, el Gobierno de Estados Unidos firmó un acuerdo de paz con los talibanes el 29 de febrero de 2020, que buscaba la retirada de EE.UU. y el final del conflicto. El acuerdo incluye un compromiso de retirar del país todo el pie de fuerza de EE.UU. y su coalición en la primavera de 2021, a cambio de garantías de los talibanes de no proteger ni brindar apoyo material a grupos terroristas que amenacen a EE.UU. o sus aliados.

El equipo realizó sus investigaciones en dos territorios fronterizos de Afganistán escogidos por sus relaciones contrastantes, tanto en el pasado como hoy día, con las

instituciones centrales del Estado y sus experiencias divergentes con el conflicto y las economías de las drogas ilícitas.

La provincia de Nangarhar ha sido durante mucho tiempo un centro económico y comercial políticamente influyente en la frontera oriental afgana. Si bien la remota provincia de Nimroz ha tenido poco peso económico y político durante gran parte de la historia de Afganistán, hoy está convirtiéndose en una importante zona comercial en la frontera occidental del país.

Ambos territorios fronterizos sienten, en diferentes grados, el impacto de la economía de drogas ilícitas y la insurgencia talibana. La investigación sobre estas tres provincias pretende esclarecer las relaciones entre las drogas, el desarrollo y la violencia en estos territorios, y comprender cómo las intervenciones del Gobierno central y/o las potencias regionales e internacionales afectan estas relaciones.



Contrabando de diesel desde Irán a Zaranj, Afganistán.
Foto por OSD.

Nangarhar

Nangarhar es una provincia demarcada al sur por la cordillera Spin Ghar, que desciende a los valles cultivables del norte. Esta topografía se rompe en el extremo más septentrional de la provincia por los picos del Hindu Kush. Alrededor de 1,5 millones de personas viven en Nangarhar³⁷; la mayoría pertenecen a la etnia pashtún, pero hay otros pequeños grupos pashai, árabes y tayikos. Los pashtunes, a su vez, están divididos entre las tribus del valle y de la sierra.

Históricamente, esta provincia fue un lugar de descanso para la monarquía afgana y otras élites aristocráticas durante los meses de invierno. En tiempos recientes, ha sido de gran importancia para los dirigentes afganos y las potencias vecinas. Hoy, Jalalabad, la capital de provincia, sigue siendo un centro comercial, cultural y político de gran importancia en el este de Afganistán.

Al haber sido un centro principal de resistencia contra el régimen comunista, Nangarhar se afectó fuertemente por la guerra afgano-soviética (1979-1989). El conflicto violento volvió a intensificarse desde los inicios de la ofensiva estadounidense de 2001 contra los talibanes, quienes habían controlado la provincia desde 1994. Desde 2019, los talibanes mantienen aún una influencia importante en Nangarhar, a pesar de las muchas intervenciones de las tropas estadounidenses y de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). El escenario del conflicto se ha complicado aún más desde 2015 por la aparición en la provincia del Estado Islámico (EI) o grupos militantes del *Daesh*³⁸.

Al sur y al este, Nangarhar comparte frontera con Paquistán y, desde la década de 1970, ha tenido una próspera economía de comercio y arbitraje, construida sobre fuertes redes tribales transfronterizas. La minería (mármol, talco y gemas) y la tala ilícita también han sido una fuente significativa de ingresos y rentas para los negocios de las élites provinciales y para los grupos político-militares.

Nangarhar tiene una fuerte economía agrícola: sus agricultores cultivan un gran porcentaje de los productos agrícolas de Afganistán, incluido el arroz, el trigo, varios tipos de fruta y la adormidera. La provincia ha sido un importante productor de opio desde finales de la década de los años 1980. En

algunos momentos, produjo hasta una cuarta parte de los opiáceos de Afganistán, con aumentos significativos desde 2010. La provincia ha experimentado prohibiciones intermitentes del cultivo antes, durante y después del régimen talibán, con la más reciente implementada en territorios controlados por el EI.

La línea Durrand, que divide Afganistán de Paquistán, ha estado en disputa desde el periodo colonial. Por un lado, el territorio fronterizo es un “espacio sensible” geopolíticamente. Por el otro, siempre ha habido conexiones económicas y sociales estrechas a lo largo de la frontera, que han involucrado el movimiento de personas y mercancías a través de múltiples puntos de cruce formales e informales.

Desde 2019, los talibanes mantienen aún una influencia importante en Nangarhar, a pesar de las muchas intervenciones de las tropas estadounidenses y de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

Sin embargo, después de 2001, surgió una necesidad creciente de regular, administrar y controlar el movimiento a lo largo de la línea Durrand desde ambos lados de la frontera, por motivos de seguridad, terrorismo, tributarios y de ciudadanía. Paquistán ha estado construyendo un cerco a lo largo de la frontera para desincentivar el cruce fronterizo no autorizado. Como resultado, en años recientes, muchos de los puntos de cruce informal, ubicados en la frontera oriental entre Afganistán y Paquistán, han cerrado. Esto ha impactado significativamente los modos de vida de las comunidades de estos territorios fronterizos.





Nimruz

Nimruz se compone, en gran medida, de una planicie desértica. Es la provincia con la densidad poblacional más baja de Afganistán (aproximadamente 2,8 personas por km cuadrado). En 2015, un estimado de 164.978 personas vivía en Nimruz, alrededor de un tercio de ellos en la capital de la provincia, Zaranj³⁹. Su población incluye una mezcla de grupos étnicos entre los que se encuentran los baluchis, los pashtunes, los tayikos, los barahawis, los uzbekos y los hazara.

Aunque Nimruz nunca ha sido un bastión de grupos armados insurgentes y, comparativamente, menos afectada por la insurgencia talibana, varias redes criminales y de “caudillos” locales ejercen una gran influencia en el área.

Se estima que, en algún momento de sus vidas, muchos de los habitantes de la provincia han residido en otros lugares. Un número significativo de ellos proviene de Irán; otros (especialmente los baluchis), buscan refugio en Nimruz, después de haber sido expulsados de Paquistán por su activismo político. En años recientes, un número creciente de afganos de otras provincias ha migrado a Zaranj, atraídos por su seguridad relativa y las crecientes oportunidades económicas.

Aunque Nimruz nunca ha sido un bastión de grupos armados insurgentes y, comparativamente, menos afectada por la insurgencia talibana, varias redes criminales y de “caudillos” locales ejercen una gran influencia en el área. Durante siglos, las disputas por el acceso al agua han estallado periódicamente

entre Nimruz y el vecino Irán. Algunos informes dan cuenta del apoyo de Irán a las fuerzas talibanes en la provincia⁴⁰. Si bien la capital, Zaranj, permanece bajo control gubernamental, los distritos más alejados, como Dularam y Chakansur, son cada vez más disputados por los talibanes⁴¹.

Históricamente, la presencia estatal en la región ha sido muy limitada. Esto lo indica la escasez de servicios públicos en la provincia, lo que, a su vez, señala que esta es una de las más pobres de Afganistán. Las fronteras de la provincia limitan con Irán y Paquistán, lo cual ha permitido que sus habitantes hayan mantenido un comercio fronterizo facilitado por las redes baluchis, que se extienden a ambos lados de la frontera de los tres países.

En Nimruz, la frontera afgana-iraní cobró más importancia después de la construcción de la autopista Delaram-Zaranj en 2019, y luego del acuerdo trilateral de tránsito entre Irán, India y Afganistán. Esta autopista es. Ahora, una de las carreteras más transitadas de Afganistán y una ruta de comercio principal para mercancías lícitas e ilícitas.

Esto incluye drogas producidas en la provincia vecina de Helmand, la cual contribuye con la mitad del opio producido en Afganistán, aproximadamente. En Nimruz, se cultivaron alrededor de 6.200 hectáreas de adormidera en 2017⁴², muchas de las cuales se sembraron en la década posterior a la introducción de tecnologías de pozos profundos basadas en energía solar. En años recientes, Nimruz también se ha vuelto un centro de tráfico de personas para los afganos migrantes a Irán, Turquía y Europa.

Uso de catapulta para el contrabando de opio, Nimroz, Afganistán. Foto de OSDR.



Comentarios sobre la metodología

Los mensajes principales para Afganistán se obtuvieron especialmente del trabajo de campo realizado en siete distritos de Nangarhar, en el otoño de 2018, y en tres distritos de Nimruz, en la primavera de 2019⁴³.

En total, se hicieron más de 600 entrevistas con comerciantes, transportistas, funcionarios de aduanas y otros funcionarios claves en las dos provincias. Los investigadores entrevistaron a comerciantes y transportistas asociados a una amplia variedad de mercancías lícitas e ilícitas, entre las cuales sobresalen el opio, el hachís, el talco, el combustible, los fertilizantes, el cemento, así como los repuestos y artículos de tránsito. El equipo también entrevistó a miembros de redes de tráfico de personas en Nimruz.

Además de las entrevistas, diez historias de vida por provincia se recogieron con individuos de más de 50 años de edad. Estos individuos pudieron recordar los cambios a largo plazo en las condiciones de seguridad, desarrollo y economía en sus respectivos territorios fronterizos. El equipo de campo también se valió de imágenes de sistemas de información geográfica (GIS, por su sigla en inglés), para identificar sitios de investigación cercanos a la frontera, previo al inicio del trabajo de campo y, nuevamente, durante las sesiones informativas guiadas después de completar cada ronda del trabajo de campo.

Lea la historia de Jangul

Este cómic cuenta la historia de Jangul, un hombre de la provincia de Nangarhar en Afganistán. (Historia en inglés)

<https://bit.ly/3dsBwcl>



Mensajes principales

1. Las redes de comercio ilegal son fundamentales para los ingresos y la supervivencia de los hogares en los territorios fronterizos de Afganistán

Afganistán no solo es un importante productor de opio y heroína, sino también un importante centro y corredor regional de comercio de mercancías lícitas e ilícitas. Así como hay muchas y muchos agricultores que dependen del cultivo de la adormidera para sobrevivir, muchos y muchas transportistas y comerciantes también dependen de los ingresos de las drogas ilícitas para su seguridad financiera. Tales ingresos ayudan a proteger a las familias y las comunidades contra las dificultades económicas en un país afectado por un conflicto armado prolongado.

El comercio ilícito ha ayudado a muchas familias a sobrevivir crisis prolongadas

La investigación en Nangarhar y Nimruz —en el este y oeste de los territorios fronterizos de Afganistán, respectivamente— apunta a resaltar la importancia que tiene el comercio ilícito para que aquellas familias, inmersas en un ambiente peligroso de extrema violencia, puedan asegurar sus ingresos.

Un campesino de Nangarhar recordó que el dinero proveniente del comercio de opio ayudó a que su familia pudiera sobrevivir, después de que fueron bombardeados durante la guerra afgano-soviética:

Durante el régimen comunista, nuestra aldea fue bombardeada, lo que mató a nueve personas; uno de mis primos también fue herido. Durante ese bombardeo, nuestra casa fue destruida y 15 cabezas de nuestro ganado murieron. Todas las ollas, alfombras y otros objetos quedaron destruidos. Cuando los aviones terminaron su bombardeo y dejaron el área, cada persona buscaba sus pertenencias enterradas bajo la tierra...

Mi padre había guardado 54 'seers' (aprox. 10 kg) de opio junto con otros 80.000 afganos, que también quedaron bajo los escombros. Mientras buscaba los objetos de la casa, mi madre encontró la caja con los 54 'seers' de opio y el dinero. Nuestra casa quedó destruida, pero con el dinero construimos una nueva para nosotros. (*Campesino del Distrito Khugyani, Nangarhar, 2018*).

Tal como lo muestra esta experiencia, no todo el que participa en el negocio de las drogas es un acaudalado narcotraficante. A menudo, las personas se involucran con transportistas de pequeña escala, por tener pocas alternativas. En Nangarhar, luego de que los

soviéticos se retiraran y se abriera paso a la guerra civil, el transporte ilícito de drogas en las fronteras internacionales ofreció un ingreso vital a muchas familias de escasos recursos que enfrentaban pésimas circunstancias económicas.

En 1993, uno de mis amigos de Achin [...] solía ser un teniente en el Ministerio de Defensa, pero estaba desempleado en ese entonces. Este teniente tenía un primo que comerciaba heroína en Adulkhel, y [mi amigo] llevaba la heroína a [la ciudad norteña de] Mazar-e-Sharif por medio de un comerciante, y otro comerciante lo ayudaba a pasar a Moscú a través de Uzbekistán...

El teniente vino a ofrecerme el trabajo: que lo ayudara a transportar la heroína desde Mazar-e-Sharif a Moscú. [...] Como vivía en circunstancias tan duras, no tuve otra opción. Para colmo, mi hermana viuda y sus hijos también vivían conmigo. Además, yo ya había tenido que afrontar pérdidas en mi tienda y no tenía los medios para sostener a mi familia. Cuando el teniente me ofreció [el trabajo], acepté. (*Exzapatero y transportista de drogas ilícitas, Ghani Khel, Nangarhar, 2018*).

Los riesgos y beneficios de la participación en el comercio de drogas ilícitas se distribuyen de manera desigual

Para aquellos involucrados en el comercio de drogas ilícitas, los riesgos y beneficios de esta actividad se distribuyen según su estatus social y económico. Los transportistas contratados para mover drogas ilícitas (a diferencia de aquellos que las compran y venden) se enfrentan con riesgos particularmente serios, algo que no siempre se refleja en su pago.

Por ejemplo, el informante citado arriba cruzó múltiples fronteras antes de llegar a Moscú y, a cambio, recibió una suma relativamente pequeña de dinero. Aun así, algunos transportistas pueden acumular suficiente para mejorar modestamente su situación económica, como en el caso del siguiente transportista entrevistado en el lado iraní de los territorios fronterizos de Nimruz.

Con el primer carro que alquilé, quería hacer dinero rápidamente. A la primera oportunidad que tuve, trafiqué 3 kg entre Chabahar y Sarbaz. Me pagaban 6.000 tomanes al mes para hacer transporte legal, trayendo carga de Sistán y Baluchistán hasta aquí...

El dueño no sabía que, adicionalmente, también traficaba opio. Estos 3 kg se volvieron mi patrimonio. Vine a casa, entregué las drogas y regresé tan pronto como pude. Esta vez, fui por 6 kg, luego 12 kg, luego 24 kg, etc. Mi patrimonio continuó acumulándose. Construí una casa, compré tierra. Mi economía empezó a mejorar. Compré un carro: en tres años compré un camión y un remolque. *(Traficante de drogas ilegales, Sistán-Baluchistán, Irán, 2019).*

A diferencia de los transportistas, los comerciantes a gran escala, con acceso a más capital y a conexiones políticas, se protegen, hasta cierto punto, de sanciones a través de sus conexiones con intermediarios para pagarles a altos funcionarios del Estado. A menudo, estos actores usan las ganancias de las drogas para invertir en nuevas empresas o en finca raíz y portafolios de comercio en Jalalabad, Kabul, Teherán o Dubái.

Hay este tipo de familias poderosas de la mafia en algunas ciudades alrededor de Terán. Por ejemplo, en [aldea X], se importan grandes cantidades de opio y heroína, hasta una tonelada de un solo golpe. Esta puede ocultarse fácilmente en los camiones o camionetas que vienen desde Sistán y Baluchistán. Apenas llega aquí, se distribuye entre pequeños vendedores, un par de kg aquí y allá...

Mientras tanto, ellos se sientan en casa y no corren ningún riesgo; el riesgo, en cambio, lo corren los traficantes y todos aquellos que distribuyen a pequeña escala. A menudo, ellos les compran a los baluchis. Ellos entregan los productos y recolectan el pago otro día. Así es como funciona normalmente. *(Comerciante de drogas ilícitas, Irán, 2019).*

Las redes de comercio lícito e ilícito están conectadas

Muchos comerciantes y transportistas mezclan y alternan entre una variedad de mercancías lícitas e ilícitas. En Nangarhar, por ejemplo, el té, el cemento y el fertilizante pueden transportarse por las mismas rutas y por las mismas redes por las cuales se transportan el hachís y el opio. En vista de que los precios, los sistemas de regulación y las dinámicas del conflicto cambian, los comerciantes construyen diversos portafolios para administrar riesgos y hacerse con nuevas oportunidades.

La caída de las actividades lícitas puede estimular una mayor participación en las economías de las drogas ilícitas. Por ejemplo, en Nimruz, durante los periodos de sequía severa, que afectaron la producción agrícola, las personas se volcaron al tráfico de drogas.



Contrabando de mercancías desde Irán en el área de Millak Boarder, Afganistán. Foto de OSDRI.

En cambio, las restricciones a la extracción y al comercio de talco en la región asadkhelita de Nangarhar tuvieron efectos imprevistos, entre los que se encuentra un repunte en el cultivo de cannabis. Se reporta que algunas fuerzas insurgentes se beneficiaban de la industria del talco, lo que llevó a que el Gobierno tomara fuertes medidas, las cuales afectaron negativamente a terceros, como se describe en el siguiente testimonio de un hombre del distrito de Achin.

Actualmente, el negocio del talco en Asadkhel está parado, y la razón es que no se han hecho contratos con los comerciantes [...] las personas de Asadkhel dicen que oficiales de las fuerzas

especiales no permiten que se transporte talco al bazar de Shadal. Ellos piden un contrato con el Ministerio de Minas, pero los contratos están paralizados por el Gobierno...

Este otoño, el 80 % de las cosechas [en Asadkhel] era de cannabis. La gente también la cultivaba en su casa. La mayoría de los jóvenes están sin empleo. Algunos de ellos se han enlistado en el ejército nacional o han dejado Paquistán en busca de trabajo, a razón de que el negocio del talco se ha paralizado, el cual proveía oportunidades de empleo. (Informante clave, distrito de Achin, Nangarhar, 2018).

2. Las rutas de comercio lícitas e ilícitas cambian continuamente, en respuesta a los cambios en la regulación

Los territorios fronterizos de Nangarhar y de Nimruz siempre han estado “mirando hacia afuera”, con profundos lazos históricos, sociales y económicos con países y regiones vecinas. Sin embargo, la permeabilidad de las fronteras ha cambiado de manera constante debido a las dinámicas del conflicto, al poder regulador de las autoridades estatales y no estatales, y a la construcción de infraestructura, incluido cercos, puestos de aduanas y mercados fronterizos.

Estos cambios han impactado significativamente en los flujos legales e ilegales de mercancías, con efectos colaterales para el bienestar económico y social de las comunidades de los territorios fronterizos. Por ejemplo, el endurecimiento de la frontera puede incrementar las diferencias de precio en las mercancías que cruzan la frontera y la prima de seguridad que se paga por estas, aumentando así los incentivos para el contrabando. Cambiar los controles fronterizos también crea más oportunidades para que élites poderosas se beneficien al cobrar impuestos informales sobre el flujo ilícito de mercancías.

Regulación fronteriza, seguridad y modos de vida

Hay disyuntivas importantes, como promover la seguridad o incentivar los modos de vida fronterizos. Irán y Paquistán han restringido sus fronteras respectivas con Afganistán. Paquistán construyó un cerco a lo largo de su frontera con Nangarhar. Irán construyó un muro y una zanja a lo largo de la frontera iraní con Nimruz. Esto trajo consigo consecuencias significativas para las economías locales, las cuales tienen como base el comercio y las conexiones transfronterizas. Un excomandante de una milicia de Nimruz, quien vivió en ambos lados de la frontera,

describió el impacto negativo del muro en los modos de vida de los jóvenes, incitándolos a volcarse al tráfico de drogas.

Ya hace ocho años que los iraníes construyeron un muro a lo largo de la frontera y la cerraron. Cuando esta frontera estaba abierta, los jóvenes se ocupaban comerciando y transportando mercancías, pero ahora no hay oportunidades y la juventud no puede ir a trabajar a Irán, ya que el Gobierno iraní exige pasaporte válido y visa válida para entrar al país. De manera que los jóvenes arriesgan sus vidas para sostener sus familias contrabandeando drogas en las noches, pues es su única fuente de ingreso. La policía fronteriza obliga a las personas jóvenes a pagarles dinero y la policía requisita sus casas y los arresta si se rehúsan a pagar. (Excomandante de grupo armado, ciudad de Zaranj, Nimruz, 2019).

En Nangarhar, un exoficial de Aduanas habló acerca de la inestabilidad de los acuerdos que regulan el cruce fronterizo de Torkham y de los diferentes tipos de comercio que se llevan a cabo, como se aprecia en el siguiente testimonio.

En el pasado, la puerta de Torkham abría y cerraba en ambos lados, para que las mercancías comerciales fueran trasladadas a través de la frontera [...] Actualmente, la puerta está cerrada para todas las mercancías exentas de impuestos que se comerciaban en el pasado. Algunos de los transportistas llevan pequeñas bolsas de bienes comerciales en sus manos o a sus espaldas para trasladarlas por la frontera de Torkham... Hay algunos niños que solían llevar estos bienes en sus manos a Paquistán. (Exoficial de Aduanas, Torkham, Nangarhar, 2018).

Los comerciantes y transportistas suelen adaptarse a los cierres de la frontera de formas creativas y dinámicas. Las restricciones en los cruces formales y el establecimiento de muros y cercos han incentivado el desarrollo de cruces informales en áreas remotas, tanto en Nangarhar como en Nimruz.

El cruce fronterizo de Sasobi en el distrito de Dur Baba en Nangarhar es un excelente ejemplo de una ruta de pequeña escala que ha cobrado relevancia, a medida que otros puntos de cruce importantes han sido restringidos. Esta ruta es difícil de transitar en vehículos motorizados, de modo que la mayoría de los productos se transportan en mulas o camellos. Estos animales llevan productos exentos de impuestos, narcóticos y otros artículos hacia Paquistán. Por otro lado, en Nimruz, algunos microtraficantes de drogas han optado por un método diferente para exportar su producto: lo catapultan por encima del muro fronterizo de Irán.

Tengo un socio comercial iraní y mis primos y otros familiares viven en la aldea X, ubicada al otro lado de la frontera. Es muy difícil hacer negocios a menos que se tenga un socio comercial en Irán, pues yo mismo no puedo ir a Irán. Tenemos números de contacto de la policía iraní que vigila la frontera y mi socio comercial en Irán se pone en contacto con la policía fronteriza que vigila en los puestos de control y en la frontera del lado iraní para establecer, con ellos, el momento preciso para contrabandear el opio...

La policía llama a mi socio para decirle la hora, mi socio me llama y yo llevo el opio a la frontera donde la policía iraní abre las puertas del muro y cruzo el muro para entregarle el opio a mi socio comercial al otro lado del muro/frontera. Algunas veces, usamos una escalera para subir el muro y entregarle el opio a mi socio al otro lado sin informarle a la policía fronteriza iraní...

Los jóvenes de nuestras aldeas cooperan conmigo cuando transporto el opio de una aldea a algún punto fronterizo. Los contrabandistas también cooperan entre sí y no reciben dinero por ello.
(Transportista, ciudad de Zaranj, Nimruz, 2019).

Confianza, intermediarios y violencia

Los territorios fronterizos son “espacios comerciales” en los cuales las relaciones sociales, las instituciones locales y los acuerdos regulatorios se han adaptado al manejo y movimiento del intercambio. Esto ha implicado el desarrollo de una infraestructura compleja de logística, transporte y almacenamiento; de sistemas sofisticados de monitoreo y respuesta a la información de mercado; de organizaciones para la gestión y regulación del trabajo; y de sistemas financieros que permiten los flujos de crédito y capital.

Todos estos acuerdos se han sometido a “pruebas de resistencia” y adaptados para operar en un entorno de alto riesgo (y alta oportunidad), en el que hay múltiples puntos de “fricción” vinculados a un fragmentado panorama geográfico, político y social.

Para que los sistemas de comercio fronterizo de Afganistán funcionen, se exigen tres elementos esenciales: la confianza, los intermediarios y la violencia. Con confianza, se aseguran las redes necesarias para mover las mercancías a través del espacio y a lo largo de las fronteras.

Se requiere que los intermediarios sepan lidiar con los puntos de conexión y los límites que dividen los sistemas sociales, políticos y económicos, y que además crean fricciones que impiden el libre flujo del comercio. Esta figura del intermediario puede interceder entre los funcionarios del Gobierno y los talibanes, o entre los oficiales de Aduana iraníes y afganos, o entre las redes de tráfico de personas en Kabul y las provincias. Ambos son el tejido conector y el punto de fricción en los sistemas comerciales.

Durante los últimos años del régimen comunista, mi tío, con quien comercié opio, murió en la explosión de una mina en la aldea de Bahar junto a otros 12 hombres cuando viajaba a Paquistán, a participar en una Jirga. [...] Mi tío tenía mucha experiencia en el comercio de opio y tenía muchos contactos, pero yo no tenía suficiente capital. Además, yo no podía continuar en el comercio de opio sin una referencia de mi tío, de manera que dejé el comercio de opio.
(Comerciante, Nangarhar, 2018).

Por la ausencia de mecanismos legales y confiables que obliguen al cumplimiento de contratos y que medien en las disputas comerciales, la violencia resulta clave para la regulación del comercio tanto lícito como ilícito. En este caso, la violencia es endémica e impredecible y desplaza los incentivos económicos hacia productos de alto valor, fáciles de ocultar y transportar, como las drogas. Además, la violencia está concentrada geográficamente, lo que lleva a un cambio en la dirección de los flujos comerciales.

La violencia puede conectarse con el control de las rutas comerciales y con la renegociación de acuerdos políticos sobre la distribución de estos ingresos entre las élites locales. Las voces desde los territorios fronterizos de Afganistán desafían la idea comúnmente aceptada de que el comercio de drogas ilícitas es excepcionalmente violento; aquellas indican que todas las redes comerciales funcionan a la sombra de la violencia. La coerción o la amenaza de coerción son fundamentales para el funcionamiento y la regulación del comercio.

Nadie detiene los vehículos que llevan mercancías que pertenecen a los señores de la guerra, en ningún lugar. Cualesquiera sean los productos que lleven, bien sean ilegales o legales, nadie puede pararlos. Además, nadie puede requisarlos, pues todas las fuerzas de seguridad están advertidas. La mayoría de veces, esos vehículos llevan productos ilegales o prohibidos para transferirlos a través de la frontera con Paquistán. Los oficiales antinarcóticos en el distrito no tienen la destreza para pararlos. *(Servidor civil, Nangarhar, 2018).*

Las redes comerciales están sujetas a la recolección informal de ingresos en “cuellos de botella”, frecuentemente dominados por élites estatales y no estatales, y por grupos armados violentos. La evidencia de Nangarhar y Nimruz sugiere que estos cuellos de botella existen a lo largo de los pasos fronterizos internacionales, así como a lo largo de las fronteras informales que existen entre el Gobierno y los territorios controlados por la oposición. Los empleados del gobierno local, en particular los oficiales del ejército y los funcionarios de Aduanas, fueron identificados como intermediarios claves en las redes de comercio ilícito, cobrando impuestos informales al comercio de bienes ilícitos a cambio de facilitar el comercio.

Los pequeños comerciantes y los transportistas son vulnerables a la explotación y la violencia a manos del Gobierno y de las fuerzas opositoras por igual. Este es, particularmente, el caso de los transportistas que llevan mercancías entre Nangarhar y Paquistán, donde los comerciantes reportaron que fueron amenazados y abusados por las autoridades locales e incluso coaccionados a transportar productos ilícitos.

Hace dos años descargué el camión en el área de Ring Road, de Peshawar, y luego estacioné el camión para cargarlo con cemento. Dos policías paquistaníes se me acercaron y me dijeron que su jefe quería hablar conmigo. Me llevaron donde el jefe y me hicieron sentar en una silla. Su jefe me preguntó por qué estaba haciendo negocios con hachís...

Dije que no sabía nada de hachís. Me encarcelaron e hicieron un caso en mi contra, diciendo que tenía 6 kg de hachís. Pasé cuatro meses en prisión y luego pagué Rs. 50.000 para ser liberado. Perdí Rs. 200.000 durante esos cuatro meses y todavía tengo deudas por Rs. 150.000 con algunas personas. El gobierno paquistaní fue muy cruel. *(Transportista de cemento, distrito de Sherezad, Nangarhar, 2018).*

Almacén o BATAY para mercancías en tránsito, Nangarhar, Afganistán. Foto de OSDR.



Las fuerzas de oposición también actúan como intermediarios de gran importancia en ambas provincias. Aunque los talibanes les cobran impuestos informales a comerciantes y transportistas, a menudo desempeñan un papel útil al proporcionarles ayuda adicional a los transportistas que operan en áreas remotas.

Una o dos veces a la semana, conduzco a Dak y veo a los talibanes allí, pero ellos no molestan a la gente común y ayudan al público al prevenir ladrones y proveer seguridad. *(Transportista y contrabandista de personas, ciudad de Zaranj, Nimruz, 2019).*

No obstante, muchos comerciantes en Nangarhar describieron una cultura del miedo, precipitada por los talibanes y otros grupos armados no gubernamentales que operan en sus áreas. En el distrito Ghani Khel, de Nangarhar, los comerciantes reportaron que fueron acosados por tres diferentes grupos armados que operaban en el área, quienes los amenazaron con asesinarlos o secuestrarlos, si se rehusaban a pagar.

Recibí llamadas de diferentes números telefónicos que me pedían dinero, pero no sabía si eran talibanes o ladrones. No he pagado dinero aún, pero tengo miedo de que me maten los talibanes... los policías locales a veces vienen a mi negocio también y piden comida o dinero, y les doy entre Rs. 3.000 y 4.000. No sé ante quién quejarme, pues tanto los empleados del Gobierno como los talibanes son ladrones [...] la seguridad está en su peor momento, cada comerciante tiene guardias armados para protegerse a sí mismo y mantener a salvo su propiedad. *(Comerciante, Ghani Khel, Nangarhar, 2018)*

No sabemos a qué grupo pagarle dinero. Es una mala situación y no sabemos distinguir entre amigos y enemigos. Vamos a casa temprano cada noche, no estamos seguros en nuestras propias casas y tenemos que vigilar nuestros hogares durante la noche. *(Comerciante, Ghani Khel, Nangarhar, 2018).*

3. El aumento de los flujos comerciales ha tenido efectos positivos y negativos para los habitantes de pueblos fronterizos en auge

Los pueblos fronterizos que experimentan auges o bonanzas emergen en áreas limítrofes donde convergen los flujos comerciales. Estos lugares se convierten en imanes para comerciantes, migrantes, funcionarios estatales y especuladores, con la promesa de nuevas oportunidades, ganancias inesperadas e ingresos fiscales.

La suerte de estos pueblos mejora o empeora según una serie de factores, incluidos los cambios en el contexto geopolítico regional, la variación en los precios y la disponibilidad de productos básicos, los intentos de regular el comercio y las dinámicas del conflicto.

Los pueblos en auge están vinculados frecuentemente con un asentamiento "gemelo" al otro lado de la frontera, con el cual desarrollan una relación simbiótica y mutuamente fortalecedora; por ejemplo, Jalalabad-Peshawar en la frontera afgano-paquistaní en Nangarhar, y Zaranj-Charbarhar que abarca la frontera afgano-iraní en Nimruz.

Los pueblos en auge son lugares de oportunidad, inversión y crecimiento rápido

Zaranj, la capital de la provincia de Nimruz, surgió como uno de estos pueblos emergentes tras la caída de los talibanes en 2001. Durante

las dos últimas décadas, los procesos de rápida acumulación [de capital], relacionados con el comercio lícito e ilícito, han estado acompañados de inversiones significativas en vivienda y servicios públicos en la ciudad.

En general, la provincia también se ha beneficiado del aumento de los vínculos comerciales entre India, Irán y Afganistán, lo que ha llevado a una mayor inversión nacional e internacional en carreteras y otras obras de infraestructura en la región.

Muchos cambios positivos han sucedido en la vida de las personas y estas se han vuelto más educadas [desde 2002]. Mi vida también ha cambiado, mi hija es profesora y le están pagando, yo tengo un salario también. Hoy, tenemos acceso a servicios como teléfono, internet y televisión, siempre hacemos uso de ellos y nos ponemos al día sobre lo que sucede en el mundo, y esto es un cambio positivo en nuestras vidas. *(Administrador de educación, distrito de Kang, Nimruz, 2019).*

A medida que el comercio regional en Nimruz se profundiza, los dividendos de las drogas ilícitas en la era post-2001 también han contribuido a la inversión privada, lo que ha generado la expansión de oportunidades sociales y económicas.

Los residentes de la ciudad de Zaranj se han vuelto más ricos a medida que algunos se han involucrado con los narcóticos; otros han abierto negocios en la ciudad y otros tienen trabajos en el gobierno [...] Durante el régimen Karzai, mis ventas subieron por haber más programas de desarrollo, más construcción y el hecho de que la gente compraba más materiales eléctricos de mi negocio. Estaba teniendo una buena ganancia que mejoró mi vida, así que expandí mi negocio y mi inversión. *(Electricista y comerciante, distrito de Kang, Nimruz, 2019).*

El crecimiento de los pueblos fronterizos en auge acarrea costos y disyuntivas

La rápida expansión de estas ciudades ha estado acompañada de disyuntivas claves para las personas que viven en el área y para la economía en general. Los pueblos en auge pueden ser lugares caóticos e inseguros, donde el control del comercio depende del acceso a los medios de violencia. En Nimruz, una nueva clase de élites que se lucra de los flujos comerciales ha ganado poder de manera gradual, asociado a la corrupción a gran escala, al despojo de tierras y a una desigualdad creciente.

Las personas adineradas en la provincia de Nimruz viven en la ciudad de Zaranj, y la mayoría de estas personas son comandantes yihadistas, oficiales gubernamentales, terratenientes y comerciantes de drogas ilícitas. *(Administrador educativo, distrito de Kang, Nimruz, 2019).*

El valor de la tierra en la ciudad de Zaranj ha aumentado a medida que la ciudad se ha cartografiado y los oficiales gubernamentales que usurparon la tierra la han vendido a grandes costos. [...] Los comerciantes de drogas y los oficiales gubernamentales involucrados en este negocio también se han vuelto ricos, pero la gente pobre se hace cada día más pobre. *(Excomandante de milicia, ciudad de Zaranj, Nimruz, 2019).*

Si bien Nimruz ha sido, durante décadas, un centro para el tráfico de drogas (hacia el vecino Irán) cultivadas en otras provincias del sur de Afganistán, el tráfico de personas ha crecido en la última década, atrayendo nuevos tipos de redes de contrabando provenientes de fuera de la provincia.

En Nangarhar, Torkham ha sido una ciudad fronteriza importante durante décadas, con su destino estrechamente ligado a la economía de la vecina Peshawar. El comercio ha sido el elemento vital de la economía local, al impulsar los ingresos del Gobierno, y proporcionar una fuente de inversión y soporte de los medios de vida y bienestar de la población fronteriza.

Pero los beneficios no se distribuyen equitativamente. De la misma manera que una pequeña élite se ha beneficiado del auge comercial en Nimruz, en Nangarhar un puñado de actores políticos bien posicionados se ha beneficiado de los contratos vinculados al oleoducto logístico militar que abastece a las fuerzas de la OTAN, las cuales están de paso por Torkham. Además, los negocios lícitos e ilícitos a pequeña escala están asociados con altos niveles de violencia, malas condiciones de trabajo y prácticas laborales explotadoras.

Si bien la aparición de pueblos fronterizos en auge puede proporcionar beneficios económicos a los habitantes, a menudo la riqueza acumulada a través del comercio es transitoria y efímera, y muchas élites invierten sus ganancias en las capitales o fuera del país.

Además, las disyuntivas asociadas con la vida en los pueblos fronterizos en auge pueden resultar costosas a largo plazo: se puede menoscabar la legitimidad pública, incitando así a un mayor apoyo a las fuerzas de oposición. En Nimruz, las comunidades fronterizas parecían satisfechas con el aumento de la inversión y la infraestructura del Gobierno central. Sin embargo, expresaban insatisfacción frente a unas élites que perciben como corruptas, como también frente a la rápida y creciente desigualdad a nivel provincial.

Nuestras expectativas del Gobierno central han cambiado... Desde que [el presidente Ghani] planeó construir la represa Kamal Khan, los residentes de Nimruz están muy felices. [...] No esperamos mucho del gobierno provincial, pues ellos son todos corruptos y su prioridad es su propio beneficio. *(Comerciante, ciudad de Zaranj, Nimruz, 2019).*

Una razón del crecimiento de la insurgencia talibana es la corrupción en el Gobierno. [...] Los gobernantes están involucrados en sobornos e interfieren en todo [...] eso decepciona a la gente pobre y causa que la insurgencia talibana crezca. *(Transportista y traficante de personas, ciudad de Zaranj, Nimruz, 2019).*

Myanmar

“Después del cese el fuego [...] empezó la construcción de carreteras y la tala de árboles. La heroína comenzó a llegar cuando vino más gente. [...] Muchos jovencuelos murieron por las drogas.”

Adulto mayor, residente en Chipwi, noreste del estado de Kachín, 2018





Granja de opio en la aldea de Tamu Khong, municipio de Chipwi, estado de Kachin, Myanmar. Foto de KRC.



Sobre los territorios fronterizos

Myanmar es el país más grande del Sureste Asiático continental, con una población de aproximadamente 53 millones de personas⁴⁴. Comparte sus fronteras con Bangladés, India, la República Popular China (incluido el Tíbet), Laos y Tailandia. Si bien el país cuenta con enormes recursos naturales, mucha de su población es paupérrima. El país ocupa el puesto 145 de 188 en el IDH, pero hay una variación considerable en los estándares de vida entre los prósperos y modernos centros urbanos y las áreas rurales más pobres⁴⁵.

Myanmar —antes conocido como Birmania⁴⁶— se define por su diversidad étnica, aunque predominan los bamar, el grupo poblacional más grande del país⁴⁷. Desde su independencia del régimen colonial británico en 1948, varios regímenes, uno tras otro, trataron de obtener un control más unificado sobre el país. Las luchas por la identidad étnica, así como por ideología política, han sido aspectos centrales de la historia poscolonial de Myanmar.

Los conflictos violentos persisten hasta hoy, a pesar de varios intentos de negociaciones de paz, incluidos los esfuerzos actuales para asegurar un cese el fuego a nivel nacional.

Este proyecto se centra en los estados de Kachin y Shan en el norte y noreste del país, respectivamente. Las élites de ambos estados fueron las partes

firmantes de un documento preindependentista llamado el Acuerdo de Panglong⁴⁸. En el acuerdo se consignan las aspiraciones de estas élites por un sistema político federal con autonomía local significativa. Estas aspiraciones se resquebrajaron después de la independencia, y ambas regiones entraron en conflicto armado entre grupos armados étnicos y contra el Gobierno nacional.

Los conflictos violentos persisten hasta hoy, a pesar de varios intentos de negociaciones de paz, incluidos los esfuerzos actuales para asegurar un cese el fuego a nivel nacional. Todavía existen disputas políticas subyacentes que siguen sin abordarse, con lo cual los periodos de frágil estabilidad han dado paso a nuevos ciclos de violencia y desconfianza.

El actual proceso de paz de Myanmar apunta a construir sobre los acuerdos de cese el fuego logrados con varias organizaciones armadas étnicas a finales de las décadas de los años 1980 y 1990. Estos ceses el fuego se diseñaron, en una parte, para permitir que las tierras fronterizas del país, particularmente las regiones limítrofes con China y Tailandia, se integraran más firmemente a la economía nacional.

Las élites políticas y empresariales de Myanmar y de todo el Sudeste Asiático repensaron los territorios fronterizos afectados por el conflicto como “tierras baldías”: tierras ricas en recursos vírgenes, destinadas a la extracción de recursos a gran escala, al comercio y a la creación de los corredores de infraestructura.

Los discursos de desarrollo nacional culpan al conflicto armado por el subdesarrollo y afirman que el desarrollo traerá la paz.

Sin embargo, este enfoque verticalista frente al desarrollo del territorio fronterizo dio como resultado la inversión en negocios depredadores, prácticas ambiental y socialmente destructivas y nuevas olas de militarización que han concentrado la riqueza y el poder en manos de un ajustado grupo de élites militares y empresariales.

Las comunidades locales son algunas de las más vulnerables a los problemas que los patrones cambiantes del consumo de drogas traen consigo, incluido el aumento en los niveles de inyección de heroína y el consumo de metanfetamina.

Hasta la fecha, aún sigue habiendo una mal formulada visión del futuro acerca de cómo sería el “desarrollo” en estas áreas. También, en muchos sentidos, este tiempo de “transición” ha tenido reveses e interrupciones. Esto es así, incluso con la aparición de un sistema político cuasi democrático posterior a 2010, la ejecución de un proceso de paz formalmente constituido en 2011 y la victoria electoral de Aung San Suu Kyi, en 2015.

Muchos factores han favorecido la persistencia de conflictos violentos en Myanmar. En los estados de Kachín y Shan, a las organizaciones armadas les es fácil hacer reclutamiento en la mayoría de las aldeas, a veces por la fuerza, pero a menudo porque los lugareños sienten la obligación de sumarse a la lucha etnonacionalista colectiva. Estos grupos también se benefician de otras cosas: (1) de la relativa falta de infraestructura que “acorta distancias”, que —de existir— les permitiría a los militares recuperar el control (carreteras, ferrocarriles, etc.); (2) de la proximidad a las fronteras y a las redes económicas y políticas transfronterizas.

Además de esto, las zonas altas de Kachín y Shan se adaptan perfectamente al cultivo de la adormidera, lo que ha proporcionado seguridad en los modos de vida en las zonas rurales empobrecidas, pero también se ha convertido en un sostén financiero para mantener vivo el conflicto armado.

En décadas recientes, la relación entre drogas y conflicto se ha tornado más compleja. El problema se ha extendido más allá del cultivo de opio, hasta llegar a la fabricación y el suministro de otras drogas como las metanfetaminas. Las comunidades locales son algunas de las más vulnerables a los problemas que los patrones cambiantes del consumo de drogas traen consigo, incluido el aumento en los niveles de inyección de heroína y el consumo de metanfetamina.

Paradójicamente, y muy importante, muchos creen que los daños relacionados con las drogas son fruto no del conflicto armado sino de unos acuerdos de cese el fuego fracasados y políticamente deshonestos, como también de la creciente presencia del Estado. Las políticas nacionales y económicas, dicen, se han concentrado en la pacificación de las poblaciones locales recalcitrantes y no en asegurar un desarrollo incluyente y sostenible. Por supuesto, otras personas del nivel nacional rebatirían este análisis.

Independiente de si esos puntos de vista son “correctos” o “incorrectos”, estos se han convertido en poderosas narrativas explicativas que merecen explorarse y comprenderse. Este es uno de los propósitos de esta investigación y de las publicaciones *Voces desde los territorios fronterizos*.



Jeringa usada en el norte del estado de Shan, Myanmar. Foto de SHAN.

Estado de Shan

El estado de Shan es el más grande de las catorce divisiones administrativas de Myanmar y cubre casi un cuarto del país. Gran parte de sus 60.000 millas cuadradas abarcan colinas empinadas cubiertas de bosque y profundos valles con algunas planicies elevadas, conocidas como la meseta de Shan. El estado de Shan comparte grandes fronteras internacionales con China y Tailandia, y una pequeña frontera con Laos. Su población, estimada en seis millones de habitantes, se compone de diferentes etnias e idiomas.

Su diversa población se extiende a lo largo de 55 municipios, casi 16.000 aldeas y de un puñado de pequeñas ciudades: Taunhhyi en el sur, Lashio en



Paso fronterizo entre Myanmar y China, Estado de Shan, Myanmar. Foto de SHAN.

el norte y Kengtung en el este. Sin embargo, la gran mayoría de las personas vive en áreas rurales, y la agricultura es su principal modo de vida. Luego de décadas de conflicto armado y poca inversión en servicios básicos e infraestructura, el estado de Shan sigue siendo pobre y muchos hogares rurales padecen inseguridad alimentaria.

Durante la época precolonial, la región se conformaba de múltiples principados autogobernados que perduraron en el sistema colonial de gobierno indirecto, por medio del cual los británicos dominaron la región.

A lo largo de la década de los años 1950, el nuevo Estado Independiente de Myanmar desmanteló estas antiguas estructuras de poder local como una parte de sus esfuerzos para consolidar y centralizar el control. Sin embargo, no pudo establecer instituciones que funcionaran y pudieran remplazar los sistemas que había eliminado. Además, las injusticias sociales, políticas y económicas se agravaron por un creciente militarismo bamar, lo cual erosionó aún más la legitimidad del Gobierno central.

La resistencia armada, que comenzó a finales de la década de los años 1950, creció rápidamente después de que, en 1962, el golpe militar del general Ne Win estableciera un Estado autoritario. El conflicto armado en todo el estado de Shan ha sido un conflicto profundamente fragmentado: hay múltiples grupos armados, diferentes entre sí y con fuertes líneas divisorias. La economía regional del opio se tornó en una fuente clave para el financiamiento de muchos grupos armados⁴⁹.

Durante las décadas de 1990 y 2000, una serie de acuerdos de cese el fuego, que a menudo incluyen

convenios informales sobre el comercio de drogas ilegales, crearon una frágil estabilidad en gran parte del norte y del este del estado de Shan. En contraste, amplias extensiones del sur y del centro del estado experimentaron campañas de contrainsurgencia violentas⁵⁰.

Desde la década de 1990, el norte del estado de Shan se ha convertido en el corredor comercial terrestre más importante de Myanmar, al conectar a Mandalay con la frontera con China.

En años recientes, estas dinámicas se han revertido: el norte del estado de Shan ha experimentado nuevos brotes de violencia, mientras el grupo armado más grande del sur del estado ha firmado el acuerdo gubernamental de cese el fuego a nivel nacional. Sin embargo, incluso durante los periodos de "cese el fuego", las poblaciones de los territorios fronterizos siguieron soportando múltiples formas de violencia vinculadas a continuos conflictos localizados, la militarización y el despojo.

El Gobierno central ha impulsado formas de control directas y militarizadas sobre ciertas áreas del estado de Shan de importancia estratégica y económica; en especial, el control sobre cruces fronterizos claves y sitios donde hay proyectos de desarrollo a gran escala. En otras áreas, el Gobierno ha recurrido a un enfoque más indirecto de gobernanza fronteriza. Este enfoque incluye la negociación de ceses el fuego y la creación de milicias respaldadas por el ejército⁵¹. Esto ha creado mosaicos de poder, compuestos por diversos grupos de actores, intereses y redes políticas y económicas locales, nacionales e internacionales.

Desde la década de 1990, el norte del estado de Shan se ha convertido en el corredor comercial terrestre más importante de Myanmar, al conectar a Mandalay con la frontera con China⁵². También se han generado grandes ingresos a través de la tala, la minería, los agronegocios (las concesiones de tierras a gran escala son principalmente para plantaciones de maíz, caucho y frutas), las represas hidroeléctricas y otros proyectos de infraestructura, como los oleoductos y gasoductos que unen Yunnan, en China, con puertos marítimos de aguas profundas en la costa occidental de Myanmar.

Muchos de estos proyectos forman parte de iniciativas más amplias con miras a profundizar la integración económica entre China y el Sudeste Asiático⁵³. El Corredor Económico China-Myanmar, el cual forma parte importante de la Iniciativa de la Franja y la Carretera de China, seguirá una ruta similar a los gasoductos antes mencionados. Estos ambiciosos planes de desarrollo están integrándose en áreas donde el conflicto armado sigue sin resolverse.

Grandes ingresos también siguen generándose por el tráfico de drogas. El estado de Shan produce más del 90 % del opio de Myanmar, el cual se cultiva principalmente en zonas montañosas empinadas y ha proporcionado un sustento importante para aproximadamente 200.000 a 300.000 hogares. Gran parte de este opio se convierte en la base para la morfina o la heroína dentro de Myanmar y luego se envía a China. China se ha convertido en el mercado principal para el opio de Myanmar después del crecimiento en el consumo de heroína en las décadas de 1990 y de 2000⁵⁴.

En las últimas dos décadas, el estado de Shan también se ha convertido en uno de los más grandes productores de pastillas de metanfetaminas del mundo: en Shan, el opio se conoce coloquialmente como "yama" o "yaba"⁵⁵, y más recientemente de cristal de metanfetamina o "hielo". El crecimiento de la producción de metanfetamina en Myanmar está estrechamente ligado al alza de producción y consumo de la droga en su país vecino, Tailandia. En 2003, el primer ministro tailandés, Thaksin Shinawatra, proclamó una guerra contra las drogas, lo cual aumentó los incentivos para mover la producción al otro lado de la frontera, en Myanmar.

Como se notará en los testimonios presentados más adelante, muchos habitantes del estado de Shan indican que el uso dañino de las drogas ilícitas y los problemas asociados están creciendo en sus comunidades, y ven el actual proceso como una oportunidad para empezar a abordar estos temas. Sin embargo, el involucramiento de las drogas dentro de la economía del estado de Shan y sus estructuras de poder hacen de esto algo más complicado.

Estado de Kachín

El estado de Kachín, el más septentrional de Myanmar, comparte frontera con Yunan y el Tíbet, Región Autónoma de China, así como con los estados Assam y Arunachal Pradesh del norte de India. De acuerdo con el censo de 2014, el estado de Kachín tiene una población cercana a 1,7 millones de personas.

Sin embargo, el censo fue un ejercicio controversial y grandes áreas del estado, que aún no están bajo el control del gobierno de Myanmar, quedaron excluidas del conteo. No todos aquellos que viven en el estado de Kachín se identifican como kachinos, y la región ha experimentado gran inmigración de otros lugares de Myanmar en años recientes. Étnica, lingüística y culturalmente es un estado diverso, aunque el colectivo de comunidades que se identifican como kachinos reclaman la región como su tierra ancestral.

El subdesarrollo de la región se relaciona con su marginalización del centro político.

Según el índice de pobreza multidimensional del Banco Mundial, Myitkyina, la capital del estado de Kachín, es relativamente próspera incluso en comparación con otros importantes centros urbanos del país. Mientras tanto, las áreas rurales, especialmente aquellas en el extremo norte, siguen siendo paupérrimas. La prosperidad relativa de Myitkyina es parcialmente producto de su ubicación estratégica en el punto más al norte del río Irawadi y de sus conexiones con las históricas rutas comerciales transregionales — desde China y Tailandia al este y desde India hasta el oeste— y de una inmigración asociada a los negocios provenientes de baja Birmania, China y otros lugares.

Sin embargo, la franja de crecimiento económico alrededor de Myitkyina es muy estrecha: la infraestructura ferroviaria no va más allá de Myitkyina y, a pocas millas por fuera de la ciudad, las carreteras del norte y del oeste son deficientes o inexistentes. Lo más importante: hay casi una total ausencia de pequeñas y medianas industrias de propiedad local. Esto a pesar de la riqueza natural de la región, incluidos los extensos bosques explotados para la obtención de madera, jadeíta, oro y otros metales preciosos.

El subdesarrollo de la región se relaciona con su marginalización del centro político. Los conflictos armados han sido tanto causa como efecto de esa marginalización. Los retos importantes para la legitimidad del Gobierno de Myanmar comenzaron con la fundación del Ejército por la Independencia de Kachín (KIA, por su sigla en inglés) en 1961. En 1963, la región ya estaba en rebelión generalizada. El conflicto fue continuo durante los 30 años siguientes, con baches ocasionales cuando se buscaron acuerdos políticos, que eventualmente fracasaron.



Mineros de jade inyectándose heroína en Phakant, estado de Kachin, Myanmar. Foto de KRC.

Hasta la década de los años 1980, los enfrentamientos más significativos estaban ligados al conflicto triangular entre el ejército de Myanmar, el Partido Comunista de Birmania (CPB, por su sigla en inglés) —que China ha apoyado ampliamente— y el KIA. En áreas cercanas al territorio controlado por el KIA, también surgieron otras organizaciones armadas de corte étnico, así como milicias más pequeñas como el Nuevo Ejército Democrático-Kachín (NDA-K, por su sigla en inglés). Muchas de estas organizaciones armadas han estado involucradas en la economía regional del opio, aunque el KIA luego cambió su posición y eliminó el cultivo de la adormidera, al buscar apoyo internacional.

En 1994, la Organización por la Independencia de Kachín (KIO, por su sigla en inglés) (de la cual el KIA es el ala militar) y el ejército de Myanmar firmaron un acuerdo de cese el fuego. Esto desembocó en diecisiete años de paz armada y de esperanza generalizada por un mejor futuro. El acuerdo también generó un aumento dramático en la tala y la minería, las cuales han causado un aumento en el daño ambiental,⁵⁶ y han favorecido grandes desarrollos agroindustriales (en especial de cultivos de banano y caucho), que presuponen la expulsión de los lugareños de sus tierras.

Adicionalmente, muchos habitantes creen que el cese el fuego llevó al incremento en los daños causado por el uso de las drogas. Estos puntos ayudan a explicar el regreso del KIO al conflicto, en 2011, contra el cada vez más fortalecido ejército de Myanmar⁵⁷. Aquel fue un tiempo en el que los habitantes de otros lugares del país esperaban alcanzar una transición política nacional. El estado de Kachín fue excluido de oportunidades relacionadas, como el aumento de los flujos de ayuda al país desde 2015 en adelante, ya que los actores internacionales, principal y únicamente, trabajaban a través de las agencias gubernamentales de Myanmar.

Este contexto hizo muy difícil para la gente de Kachín hacerse oír su voz a nivel nacional e internacional, especialmente en lo relacionado con sus experiencias de daños por las drogas. Esto es algo que se espera aportar a través de este trabajo investigativo.

Comentarios sobre la metodología

Los mensajes claves que se presentan a continuación se basan en los hallazgos de más de 600 entrevistas realizadas por el equipo de investigación en todo el estado de Kachín y del estado de Shan, en 2018 y 2019.

Los estados de Shan Kachín son regiones de gran diversidad étnica y lingüística. No obstante, más allá de esta definición territorial de “Kachín” y “Shan”, este proyecto trabaja con organizaciones que se autoidentifican como pertenecientes a la etnia Kachín y Shan (las cuales son rúbricas de identidad complejas). Esto necesariamente acarrea oportunidades y limitaciones relacionadas a cuánto se puede lograr en una investigación que abarque las múltiples dinámicas lingüísticas y étnicas de estas dos grandes áreas.

Gran parte de la investigación realizada por el equipo se hizo con poblaciones que se identifican como Shan o Kachín. Aunque algunas entrevistas se realizaron con poblaciones que no se identifican propiamente como Shan o Kachín o que no hablan sus respectivas lenguas, vale la pena enfatizar que la investigación se concentra principalmente en dar cuenta de las perspectivas de las poblaciones que se identifican como Shan o Kachín, dentro de estas amplias unidades territoriales. En vista de la poca investigación respecto a estas problemáticas con estas perspectivas, el presente trabajo constituye una contribución significativa al conocimiento.

El trabajo de campo se centró principalmente en entrevistar a personas que no se autoidentifican ni son identificados por terceros como élites políticas, civiles o militares. Algunos encuestados pueden tener roles claramente politizados o roles con alguna autoridad en la política local. Pero la investigación ofrece, en cada uno de los casos, un conjunto de reflexiones críticas, localmente contextualizadas, sobre los tipos de “paz” y “desarrollo” que en realidad se materializan en los territorios fronterizos del país, y sobre las formas en que las drogas se han abierto paso dentro de la vida cotidiana de personas “comunes”.

Hay una amplia gama de reflexiones claves que emergen de esta investigación y que no pudo cubrirse en el espacio disponible de este informe. De manera que no se centró en resaltar las reflexiones que se repiten en las entrevistas, las cuales tuvieron un fuerte eco en los talleres de seguimiento con los participantes de la investigación y las audiencias locales, y que el equipo de investigación considera importantes para relacionarse con audiencias más amplias sobre los temas de drogas en Myanmar.

Mensajes principales

1. Los niveles crecientes del daño producido por las drogas son un factor determinante en la manera en que las personas de los estados de Kachín y Shan experimentan los ceses el fuego

Recurrentemente los tomadores de decisiones políticas sugieren que la clave para enfrentar las economías de drogas ilícitas reposa en la reducción de los niveles de conflicto armado, en fortalecer el Estado y en integrar tanto económica como políticamente las regiones “marginadas”. Esta narrativa política se basa en las ideas de que la construcción de paz, la construcción del Estado, el desarrollo económico y las estrategias antinarcóticos se fortalecen mutuamente. Sin embargo, estas suposiciones son frecuentemente impugnadas desde la perspectiva que tienen las poblaciones de los territorios fronterizos en Myanmar.

Aunque los acuerdos de cese el fuego han ayudado a reducir los niveles de conflicto armado directo en muchas áreas, dejaron a las poblaciones en estado de vulnerabilidad frente a la “violencia lenta” que produce el uso indebido de las drogas. En efecto, la gente en todo Kachín y Shan expresa su preocupación de que los daños asociados con las drogas han crecido precisamente a raíz de los ceses el fuego y del desarrollo económico resultante. De esto hacen eco las reflexiones de dos hombres mayores que cuentan cómo su ciudad natal, Chipwi, en el noreste del estado de Kachín, cambió después de la firma del cese el fuego con el KIA, en 1994.

Cuando me establecí en Chipwi en 1973, sabía que había opio, pero nunca lo había visto con mis ojos. Por ese tiempo, nunca me topé con ningún drogadicto. Tampoco había oído de la heroína ni de la yaba en el área. Después del cese el fuego, la Asia World Company vino al lugar, luego empezó la construcción de carreteras y la tala de árboles. La heroína comenzó a llegar cuando vino más gente. Después, los jóvenes lugareños empezaron a consumir diferentes tipos de drogas. Muchos jovencitos empezaron a inyectarse heroína. Muchos de ellos murieron por las drogas. (Adulto mayor, residente en Chipwi, noreste del estado de Kachín, 2018).

Desde el periodo del cese el fuego los chinos llegaron, las personas podían desplazarse más fácilmente y las drogas llegaron a chorros. Sí, el cese el fuego fue algo bueno, pero, desde el cese, las drogas se volvieron más fáciles de conseguir. Yo lo veo de esa manera. En el pasado, el opio solo era para las personas mayores. Mi tío paterno consumió opio por 50 años. [...] Ahora,

los muchachos consumen drogas de diferentes maneras —inyectándose, inhalándolas—. De hecho, anoche un joven murió de drogadicción en esta aldea. Planeo ir a su funeral. Tenía apenas 30 años. (Adulto mayor, residente en Chipwi, noreste del estado de Kachín, 2018).

Por todo el estado de Shan la gente hace asociaciones entre los ceses el fuego y un aparente aumento en la producción y consumo de drogas ilícitas en el área. Esto se refleja en el testimonio siguiente que trata de cómo la situación cambió con el cese el fuego Pa-O, en el sur del estado de Shan.

En el pasado, había pocos cultivos de adormidera en algunas de las aldeas cerca de Taunggyi, en Pinlaung y Hsihseg. Sin embargo, los acuerdos de cese el fuego permitieron que, con el cese el fuego, los grupos militares tomaran control de ciertos territorios. [...] Ya que estas regiones están bajo su control, los cultivos de adormidera y las drogas estaban permitidos sin restricciones. Ya que los impuestos aplican a los campesinos locales por su tierra y sus cultivos, la gente cultiva adormideras, porque pueden ganar dinero más rápido que si lo hacen con otro tipo de cultivos. De esta manera la expansión de las drogas aumentó. (Político local, Taunggyi, estado de Shan, 2019).

La minería (de oro, ámbar, minerales raros y otros minerales), la tala y las operaciones de la agroindustria se han expandido por todo el norte de Myanmar desde la década de 1990 en adelante. Un tema común de las entrevistas fue la asociación entre estas formas de desarrollo económico y el empeoramiento de los daños causados por las drogas. Las reflexiones de un joven trabajador en las minas de ámbar en Danai —un pueblo del oeste del estado de Kachín, rico en recursos y afectado por el conflicto— captura este punto de manera clara.

En las minas de ámbar, muchos mineros consumen drogas. Yo empecé a consumirlas desde que el trabajo en la mina se volvió tan extenuante. Cuando inhalé la droga, me puse más enérgico. Utilicé heroína, yaba y cosas parecidas. Dependía de la cantidad de dinero que ganaba. Con el tiempo vi más y más mineros de ámbar volverse drogadictos. Aquí, muchas personas mueren por el consumo de drogas. Aquí es difícil conseguir opio. Pero la

heroína y la yaba se encuentran fácilmente. Muchos mineros destruyeron sus vidas debido a lo que acarrea trabajar en las minas. (Minero, aldea de Danai, estado de Kachín, 2018).

La conexión entre las drogas y las industrias extractivas no es nueva: el consumo problemático de drogas siempre ha existido en las infames minas de jade de Hpakant en el estado de Kachín. No obstante, las industrias extractivas se expandieron ampliamente en el estado de Kachín durante las últimas décadas, a raíz de la estabilidad generada por los ceses el fuego y la apertura del país al comercio y la inversión.

Esto conllevó la mejora de las carreteras, la aparición de varios pueblos con economías de bonanza y un aumento en la circulación de efectivo, lo que a su vez ha facilitado y contribuido a un consumo de drogas generalizado. Un residente de una aldea a la orilla del río Irawadi, en el municipio de Myitkyina, compartió sus observaciones acerca de las conexiones que hay entre las drogas y el desarrollo.

En el pasado, había algunos consumidores de drogas en el pueblo. Pero la situación empeoró cuando se les permitió a los negociantes chinos hacer minería de oro a lo largo de la ribera. Difundieron drogas como les daba la gana. Contrataban lugareños como jornaleros. En ese momento, el pago era tan solo 500 kyats diarios. Solo después de trabajar por diez días, podíamos ganar 5.000 kyats. No era mucho...

Pero los nuevos negocios del oro ofrecían 60.000 kyats al mes. [...] Ellos trabajaban a lo largo de la ribera con máquinas. Si ellos no usaran máquinas, aún podríamos hacer nuestras pequeñas exclusas para extraer oro. Pero ellos se llevaron todo lo que podían con sus grandes máquinas. Estuvieron

trabajando aquí hasta 2006 y lo destruyeron todo. No solo destruyeron la tierra y el medio ambiente, sino también la comunidad del pueblo. [...] De modo que muchos jóvenes empezaron a trabajar y el opio se les ofrecía gratis. (Residente local, municipio de Myitkyina, 2018).

Mientras las personas en el estado de Kachín ven el consumo de heroína como la principal causa de preocupación, la mayoría de las personas entrevistadas en el estado de Shan vieron las metanfetaminas ("yaba") como la problemática de drogas más urgente en sus comunidades. La gente dice que yaba les brinda a los usuarios más energía y resistencia para aguantar largas jornadas en trabajos extenuantes. En consecuencia, el consumo de metanfetaminas se ha arraigado profundamente en la cultura laboral de trabajos manuales y poco calificados; esto se observa en las reflexiones de una mujer entrevistada en Hsipaw, en el norte del estado de Shan.

Mi esposo siempre consume drogas cuando va a trabajar. El jefe dice que si ellos [los trabajadores] consumen drogas, pueden trabajar más duro. Cuando he ido a vender naranjas, los traficantes venden píldoras como si fuera un mercado normal. Todo el mundo puede comprarlas fácilmente. (Campesina, municipio de Hsipaw, norte del estado de Shan, 2018).

Los vendedores de drogas van tras los jornaleros porque estos tienen dinero para gastar. Algunos entrevistados afirmaron también que los dueños de los negocios de minería, tala de árboles y plantaciones agrícolas promovían y facilitaban el consumo de drogas entre sus empleados, para que pudieran trabajar más duro y por más tiempo. Esto se muestra en los comentarios de un pastor cristiano sobre el consumo de drogas en el municipio de Kengtung, en el este del estado de Shan.



Centro de rehabilitación de drogadictos, Phakant, estado de Kachin, Myanmar. Foto de KRC.

Los dueños de los cultivos contratan empleados para que trabajen sus cultivos y les pagan tanto con dinero como con yaba. Si esto no pasara, pocos serían los trabajadores que querrían trabajar para ellos y el trabajo de ocuparse de los cultivos no se terminaría a tiempo. De manera que los empleadores ponen yaba en latas de refrescos y convidan a sus trabajadores a tomarlos. Ahora, los trabajadores no se atreven a tomar refrescos ni agua del dueño de la plantación, ellos traen su propia agua. (*Pastor cristiano, municipio de Kentung, este del estado de Shan, 2019*).

Muchos otros testimonios destacan la manera en que los dueños de negocios proveen drogas para atraer y mantener trabajadores a la luz de los crecientes niveles de dependencia a las drogas. Un trabajador del municipio de Loilem, al sur del estado de Shan, dio sus reflexiones acerca de esta práctica y su impacto en las familias de los trabajadores en el siguiente testimonio.

El dueño del negocio minero daba pastillas de yaba a los trabajadores de la cantera, diciéndoles que las drogas los podían hacer más fuertes y saludables. De esta manera, esos trabajadores se volvieron adictos a las drogas. Esto es el principio de los problemas relacionados con las drogas entre las familias de esos trabajadores. Algunas veces ellos ni siquiera podían contratar trabajadores, si no podían proveerles estas drogas...

Al principio, a los trabajadores se les daba una o dos pastillas, pero luego, cuando se volvían adictos, compraban las drogas con todo el dinero que hacían cada día, dejando así de proveer a sus familias... (*Minero, municipio de Loilem, sur del estado de Shan, 2018*).

También es importante tener en cuenta el vínculo entre las drogas y las estructuras de seguridad y autoridad, que ha acompañado los cambios económicos y la creciente presencia del Estado en las regiones fronterizas bajo los ceses el fuego. Esto se tratará más a fondo en los resultados posteriores del proyecto.

Las milicias respaldadas por el ejército (comúnmente llamadas *pyithusit*, que se traduce como “milicias populares”) se han desplegado como fuerzas de contrainsurgencia para vigilar a las poblaciones locales y asegurar sitios para el desarrollo económico. A cambio, estas milicias tienen permiso *de facto* para administrar empresas legales e ilegales. Este vínculo entre las drogas y las milicias se evidencia en el siguiente testimonio de un hombre de unos sesenta años de edad que reflexiona sobre los cambios que presencié en el este del estado de Shan durante los últimos veinte años.

Los empresarios podían producir drogas libremente debido a las “*pyithusit*” [o milicias de la gente]. Las producen en áreas bajo el control de las “*pyithusit*” y las “*pyithusit*” también están respaldadas por el ejército. [...] La milicia tiene su gente y sus familias. Quieren entonces el desarrollo de su sector, por lo que tienen que ganar dinero. Por esta razón cooperaron con los empresarios. Decimos que los narcotraficantes pueden burlar a la milicia. Le pagan comisiones a la milicia para que los proteja. [...] Desde mi punto de vista, mientras haya grupos milicianos, las drogas no pueden desaparecer. (*Residente de Tachilieik, este del estado de Shan, 2019*).

Una madre de 48 años de edad también reflexionó sobre el impacto del consumo de drogas en su aldea, en el municipio de Lashio, un área controlada por la milicia en el norte del estado de Shan.

La milicia lo controla todo en nuestro pueblo. Hay demasiadas personas que se enriquecen por la venta de drogas. Algunos venden anfetaminas y construyen una casa grande. Tengo cinco hijos. La mayoría de ellos se fueron a China. El que tiene problemas en sus piernas se queda en casa. Como tememos que nuestros hijos se vuelvan adictos, mis hijos y los de muchos aldeanos van a trabajar a China. Si se quedan en el pueblo, se convertirán en consumidores de drogas. El Gobierno nunca viene a arrestar ni a las personas que consumen drogas ni a los vendedores. (*Campesino, municipio de Lashio, parte norte del estado de Shan, 2018*).

Estos breves testimonios permiten entender de mejor manera las experiencias cotidianas que las personas tienen con el “desarrollo” económico y con la autoridad política durante los ceses el fuego de las décadas de 1990 y 2000. Los testimonios demuestran la necesidad de sensibilizar la comprensión de cómo se perciben los ceses el fuego desde lo popular a lo largo de los estados de Kachín y de Shan; y de cómo estas percepciones moldean las discusiones en la sociedad civil sobre las soluciones potenciales a los daños causados por las drogas y los obstáculos que hay para realizar esos cambios.



2. La producción de opio es un elemento esencial de los modos de vida de las familias pobres. Pero los patrones cambiantes del consumo de drogas están creando nuevas formas de vulnerabilidad y pobreza

Gran parte de la atención de la comunidad internacional que trabaja en temas de drogas en Myanmar sigue enfocada en parar la producción y el tráfico de opiáceos hacia los mercados extranjeros. Sin embargo, muchas comunidades, en los territorios fronterizos de Myanmar, consideran que el aumento de las tasas de consumo de heroína y metanfetamina es un problema más apremiante que el de los niveles de cultivo de opio.

Las poblaciones en las áreas de cultivo de adormidera a menudo asocian el opio con varios impactos positivos. El cultivo de la adormidera proporciona una fuente confiable de ingresos y, por tanto, mejora la seguridad alimentaria. También genera dinero en efectivo para pagar servicios de educación y salud. Además, el opio también se utiliza para el tratamiento de diversas dolencias. En contraste, las poblaciones de todo el estado de Kachín y el estado de Shan consideran que el aumento del consumo de heroína y metanfetamina tiene un impacto más dramático e inmanejable en la sociedad que el opio. Esto se refleja claramente en las apreciaciones de un administrador local, en Lashio, quien cuenta del cambio de la situación de las drogas desde la época de su juventud, en la década de 1960, hasta la actualidad.

Cuando éramos jóvenes, el opio era muy importante. El que consumía opio lo hacía porque era rico. Los familiares y amigos siempre preguntaban cuánto opio tenía uno. Si teníamos mucho, significaba que éramos ricos. En el pasado, las personas que consumían drogas se acostaban tarde, pero se levantaban temprano para ir a trabajar y lo hacían bien. [...] Podían trabajar en el campo todo el día sin descansar, si obtenían suficiente opio. Usar WY [metanfetamina] es más fácil que el opio ...

La gente solía pagar 5.000 kyats por una pastilla. Solo algunas personas las consumían. Pero ahora, con 500 kyats puedes comprar tres píldoras, de manera que todo el mundo puede costearlas. Hay más drogadictos ahora. Algunos de los drogadictos fueron enviados a otros lugares para que escaparan de este ambiente. Otros que permanecieron por fuera más de 10 años, a su regreso, volvieron a consumir drogas. Antes, las drogas solo estaban en el centro, pero ahora las puedes encontrar en cada pueblo y en cada ciudad. (Administrador local, Lashio, norte del estado de Shan, 2018).



Campos de amapolas a lo largo de la frontera con China, norte del estado de Kachín, Myanmar. Foto de KRC

Las opiniones de este tipo también fueron comunes en todo el estado de Kachín, como se muestra en el siguiente testimonio de un adulto mayor, en Chipwi.

En el pasado, aunque los consumidores de opio lo usaban también trabajaban, consumir opio incluso les ayudaba a trabajar más. Pero ahora vemos que los consumidores de drogas se inyectan. Como las agujas y las jeringas se consiguen fácilmente, los niños comienzan a consumir drogas. [...] Diferentes tipos de drogas están inundando el área de Chipwi, y en el futuro, preveo que el problema de la drogadicción será aún peor. *(Adulto mayor, residente de Chipwi, noreste del estado de Kachín, 2018).*

Aunque a veces se ignoran, estos patrones cambiantes del consumo de drogas se han vuelto una dimensión de la pobreza y vulnerabilidad que experimentan muchas familias a lo largo de los estados de Kachín y Shan. Aproximadamente, una de tres personas en estos estados vive por debajo de la línea de pobreza nacional⁵⁸. Los impactos materiales, físicos y emocionales del consumo dañino de las drogas han significado mucho para muchas familias que ya están luchando contra la pobreza, en formas que frecuentemente tienen dimensiones específicas de género. Entre estas, están los costos adicionales que tienen las familias debido al uso de drogas, según lo dice una mujer de unos treinta años de edad de Kengtung, en el este del estado de Shan.

Soy la primera de cinco hermanos y la única mujer. El resto son hombres. El hermano que nació después de mí tomó muchas drogas. Mi segundo hermano se inyectó heroína y se volvió adicto. Le pedí a mi amigo que lo enviara a Loi Tai Leng [la sede del Ejército del Estado de Shan / Consejo de Restauración del Estado de Shan]. Descubrimos que tiene VIH y necesita tomar medicamentos...

Mientras mis hermanos consumían drogas, mi padre y yo éramos los únicos que sosteníamos el hogar. Mis dos hermanos menores todavía estaban en la escuela. En ese entonces, mis dos hermanos, los consumidores de drogas, muchas veces robaban propiedades como motocicletas. Cada vez que lo hacían, tenía que indemnizar a las personas que mis hermanos robaban. Yo solamente contaba con un pequeño salario. Después de pagar la indemnización, a veces no había nada que comer en casa. *(Trabajadora de organización de sociedad civil, Kentung, este del estado de Shan, 2019).*

El consumo de drogas también puede hacer que los miembros de una familia pierdan sus ingresos, ya sea porque se vuelvan incapaces de trabajar, porque los salarios se usen para comprar drogas, o porque se vendan las pertenencias para comprarlas. Estos problemas se ilustran claramente en el siguiente testimonio de una mujer en el municipio de Namtu, en el norte del estado de Shan.

Las drogas destruyeron nuestra familia. Definitivamente no me gusta. Nunca seremos exitosos. Aun con un carro o cosas valiosas, pronto no tendremos nada. Incluso si tuviéramos solamente 1 kg o 2 kg de arroz, él [mi esposo] lo cambiaría por drogas. Él comenzó [a consumir drogas] cuando nuestro primer hijo había muerto; él estaba triste. Sus amigos le dieron drogas. Él me dijo que, si consumía, lo haría sentir mejor. Yo le dije que no consumiera, porque no teníamos dinero como otras personas. Llevamos casados 14 o 15 años, pero nuestras vidas no han mejorado...

Él se fue al ejército de Loi [Ejército de Liberación Nacional de Ta'ang] para suspender el consumo por un año. Cuando volvió a casa, llegó con más peso y más apuesto, pero después de que salió con sus amigos, consumió de nuevo. Cuando trató de trabajar, le dolió el estómago, de manera que volvió a casa y me pidió dinero para drogas y descansó. Incluso hipotecó la casa por 60.000 kyats. Trabajó en la granja por 15 días, pero solamente me dio 300 kyats [US\$ 0,20] para el sostenimiento de su hija. Quiero que sea una buena persona y que trabaje como otras personas y que mejore la situación familiar, pero no lo hace. *(Campesina del municipio de Namtu, norte del estado de Shan, 2018).*

Un campesino de Kachín, oriundo del municipio de Mogaung, también describió cómo el consumo de drogas erosiona las relaciones familiares y debilita las redes de apoyo que tanto ayudan a las familias cuando pasan momentos difíciles.

Han pasado 20 años desde que consumo opio. Tenía 18 años de edad en ese entonces. Empecé a consumir heroína hace unos cuatro o cinco años. Me casé cuando tenía 36 años. Mi esposa me aguantó por un tiempo después de que supo que era un drogadicto. Tuve dos hijos con ella. Cuando me volví a casar, paré de consumir por un tiempo. Pero la situación empeoró. He ido a centros de rehabilitación en Yangon. También fui a centros de rehabilitación en zonas controladas por el KIO. Pero mi familia se hizo pedazos...

Desde que me volví drogadicto, mi esposa se marchó al extranjero. Mis hijos ahora viven con mi tía paterna... Así que mi vida dejó de tener sentido. Después de eso, comencé a usar heroína nuevamente. Alquilé nuestra vaca y con el dinero compré drogas. Mis hermanos también me dijeron que mientras sea un drogadicto no me aceptarán. Solo tengo a mi tía cuidando de mí. Ella es la que cuida a mis hijos. Ella vive de la pensión del gobierno. En el pasado estuve bastante deprimido e incluso pensé en suicidarme. *(Campesino del municipio de Mogaung, estado de Kachín, 2018).*

También se percibe que el empeoramiento de los niveles de consumo de drogas ha socavado la solidaridad comunitaria y los mecanismos de apoyo mutuo que en el pasado prestaron ayuda a los hogares en momentos de necesidad o cuando necesitaban ayuda en la gestión de los costos de ciertos eventos como bodas y funerales. Un líder de la organización de la sociedad civil Pa-O describió esta situación en la siguiente entrevista.

Todas las aldeas tienen sus propias reglas, reglas que hay que seguir. En mi pueblo, todas las personas jóvenes deben hacer servicio social en la comunidad. Si tienes 16 años o terminaste la escuela, automáticamente te vuelves miembro del grupo de trabajo social del pueblo. En el grupo tenemos nuestras propias reglas, y si tú no sigues las reglas, no te ayudamos...

Si te casas, tampoco te ayudamos con el matrimonio o cosas por el estilo. Estas reglas tratan de desincentivar el consumo de drogas en los jóvenes. De acuerdo con esta regla, si consumes drogas debes marcharte del pueblo. [...] Ellos controlan la situación de esta manera. Pero ahora la situación es muy difícil. En algunos pueblos la mayoría de los muchachos consumen drogas. Tenemos la regla, pero no se sigue. (Líder de una organización de la sociedad civil del municipio de Taungyyi, sur del estado de Shan, 2018).

El consumo nocivo de drogas se ha visto como un problema limitado a los sectores de la población que están en ciertas áreas de riesgo; por ejemplo, los trabajadores varones en áreas mineras. Pero ahora

la gente lo percibe como algo que forma parte de la vida cotidiana y que afecta a un grupo amplio de la sociedad, incluidas las mujeres y los niños. Esta fue una narrativa común en un sinnúmero de entrevistas. Los comentarios hechos por un líder comunitario de Mong Pan en el sur del Estado de Shan lo ilustran.

Hoy día, la yaba puede encontrarse donde sea. Antes, el precio de una píldora de yaba era de 1.800 kyats. Ahora, tres o cuatro píldoras pueden comprarse por 1.000 kyats. Normalmente, un estudiante pobre tiene entre 200 y 500 kyats, mientras que los de familias adineradas tienen más o menos entre 500 y 1.000 kyats. El hijo de un profesor de octavo grado se volvió adicto y sus padres han estado desconsolados por ello. El chico explicó que él se volvió un drogadicto porque podía comprar una píldora de yaba con tan solo 200 kyats. (Líder comunitario del municipio de Mong Pan, sur del estado de Shan, 2018).

Estos testimonios permiten ver más de cerca la problemática del consumo de drogas y cómo se ha vuelto una dimensión determinante de la pobreza y la vulnerabilidad a lo largo de los estados de Kachín y de Shan. Así, las intervenciones que apuntan a contrarrestar la pobreza y mejorar los modos de vida requieren prestarle más atención al impacto del consumo de drogas. Esto crea retos y la necesidad de respuestas más matizadas. En muchas regiones de tierra alta, el cultivo de opio sigue siendo esencial para las estrategias de sostenimiento de muchos hogares pobres. Al mismo tiempo, los crecientes niveles del consumo de drogas, en especial la heroína y las metanfetaminas, han presionado a familias y comunidades.



Granja de amapolas en el municipio de Chipwi, estado de Kachin (KRC).

3. Los jóvenes se han vuelto particularmente vulnerables a los daños relacionados con las drogas, en los territorios fronterizos de Myanmar

El impacto del consumo de drogas en los jóvenes⁵⁹ es una preocupación particular en todo el estado de Shan y en el de Kachín. Aunque es difícil de cuantificar, existe una fuerte impresión de que los jóvenes se afectan de manera desproporcionada por las drogas y que, en los próximos años, esto tendrá un impacto perjudicial y significativo en la sociedad. El consumo de drogas entre los niños (a veces tan jóvenes como de once o doce años de edad) y los adultos jóvenes se atribuye comúnmente a una combinación de ingenuidad, bajos niveles de educación, falta de conocimiento sobre las drogas y la ausencia de supervisión familiar.

Esto es especialmente cierto si los niños tienen que viajar a la escuela, están estudiando en la universidad o si sus padres han migrado por trabajo. Además, la presión de sus compañeros (especialmente entre varones jóvenes) y la inclinación natural de la juventud a explorar y experimentar cosas nuevas cumplen un papel decisivo en esta problemática. Todos estos factores están presentes en un ambiente en el que las drogas son accesibles y baratas. Un hombre birmano de unos veinte años, oriundo de Taunggyi, sintetiza en sus palabras algunos aspectos de esta problemática, haciendo así eco de las experiencias de muchos otros jóvenes entrevistados.

Tenía veinte años y estaba en décimo grado cuando empecé a consumir opio. Es natural que la juventud quiera probar de todo. Así como el cigarrillo y el alcohol, el opio era accesible. He consumido por ocho años. Lo tomaba con jarabe para la tos. Se conocía como "la fórmula". Al principio la consumía esporádicamente. Luego, empecé a consumirla todos los días...

La sensación era fuerte y me hacía sentir mareado al principio. Pero de todos modos era placentera, distinta de estar borracho con alcohol. Pasó el tiempo y se volvió una carga económica y social. De modo que decidí parar. Durante la primera semana, deliraba. Cuando fui a la clínica privada, la medicina desintoxicante no fue suficientemente fuerte. Entonces volví a consumir. Luego, fui a una clínica diferente. De igual modo, volví a consumir drogas. (Residente del municipio de Taunggyi, sur del estado de Shan, 2018).

Muchas entrevistas llaman la atención por la facilidad con que los jóvenes pueden acceder a las drogas, comparado con lo difícil que les resulta encontrar apoyo. Esto es especialmente cierto a las afueras de las ciudades principales como Taunggyi, donde el acceso a tratamientos es muy limitado. La desesperación de las familias, sumada a la falta de educación y servicios,

ha expuesto a la juventud a peligros mayores. Un trabajador de un centro de tratamiento de drogas en Tachilek describió la situación de algunos pacientes de áreas rurales en la siguiente entrevista.

La adicción de estos jóvenes era tan seria que, en algunos casos, sus padres los amarraban antes de que ellos pudieran buscar [...] ayuda de las autoridades, a quienes no tienen idea ni de cómo encontrar ni de qué forma acercarse. Finalmente, ellos encontraron la forma de llegar a nosotros y pudieron ingresar su paciente a nuestro centro de rehabilitación. Apenas llegan aquí, puedes ver las infecciones que tienen en las heridas producidas por estar sus muñecas y manos amarradas. (Empleado del centro de tratamiento de drogas, en Tachilek, este del estado de Shan, 2019)

Las escuelas y las universidades se han vuelto sitios comunales para el consumo de drogas, lo que ha acrecentado, particularmente, los daños que estas producen en las personas jóvenes. En el siguiente testimonio, un hombre que empezó a consumir heroína mientras estudiaba en la Universidad de Monyin describió la situación de las drogas en el campus.

El consumo de drogas en el campus universitario se complicó alrededor de 2005. Uno solía encontrarse jeringas y agujas usadas disgregadas por los baños y por arbustos en la parte trasera del campus universitario. Ves la parte trasera del campus...

La heroína es ampliamente disponible, aunque no siempre. Algunos días puede encontrarse una multitud reunida por ahí. El campus se ha convertido en un lugar favorito para los traficantes de drogas también. Algunos traficantes venían de lejos a vender en moto. Ponían la heroína en un pitillo de plástico. Se podía comprar por 1.000 o 2.000 kyats. (Alumno de la Universidad de Monyin, estado de Kachín, 2018).

Los jóvenes de zonas rurales suelen viajar largas distancias, cada día, para asistir a la escuela y a la universidad, o viven en pensiones durante el periodo escolar. Esto se ha vuelto cada vez más común desde los ceses el fuego, ya que la movilidad mejoró con la disminución de los niveles de conflicto armado. El resultado es que más jóvenes pudieron acceder a la educación, pero también experimentaron una mayor exposición a las drogas ilícitas. Esta es solamente una de varias razones por las cuales las personas expresan frustración y resentimiento por el legado que dejan los ceses el fuego.

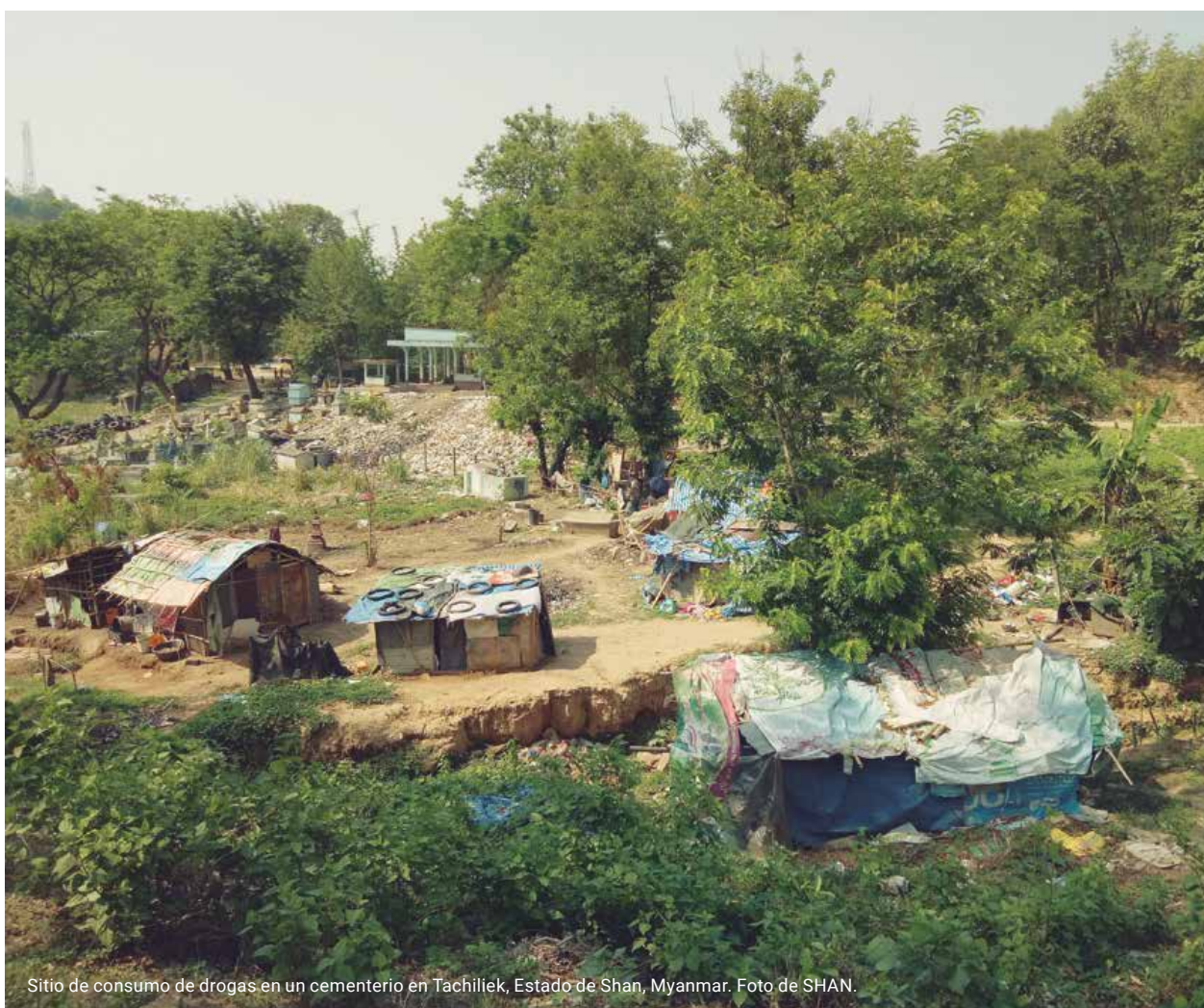
El consumo de drogas entre los jóvenes se atribuye con frecuencia a la inhabilidad de autocontrolarse, a no poder resistir a la tentación y a actuar de manera irresponsable. Estas narrativas tienen en común fuertes connotaciones religiosas, y son frecuentemente interiorizadas por aquellos que consumen drogas, culpando de su adicción a lo que creen son sus debilidades o a las debilidades que suponen haber heredado. Un hombre de Shan, en sus veinte años de edad, deja ver de cerca estas actitudes frente a las drogas.

Empecé a consumir “fórmula” en 2010. No era alguien exitoso en el trabajo, me encontraba desesperado y quería olvidarlo todo. El alcohol no pudo ayudarme. Entonces, un amigo me dijo “prueba esto”, y lo hice. Mis padres trajeron a un doctor para que me examinara. Él les informó que me había vuelto un drogadicto...

Entonces, traté de dejar de consumir encerrándome y amarrándome en mi cuarto. Muchas veces traté de parar, pero cada vez volvía a consumir “fórmula”. Quizá la odies, pero nunca la olvidas. [...] Actualmente trabajo con cableado eléctrico en interiores...

Cuando trabajo, solamente consumo una pequeña dosis. Mi empleador, al mirarme el semblante, sabe lo que soy y me paga menos de lo normal. No me gusta, pero no me puedo quejar. Sé que puedo parar, si tuviera la fuerza de voluntad. Leo mucha literatura religiosa. Aun así, no logro dejar de consumir. (Residente de Taunggyi, sur del estado de Shan, 2018).

Sin embargo, los testimonios de las personas también enfatizan la necesidad de entender el amplio rango de los factores sociales, políticos y económicos que han creado un ambiente en el cual las personas jóvenes son particularmente vulnerables a los daños de las drogas. Por ejemplo, los testimonios hacen hincapié en la manera en que los jóvenes consumen drogas —y alcohol— como mecanismo de supervivencia de cara a las presiones que tienen que enfrentar. Esto es particularmente cierto en una sociedad en la que las oportunidades no se ajustan a las aspiraciones y expectativas. Las reflexiones de un trabajador joven en Taunggyi educan en esta dimensión de la problemática.



Sitio de consumo de drogas en un cementerio en Tachileik, Estado de Shan, Myanmar. Foto de SHAN.

La mayoría de los jóvenes que se graduaron de la universidad no tienen oportunidades de trabajo. Vuelven a casa. En mi comunidad, si ya te graduaste, tus padres creen que puedes conseguir un trabajo con el gobierno o una compañía o una ONG. Si continúas tu educación en la universidad el costo es muy alto. Pero si vuelves a casa y no haces nada después de haberte graduado, la gente te presionará...

La gente dirá: "Ya te has graduado, ¿por qué no haces algo como los demás?". "¿Para qué les damos educación? ¿Para que después de graduarse trabajen igual que nosotros?". Es mucha presión para los jóvenes. Incluso si terminas la universidad, no tenemos ninguna habilidad útil para la vida. La educación no es muy buena. [...] Todo esto es una gran presión para los jóvenes. Así las cosas, algunos consumen drogas, otros también alcohol. (*Trabajador joven de Taunggyi, sur del estado de Shan, 2019*).

Esta visión también la refleja el siguiente testimonio de un pastor kachino de Monyin.

Los jóvenes no tienen oportunidades de trabajo. Tienen menos oportunidades de trabajo fuera de la Iglesia; incluso dentro de Iglesia tampoco se ofrecen muchas oportunidades de trabajo. Mire: en Monyin, solamente hay un banco. Y no hay gente de Kachín trabajando allí. Y no hay oportunidades de trabajo para los jóvenes de Kachín en el sector gubernamental...

Por tanto, muchos jóvenes de Kachín se metieron en las drogas. El consumo de drogas se volvió más grave aquí después de 2013, cuando, por un corto periodo, el público en general pudo acceder a la minería de jade, y Monyin se convirtió en una ciudad congestionada. Los jóvenes podían trabajar en el sector minero por cortos periodos y así muchos jóvenes se metieron en las drogas. (*Pastor de Kachín en Monyin, estado de Kachín, 2018*).

Los testimonios recolectados durante la investigación dejan ver que los jóvenes son doblemente vulnerables: por un lado, a los daños físicos y sociales que causan las drogas; por otro, a los daños causados por algunas de las respuestas a las drogas. Entre estas, las respuestas basadas en el castigo y el estigma asociado con el uso de las drogas; a menudo, ambas cosas impiden que las personas busquen ayuda.

Esto presenta un reto particular para las mujeres consumidoras de drogas, quienes siguen siendo una "población escondida". Esto es así, en razón de la falta de servicios para las mujeres y por el estigma que se les impone a ellas como consumidoras de drogas. Una mujer, en la primera mitad de sus treinta, entrevistada en Taunggyi, reflexionó sobre cómo el consumo de drogas ha impactado su vida.

Empecé a consumir "fórmula" cuando tenía 19 años de edad. Estaba en mi segundo año de universidad. Mi madre murió y mi padre se volvió a casar. Mi madrastra y yo no teníamos una edad tan diferente. Peleé con mi padre y me negaba a volver a casa, incluso para las fiestas. Entonces mi novio dijo: "Aquí tienes una cura para tu tristeza. ¡Tómalo!", y me lo tomé. Me enganché de inmediato. A él lo arrestaron hace un año y medio, y está en la cárcel...

De modo que tuve que empezar a comprar la droga yo misma. Contemplé dejar de tomarla. Pero, como mujer, me es difícil acceder a tratamiento en el hospital. Y no confío en el hospital. Uno de mis amigos fue a tratamiento y cuando volvió a casa lo arrestaron. Traté de parar de consumir por mi propia cuenta. Sufrí mucho y sentí que me iba a morir, que me iba a volver loca. La gente me evitaba, en especial después de que arrestaran a mi novio. Ocho meses después, visité a mi novio. Le habían dado 15 años como sentencia. Él lloró y yo lloré. Yo no le caía bien a su familia; me culparon por la mala situación de su hijo. (*Residente de Taunggyi, sur del estado de Shan, 2018*).

Reflexiones





En guardia tras incendiar un laboratorio de coca cerca de Tumaco, Colombia. Foto de AP Photo / William Fernando Martinez.

Este informe pretende contribuir al conocimiento de las economías de las drogas ilícitas, por medio de las perspectivas locales y cotidianas de las comunidades en territorios fronterizos en Afganistán, Colombia y Myanmar.

Si bien cada país y cada territorio fronterizo tiene una historia única y una experiencia de las economías de drogas ilícitas, de la violencia y del desarrollo, se sustrajeron, hasta donde fue posible, algunas de las diferencias y similitudes de los casos

estudiados. Los trabajos futuros buscarán desarrollar reflexiones y contenido más sistemáticos y comparativos.

Enseguida, se reflexionará sobre algunos de los mensajes claves que emergen del encuentro con los territorios fronterizos y con sus implicaciones en relación con las transiciones de guerra a la paz, las economías ilícitas y los procesos de desarrollo, y el papel de las drogas en la vida cotidiana de las comunidades fronterizas.

Transiciones de la guerra a la paz

Hay relaciones entre drogas, guerra, violencia y paz que son profundamente contextuales. Estas relaciones suelen manifestarse de manera muy distinta en los territorios fronterizos de como se manifiestan a nivel nacional. Pero un mensaje que viene de los territorios fronterizos es que la violencia crónica y letal es una realidad diaria y un gran obstáculo para el crecimiento humano. Para los formuladores de políticas, atacar estas diferentes formas de violencia debe ser una prioridad urgente. De lo contrario, les será muy difícil a las comunidades fronterizas escapar de su dependencia de economías ilícitas.

La violencia de la paz

Las voces de los territorios fronterizos plantean preguntas complejas acerca del tipo de paz que se ha negociado en los acuerdos y para quién es esta paz. Los acuerdos de paz y de cese el fuego pueden ser la respuesta a un tipo de violencia, pero pueden desatar otros tipos de violencias, en especial en los territorios fronterizos.

Una narrativa recurrente en estos sitios de investigación fue la manera en que los procesos de paz fracasaron en responder a las necesidades y aspiraciones de las

comunidades de los territorios fronterizos. Las realidades diarias de “paz” en estos territorios son con frecuencia la inseguridad crónica, la precariedad de los modos de vida y un Estado muchas veces distante y arbitrario, condiciones que empujan a las comunidades hacia una relación más cercana con las economías ilícitas.

Lejos de experimentar una transición tranquila de la “guerra” a la “paz”, en muchos lugares, luego de que se establecieron acuerdos de paz o de cese el fuego, la violencia y la inestabilidad se incrementaron, y las actividades ilícitas se expandieron.

Estas relaciones suelen manifestarse de manera muy distinta en los territorios fronterizos de como se manifiestan a nivel nacional.

Nuevas formas de violencia

Las comunidades de los territorios fronterizos dieron cuenta de, y experimentaron, una amplia gama de formas de violencia individual y colectiva.

Entre estas formas de violencia están: la violencia a gran escala y continua, la cual involucra a fuerzas del Gobierno y a rebeldes armados del norte de Myanmar y de la provincia de Nangarhar en Afganistán; la violencia asociada con las políticas e intervenciones antinarcóticos, que incluye la fumigación y la erradicación forzada de la hoja de coca en Colombia; los bombardeos de laboratorios de drogas en Afganistán y los esfuerzos de interdicción en la frontera de Nimruz, que hacen que las redes de contrabando se militaricen aún más; la “violencia lenta” asociada a las prácticas de explotación laboral y al consumo y abuso de drogas en los estados de Shan y Kachín, en Myanmar; o el uso o amenaza de coerción con miras a cerrar, controlar o administrar las fronteras.

En muchos casos, estas formas de violencia heterogéneas, aunque entremezcladas, ocurren simultáneamente, y crean así formas de inseguridad impredecibles que les hacen muy difícil a las comunidades de los territorios fronterizos planear e invertir en sus futuros. Al mismo tiempo, aquellos que viven en los territorios fronterizos son tanto “agentes” como “víctimas” de la violencia: toman las armas para defender o resistir al Estado, para asegurarse un modo de vida, para enriquecerse, para buscar venganza o proteger a su comunidad y familia.

¿Cuál es la violencia que importa?

Frecuentemente, las entrevistas revelan una dislocación entre las narrativas sobre la violencia en el ámbito nacional/internacional y en el ámbito de los territorios

fronterizos. Por ejemplo, la primera generalmente se enfoca en la violencia anti-estatal como la amenaza más importante y existencial; la segunda suele concentrarse en la violencia vinculada con las políticas antinarcóticos impuestas bien sea por las fuerzas estatales o paraestatales, o por la violencia lenta vinculada al consumo de drogas.

Aunque la violencia es una realidad cotidiana en los territorios fronterizos, y los eventos violentos son momentos definitorios y puntos de referencia en la vida de las personas, estas experiencias no se relacionan de una manera obvia con las narrativas del conflicto externas o del nivel nacional.

Aunque parezca sorprendente, algunos habitantes de los territorios fronterizos en el Putumayo o Nangarhar contaron que la vida era más segura durante los periodos de guerra, cuando las FARC-EP o los talibanes (respectivamente) tenían el control de los territorios fronterizos. Subsecuentemente, reflexionaron acerca de cómo sus vidas fueron volviéndose menos seguras porque ahora había más personas violentas y las reglas sociales eran mucho más inciertas. Este es un claro recordatorio de que algunas formas de violencia son más visibles que otras, y de que algunas formas de violencia se perciben como más importantes, según la persona o el objeto que amenacen.

Aunque parezca sorprendente, algunos habitantes de los territorios fronterizos en el Putumayo o Nangarhar contaron que la vida era más segura durante los periodos de guerra, cuando las FARC-EP o los talibanes (respectivamente) tenían el control de los territorios fronterizos.

La violencia se transforma

Los procesos de paz y las transiciones de posguerra pueden mutar o desplazar la violencia a zonas marginales del estado. La estabilidad a nivel nacional, la creciente integración económica y la presencia del Estado pueden traer consigo nuevas formas de violencia y explotación, y desmantelar algunos mecanismos de supervivencia establecidos durante la guerra.

Mientras tanto, las economías lícitas pueden seguir siendo igual de violentas que las actividades ilícitas. Por ejemplo, la minería de jade en el estado de Kachín y la industria petrolera del Putumayo se han asociado con altos niveles de violencia física y estructural.

Desarrollo de los territorios fronterizos

La relación entre drogas ilícitas y los procesos de desarrollo no es algo fijo ni exento de ambigüedades. Por el contrario, varía en diferentes puntos de la cadena de valor, como lo muestran las experiencias de los involucrados en la producción, comercio y consumo. También cambia con el tiempo, en la medida que las economías de las drogas, en sí mismas, cambian y mutan, alterando así la distribución de los costos y beneficios para las comunidades de los territorios fronterizos.

De manera que existe la necesidad de pensar más atentamente acerca de cómo mitigar los daños causados por las intervenciones externas y asegurar que estos daños no recaigan sobre los más vulnerables.

A pesar de las complejidades del nexo entre las drogas y el desarrollo, el hecho de que las drogas puedan contribuir a los procesos de desarrollo plantea preguntas claves para los actores del desarrollo, quienes ven la reducción de la pobreza y la disminución de la producción de drogas como políticas que se fortalecen mutuamente.

Los programas antinarcóticos pueden resultar, contraproducentemente, en pobreza inducida por la política pública. De manera que existe la necesidad de pensar más atentamente acerca de cómo mitigar los daños causados por las intervenciones externas y asegurar que estos daños no recaigan sobre los más vulnerables.

Las drogas impulsan el desarrollo

Aunque las drogas se presentan, tradicionalmente, como un problema para el desarrollo porque contribuyen al conflicto armado, las voces en este informe dibujan una imagen más compleja.

En los pueblos en auge de las fronteras de Afganistán y Myanmar, las drogas han provisto el capital inicial para invertir en otras empresas, las cuales, a su vez, fungen de imán para atraer inversión.

Se ha visto cómo, en Colombia, el cultivo de coca, su cosecha y procesamiento les han permitido a las poblaciones marginadas asegurar un modo de vida, enviar a sus hijos a la escuela o a la universidad, o



Puerto Asís, Colombia. Foto de Frances Thomson / Universidad Nacional de Colombia.

acceder a los servicios de salud. La economía de la coca también ha permitido que las comunidades inviertan en infraestructura básica, como carreteras o escuelas que el Estado no ha podido proveer. En los pueblos en auge de las fronteras de Afganistán y Myanmar, las drogas han provisto el capital inicial para invertir en otras empresas, las cuales, a su vez, fungen de imán para atraer inversión.

Por otro lado, las ganancias de las drogas pueden correr en dirección opuesta. Pueden ser un motor de crecimiento en el centro, pueden impulsar la bonanza del mercado de finca raíz en las ciudades capitales y, también, pueden lavarse e introducirse en el sector bancario o en negocios lícitos.

En lugar de ser una fuente de pobreza e inseguridad, las economías de las drogas a menudo pueden convertirse en importantes salvavidas y redes de seguridad para las poblaciones marginadas. En efecto, las drogas son en sí mismas desarrollo alternativo (AD).

El desarrollo impulsa la producción y el consumo de drogas

Esta es una relación de doble vía. Las economías de las drogas estimulan el desarrollo, como se mostró arriba. Pero también pueden ser una respuesta a los procesos de desarrollo. El desarrollo económico no siempre desmantela las economías de las drogas ilícitas; por ejemplo, puede generar formas de marginalidad que empujan a los grupos excluidos a la producción, tráfico o consumo de drogas.

Esto se reflejó en las voces del norte de Myanmar, donde el aumento de la movilidad y la conectividad, la expansión del comercio transfronterizo y la mejora de la seguridad permitieron que las redes de las drogas se extendieran a nuevas áreas.

El consumo de drogas puede funcionar como mecanismo para enfrentar el rápido cambio político, económico y social que el desarrollo trajo consigo. En las fronteras de Myanmar y China, las entradas masivas de capital han dado lugar a la aparición de ciudades fronterizas en auge. Estos inlfujos se han asociado con procesos de desposesión y desplazamiento, con la sustitución de la agricultura de subsistencia por la agroindustria a gran escala y con la aparición de nuevas formas de empleo.

Las nuevas formas de empleo son, con frecuencia, trabajos arduos como la minería y la tala de árboles en lugares remotos, donde las personas están lejos de sus familias. Estos procesos de desarrollo se han asociado con aumentos en el consumo de drogas.

Los impactos distributivos de las economías de las drogas

Esta compleja relación entre las drogas y el desarrollo advierte de no caer en narrativas simplistas de las drogas como algo "bueno" o "malo" para el desarrollo y la reducción de la pobreza. En lugar de este tipo de narrativas, el análisis debe centrarse en los impactos distributivos de las economías de las drogas, preguntándose: "¿Quién se beneficia y quién pierde?". Por supuesto, la respuesta a esta pregunta depende mucho del contexto y del tiempo específicos.

Las drogas y la vida cotidiana

Las economías de las drogas están profundamente arraigadas en la vida cotidiana de las personas en las regiones fronterizas. En lugar de ser víctimas indefensas, en muchos casos, las drogas les confieren agencia a los habitantes de las fronteras y se convierten en una importante red de seguridad social. Sin embargo, esto trae consigo serios dilemas, entre los cuales el aumento del riesgo y de la violencia son los más generalizados.

Para los encargados de formular políticas, esto implica aportar la perspectiva de los territorios fronterizos al pensamiento y a la práctica, y desarrollar así enfoques que sean más detallados y que se articulen con las instituciones locales y las estructuras sociales.

Esto también significa tomar en serio la agencia y la voz de las comunidades de los territorios fronterizos:

construir alianzas con grupos que representan actores marginales y apoyar procesos participativos. Como mínimo, los formuladores de políticas deben ser conscientes de las difíciles disyuntivas que enfrentan las personas y asegurarse de que sus políticas y programas no hagan que estas disyuntivas sean aún más difíciles o imposibles de manejar para estas comunidades.

La contextualización de las economías de las drogas

En los territorios fronterizos que se estudiaron, las mercancías y las sustancias lícitas e ilícitas se entremezclan. Así, las nociones locales de lo lícito y lo ilícito pueden diferir de las definiciones que tiene el Estado de estos conceptos. En Colombia, por ejemplo, los cocaleros insisten en llamarse a sí mismos campesinos. Esto refuta las percepciones de que

ellos son narcotraficantes. De hecho, muchos son campesinos que siembran distintos tipos de cultivos, entre los cuales las plantas de coca son solamente uno de muchos, aunque sean estas un poco más rentables.

Las economías de las drogas en estas regiones también tienen largas historias que involucran ciclos repetidos de guerra y paz, cambios en la distribución de los cultivos de droga, tráfico y consumo dentro de los territorios fronterizos. Asimismo, involucran innovaciones y cambios tecnológicos asociados a la producción de drogas y nuevas sustancias.

De manera similar, los comerciantes afganos contrabandean opio y heroína junto a cigarrillos, gasolina y otras mercancías a través de la frontera afgano-iraní.

Esta mezcla de productos lícitos e ilícitos no implica distinciones normativas o legales desde el punto de vista del comerciante. No se niega que la ilegalidad conlleva riesgos específicos (pero también trae oportunidades). Estos riesgos incluyen, por ejemplo, el potencial de violencia, la pérdida repentina de ingresos debido a la erradicación de cultivos para el agricultor, o el riesgo de encarcelamiento o la necesidad de pagar grandes sobornos por el contrabandista.

Las economías de las drogas en estas regiones también tienen largas historias que involucran ciclos repetidos de guerra y paz, cambios en la distribución de los cultivos de droga, tráfico y consumo dentro de los territorios fronterizos. Asimismo, involucran innovaciones y cambios tecnológicos asociados a la producción de drogas y nuevas sustancias.

Según los tiempos extendidos de conflicto armado y producción de drogas (en los tres países, se habla de por lo menos cuatro décadas), pueden verse cambios intergeneracionales significativos en las percepciones sobre las economías de las drogas, como también en la manera de relacionarse con estas.

Por ejemplo, en Colombia, las entrevistas revelaron que hay un aprendizaje intergeneracional en términos de patrones cambiantes de inversión de las ganancias de las economías de drogas. Los coccaleros actuales hablaron sobre cómo ya no se dedicaban al derroche visible, como lo había hecho la generación anterior, sino que invirtieron sus ingresos cuidadosamente en la educación, la atención médica y las necesidades domésticas de sus hijos.

En Myanmar, las generaciones mayores reflexionan sobre la importancia del cultivo de adormidera como estrategia de subsistencia. Asimismo, reflexionaron acerca del uso del opio como actividad social y recreativa. En contraste, las generaciones más jóvenes enfatizan la fuerza destructiva del aumento del consumo de drogas, la cual socava el capital humano y social de los territorios fronterizos.

Por tanto, comprender las economías de drogas de hoy requiere estar en sintonía con los diferentes significados que tienen y con las diferentes prácticas que existen, según las experiencias de las generaciones que sucesivamente han habitado en los territorios fronterizos.

Agencia y movilización social

Las comunidades involucradas en las economías de drogas son frecuentemente representadas como víctimas que han sido forzadas, por necesidad o por coacción directa, a participar en aquellas. Sin embargo, este trabajo de campo muestra que los agricultores, comerciantes y consumidores reivindican —y en muchos casos mejoran— su agencia a través de su participación en las economías de drogas.

En Colombia, las ganancias de la planta de coca han llevado a la construcción de bienes públicos e infraestructura comunitaria a través del trabajo compartido. En Afganistán, los comerciantes con sede en Nimruz, en la frontera con Irán, se organizaron para negociar alivios tributarios y acuerdos de seguridad con los talibanes, a fin de garantizar que las rutas comerciales permanecieran abiertas.

Otros tipos de movilización social han tomado la forma de resistencia frente las prohibiciones de drogas. Por ejemplo, las redes tribales en la provincia de Nangarhar, en Afganistán, se movilaron en repetidas ocasiones contra las prohibiciones contra las drogas internacionales, gubernamentales y de talibanes. Del mismo modo, los sindicatos coccaleros en la región norte de Colombia lideraron la resistencia colectiva contra las prohibiciones a la producción de drogas. Estas formas de resistencia de las comunidades marginales son emblemáticas de la agencia de las comunidades fronterizas que, a menudo, ven las economías de drogas como una forma de renegociar y desafiar su marginalidad.

De todas maneras, las comunidades locales, además de ejercer su agencia en la defensa de su derecho a cultivar drogas, también se movilaron contra el consumo de estas y contra el llamado “mal de la adicción”. Pat Jasan, la organización antidrogas más conocida de Myanmar, es un ejemplo de cómo la movilización popular contra las drogas puede entrelazarse con las ansiedades etnonacionalistas que ven en el Estado central una influencia “corruptora”⁶⁰.

Disyuntivas y ambigüedades

Las guerras contra las drogas y su operacionalización a través de políticas y programas antinarcoóticos intentan trazar “líneas de batalla” y distinciones cortantes entre lo legal y lo ilegal, entre lo estatal y lo no estatal, entre narcos y ciudadanos. Sin embargo, las voces en los territorios fronterizos revelan ambigüedades, límites borrosos y disyuntivas que rodean el involucramiento diario de las personas en las economías de las drogas ilícitas.

Hay muchas disyuntivas entre las narrativas oficiales externas y la experiencia diaria de vida de los habitantes de los territorios fronterizos. Lo que desde afuera se presenta como una guerra “contra las drogas”, para quienes la viven se ve como una guerra “contra las personas”. Las políticas de drogas y los marcos legales priorizan la confrontación y el castigo. Pero, al mismo tiempo, las economías de las drogas fungen de “red de seguridad”, puesto que sustituyen muchos de los roles en el desarrollo y la provisión de bienestar que los Estados no pueden o no quieren desempeñar en las regiones fronterizas.

El oprobio de las drogas como “malas” y el estigma contra quienes se involucran con ellas contrastan con la realidad de las drogas como el único mecanismo para lograr un (modesto) empoderamiento en ambientes donde los mercados legales dan pocos beneficios a personas marginadas.

A pesar de las numerosas funciones de bienestar y desarrollo que las economías de drogas ilícitas han desempeñado en las comunidades fronterizas, esto no significa que estas economías necesariamente proporcionen una ruta de escape o un antídoto contra las “patologías de las poblaciones marginales”.

Involucrarse con las economías de las drogas trae consigo grandes riesgos y dilemas. En particular, los pequeños agricultores y los comerciantes están atrapados en un pacto fáustico. El cultivo y el comercio de drogas pueden suavizar las crisis de subsistencia y proporcionar ingresos a corto plazo. Pero esto conlleva importantes riesgos ligados a la violencia, a la erradicación o a la prohibición. Aquellos involucrados carecen de los mecanismos legales para mediar en disputas, hacer reclamos al Estado o protegerse de comportamientos depredadores. En muchos aspectos, las economías de las drogas permiten que las comunidades fronterizas puedan sobrellevar y sobrevivir sus problemas, pero no dejan que estas transformen las estructuras que las mantienen en la marginalidad.

El oprobio de las drogas como “malas” y el estigma contra quienes se involucran con ellas contrastan con la realidad de las drogas como el único mecanismo para lograr un (modesto) empoderamiento en ambientes donde los mercados legales dan pocos beneficios a personas marginadas.

Al avanzar con este proyecto, un desafío clave será identificar y encontrar formas de abordar estas fuerzas que “impulsan a la marginalidad”, las cuales impiden el florecimiento de las comunidades fronterizas y las obligan a adoptar las economías de drogas ilícitas.

Implicaciones de política pública

Repensar el nexo drogas-desarrollo

- Las economías de las drogas no pueden abordarse como si fueran un problema de seguridad y delincuencia principalmente, deben tratarse como una cuestión de desarrollo a largo plazo.
- Las economías de las drogas ilícitas desafían las formas convencionales de pensar sobre el desarrollo y la fragilidad del Estado.
- No existe una relación estable y fija entre las drogas y el desarrollo. Esta es bidireccional, contextual y frecuentemente contraintuitiva. Las economías ilícitas pueden contribuir al desarrollo, y el desarrollo puede empujar a las personas hacia economías ilícitas.
- Los esfuerzos para combatir las drogas pueden debilitar el progreso hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Desarrollar políticas sensibles al tema de las drogas, con miras al manejo del conflicto y la construcción de paz

- Los ceses el fuego y los acuerdos de paz pueden exponer a las poblaciones fronterizas a nuevas y diferentes formas de violencia. Se necesita entender mejor estos ceses el fuego.
- Las ganancias por drogas pueden financiar la búsqueda de la “guerra” y la “paz”, el orden y el desorden.
- Las intervenciones antinarcoóticos pueden exacerbar e intensificar conflictos violentos. Este fenómeno suele empeorarse en las regiones fronterizas.
- Las transiciones sostenibles de la posguerra que abordan las economías ilícitas requieren que se dé prioridad a la reducción de la violencia y a la construcción de la paz en las regiones fronterizas.
- Para lograr transiciones sostenibles de posguerra en los territorios fronterizos afectados por las drogas, se requiere priorizar la reducción de la violencia y la consolidación de la paz.
- Para ser efectivos, los procesos de paz deben incorporar análisis de economías ilícitas y tomar medidas para abordarlos.

Reconocer y manejar las disyuntivas

- Ir más allá del *impasse* que hay entre las drogas, el desarrollo y la construcción de paz significa reconocer las tensiones que hay en la consecución de estos objetivos tan diferentes. Las disyuntivas son inevitables.
- Todas las políticas crean ganadores y perdedores. Es fundamental ser consciente de quiénes son los perdedores para garantizar que los más vulnerables no asuman los costos primarios de las políticas que se implementan.
- Las personas involucradas en economías ilícitas tienen que hacer concesiones diarias para sobrevivir. Se recomienda evitar políticas y programas que hagan que las disyuntivas sean imposibles de manejar.

Mitigar los daños

- Puede que no sea posible diseñar intervenciones que “no hagan daño”. Un enfoque más realista implica mitigar los daños y evitar la violencia y la pobreza inducidas por las políticas que se aplican.
- Centrarse menos en erradicar las economías de las drogas y más en mitigar los daños que sufren los más vulnerables.
- Mitigar los daños causados por las drogas, el desarrollo y los esfuerzos de estabilización en las regiones fronterizas por medio del monitoreo explícito de sus efectos sobre la seguridad, los modos de vida y la salud.

Incorporar las perspectivas de los territorios fronterizos

- Comprometerse activamente con las perspectivas fronterizas, para comprender y abordar mejor los factores que llevan a la participación en las economías ilícitas.
- Utilizar enfoques participativos y marcos de economía política con miras a desarrollar estrategias para promover los intereses de los grupos marginales y superar los silencios.
- Construir alianzas y asociaciones con grupos sociales y políticos que representen o estén compuestos por grupos marginales, incluidos los involucrados en economías ilícitas.
- Cuestionar y contrarrestar la estigmatización y los estereotipos que rodean a las comunidades de los territorios fronterizos involucrados en economías ilícitas.
- Integrar perspectivas y formas de trabajo regionales en el análisis y la programación.

Promover el desarrollo sensible a temas de drogas y conflicto en los territorios fronterizos

- Pensar y actuar con una perspectiva intergeneracional a largo plazo, y reconocer así la manera en que las economías de las drogas cambian con el tiempo y que tienen diversos efectos en personas de diferentes edades.
- Construir inclusión en todas las dimensiones de los programas fronterizos; enfrentar explícitamente los factores que conducen a la marginación, la exclusión y la estigmatización.

Notas

- 1 Buxton, J. (2015). *Drugs and development: The great disconnect* (Policy Report No. 2). Global Drug Policy Observatory. Swansea University; Christian Aid (2019). Peace, illicit drugs and the SDGs. Christian Aid; Gutiérrez, E. (2015). *Drugs and illicit practices: assessing their impact on development and governance*. Christian Aid Occasional Paper, disponible en: <https://www.christianaid.org.uk/sites/default/files/2017-08/drugs-illicit-practices-impact-development-governance-october-2015.pdf>
- 2 Buxton, J. (2015). *Drugs and development: The great disconnect* (Policy Report No. 2). Global Drug Policy Observatory, Swansea University.
- 3 UNODC (2019). *World Drug Report 2019: Executive summary, conclusions and policy implications*. United Nations Office on Drugs and Crime – pp. 8, 13, 32, 41.
- 4 Ver, por ejemplo: IDPC (2018). *Taking stock: A decade of drug policy*. A civil society shadow report. IDPC – International Drug Policy Consortium.
- 5 Ver, por ejemplo: IDPC (2018). *Taking stock: A decade of drug policy*. A civil society shadow report. IDPC - International Drug Policy Consortium; Buxton, J. (2015). *Drugs and development: The great disconnect* (Policy Report No. 2). Global Drug Policy Observatory; Swansea University; Christian Aid. (2019). Peace, illicit drugs and the SDGs. Christian Aid.
- 6 Ver, por ejemplo: Buxton J. (2015). *Drugs and development: The great disconnect* (Policy Report No. 2). Global Drug Policy Observatory; Swansea University; Bourgois, P. (2018). *Decolonising drug studies in an era of predatory accumulation*. *Third World Quarterly*, 39(2), 385-398; Ghiabi, M. (2018); *Spirit and being: interdisciplinary reflections on drugs across history and politics*. *Third World Quarterly*, 39(2), 207-217; Ghiabi, M. (2019). *Drugs Politics: Managing Disorder in the Islamic Republic of Iran*. Cambridge: University Press; McCoy, A. (2016). *Covert Netherworld: An Invisible Interstice in the Modern World System*. *Comparative Studies in Society and History*, 58(4), 847-879.
- 7 Ver Rolles, S., L. Sanchez, M. Powell, D. Kuschlick, and G. Murkin (2013). *Ending the War on Drugs: How to Win the Global Drug Policy Debate*; Jarrett Zigon (2018). *A War on People: Drug User Politics and a New Ethics of Community*. University of California Press, Alexander, Michelle. *The new Jim Crow: Mass incarceration in the age of colorblindness*. The New Press, 2020.
- 8 Para un recuento histórico de aproximaciones desarrollistas al control de drogas, ver informe de J. Buxton en 2015, *Drugs and development: the great disconnect*, citado arriba.
- 9 Buxton, J. (2015). *Drugs and development: The great disconnect* (Policy Report No. 2). Global Drug Policy Observatory, Swansea University, p.5.
- 10 Goodhand, J. (2008). *Corrupting or Consolidating the Peace? The Drugs Economy and Post-conflict Peacebuilding in Afghanistan*. *International Peacekeeping*, 15(3), 405–423; Meehan, P. (2011). *Drugs, insurgency and state-building in Burma: Why the drugs trade is central to Burma's changing political order*. *Journal of Southeast Asian Studies*, 42(3), 376–404.
- 11 Goodhand, J. (2008). *Corrupting or Consolidating the Peace? The Drugs Economy and Post-conflict Peacebuilding in Afghanistan*. *International Peacekeeping*, 15(3), 405–423; Meehan, P. (2011). *Drugs, insurgency and state-building in Burma: Why the drugs trade is central to Burma's changing political order*. *Journal of Southeast Asian Studies*, 42(3), 376–404; and Goodhand, J., Meehan, P., & Pérez-Niño, H. (2014). *Drugs, (dis)order and agrarian change: The political economy of drugs and its relevance to international drug policy*. NOREF: Norwegian Peacebuilding Resource Centre.
- 12 Mansfield, D. (2016). *A state built on sand: How opium undermined Afghanistan*. London: Hurst - pp. 33, 46, 70; Rodgers, D. (2018). *Drug Booms and Busts: Poverty and Prosperity in a Nicaraguan Narco-Barrio*. *Third World Quarterly*, 39(2), 261-276.
- 13 Goodhand, Meehan and Pérez-Niño (2014) *Drugs, (dis) order and agrarian change: The political economy of drugs and its relevance to international drug policy*. NOREF: Norwegian Peacebuilding Resource Centre; Mansfield (2016). *A state built on sand: How opium undermined Afghanistan*. London: Hurst - pp. 33, 46, 70; Meehan (2011). *Drugs, insurgency and state-building in Burma: Why the drugs trade is central to Burma's changing political order*. *Journal of Southeast Asian Studies*, 42(3), 376–404; Ballvé, T. (2020). *The Frontier Effect: State Formation and Violence in Colombia*. Cornell University Press.
- 14 DANE (n.d.). '¿Cuántos Somos?', Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, disponible en: <https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/censo-nacional-de-poblacion-y-vivenda-2018/cuantos-somos>
- 15 UNDP (2019). *Human Development Reports*. United Nations Development Program, disponible en: <http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/COL>
- 16 The World Bank (2019). *Data for Colombia, Upper Middle Income* | Data, disponible en: <https://data.worldbank.org/?locations=CO-XT>

- 17 Ver, por ejemplo, Serrano, M. (2018). Despite economic growth, Colombia continues to be one of the most unequal countries in the world. *Universidad Nacional Periódico Digital*, 13 February 2018, disponible en: <http://unperiodico.unal.edu.co/pages/detail/despite-economic-growth-colombia-continues-to-be-one-of-the-most-unequal-countries-in-the-world/>
- 18 DNP (2019). *Ficha TerriData, Puerto Asís*, Terridata – Departamento Nacional de Planeación, disponible en: <https://terridata.dnp.gov.co/index-app.html#/perfiles/86568>
- 19 Flórez, M. and León Moncayo, H. (2011). *Grandes Inversiones En Territorios Indígenas. Colombia: Dos Casos de Estudio*. ILSA- Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativos; Gobernación de Putumayo (2011). 'Cartilla Putumayo', disponible en: <http://www.putumayo.gov.co/images/documentos/cartillas/cartillav2/>
- 20 Vega Barbosa, C. (2017). *Mocoa No Tiene Siquiera Indicador de Pobreza*, *El Espectador*, 6 April 2017, disponible en: <https://www.elespectador.com/noticias/nacional/mocoa-no-tiene-siquiera-indicador-de-pobreza-articulo-688037>
- 21 CNMH (2012). *El Placer. Mujeres, Coca y Guerra En El Bajo Putumayo*. Bogotá: Centro Nacional de Memoria Histórica.
- 22 CNMH, (2012) *El Placer. Mujeres, Coca y Guerra En El Bajo Putumayo*. Bogotá: Centro Nacional de Memoria Histórica; Fundación Paz & Reconciliación (2014). Departamento de Putumayo. Tercera Monografía, disponible en: <https://pares.com.co/2014/06/04/departamento-de-putumayo/>
- 23 DNP (2019). *Ficha TerriData, Tumaco*, Terridata - Departamento Nacional de Planeación, disponible en: <https://terridata.dnp.gov.co/index-app.html#/perfiles/52835>
- 24 Restrepo, E. (1999). Hacia La Periodización de La Historia de Tumaco, in *Tumaco: Haciendo Ciudad. Historia, Identidad y Cultura*, ed. Michel Agier et al. Instituto Colombiano de Antropología; Institut de recherche pour le developpement (IRD); Universidad del Valle, pp. 54–86; Hoffmann, O. (2007). *Comunidades Negras En El Pacífico Colombiano: Innovaciones e Dinámicas Étnicas*. Quito: Abya-Yala; Institut de Recherche Pour le Développement (IRD); Instituto Francés de Estudios Andinos.
- 25 *ibid.*
- 26 Fundación Paz & Reconciliación (2014). *Departamento de Nariño. Tercera Monografía*, disponible en: <https://pares.com.co/wp-content/uploads/2018/06/INFORME-NARI%C3%91O-REDPRODEPAZ-Y-PAZ-Y-RECONCILIACI%C3%93N.pdf>
- 27 *ibid.*
- 28 DNP (2019). *Ficha TerriData, Santa Marta*, Terridata – Departamento Nacional de Planeación, disponible en: <https://terridata.dnp.gov.co/index-app.html#/perfiles/47001>
- 29 Worldmeters (n.d). *Afghanistan population (live)* available at: <https://www.worldometers.info/world-population/afghanistan-population/>
- 30 United Nations Development Programme (2019). *Human development reports, Afghanistan*, disponible en: <http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/AFG>
- 31 Asian Development Bank (2020). *Afghanistan and ADB. Afghanistan Poverty*, disponible en: <https://www.adb.org/countries/afghanistan/poverty>
- 32 IOM Survey (2018). *Displacement Survey Shows 3.5 Million Internally Displaced, Returnees from Abroad in 15 Afghan Provinces*. International Organization for Migration, disponible en: <https://reliefweb.int/report/afghanistan/displacement-survey-shows-35-million-internally-displaced-returnees-abroad-15>
- 33 UNODC (2003). *The Opium Economy in Afghanistan: An International Problem*. United Nations Office on Drugs and Crime, disponible en: https://www.unodc.org/pdf/publications/afg_opium_economy_www.pdf
- 34 UNODC (2018). *Last year's record opium production in Afghanistan threatens sustainable development, latest survey reveals*. United Nations Office on Drugs and Crime, disponible en: <https://www.unodc.org/unodc/en/frontpage/2018/May/last-years-record-opium-production-in-afghanistan-threatens-sustainable-development--latest-survey-reveals.html>
- 35 *ibid.*
- 36 UNODC (2018). *Afghanistan opium survey 2018: Challenges to sustainable development, peace and security*, page 3, United Nations Office on Drugs and Crime, disponible en: https://www.unodc.org/documents/crop--monitoring/Afghanistan/Afghanistan_opium_survey_2018_socioeconomic_report.pdf
- 37 OCHA (2015). *AFGHANISTAN: Population Estimate for 2015*, Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, disponible en: <https://www.refworld.org/pdfid/55eedf694.pdf>
- 38 CSIS (2018). *Transnational Threats Programme, Terrorism Backgrounders, Islamic State Khorasan (IS-K)*. Center for Strategic and International Studies, disponible en: <https://www.csis.org/programs/transnational-threats-project/terrorism-backgrounders/islamic-state-khorasan-k>
- 39 OCHA (2015). *AFGHANISTAN: Population Estimate for 2015*. Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, disponible en: <https://www.refworld.org/pdfid/55eedf694.pdf>

- 40 EASO (2019). *Afghanistan Security situation, Country of Information report*. European Asylum Support Office. June 2019, disponible en: <https://easo.europa.eu/sites/default/files/publications/Afghanistan-security-situation-2019-web.pdf>
- 41 *ibid.*
- 42 SIGAR (2018). *Counternarcotics, Report to the United Nations Congress*. Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction, 30 July 2018, disponible en: <https://www.sigar.mil/pdf/quarterlyreports/2018-07-30qr-section3-counternarcotics.pdf> (Nota: como se reporta por UNODC)
- 43 Además de los datos en bruto generados con el trabajo de campo, los mensajes principales de Afganistán se derivan de aprendizajes obtenidos de documentos de trabajo de Drugs &(dis)order sin publicar: Mansfield, David (2020). *Mules, Pick-ups and Container Traffic: Cross Border Production and Trade and the shaping of the Political Economy of Nangarhar*; Mansfield, David (2020). *Catapults, Pickups and Tankers: Cross Border Production and Trade and How it Shapes the Political Economy of the Borderland of Nimroz*; Soderholm, Alex (2020). *Narratives of Drug Supply in Iran: Exploring Meaningful and Goal-Oriented Behaviours*.
- 44 World Bank (2019). *Myanmar Country Profile*, obtenido de <https://data.worldbank.org/country/myanmar>. Esta cifra proviene del censo poblacional de 2014. Nótese que los enumeradores no accedieron a áreas afectadas por el conflicto en los estados de Rakhine, Kayin y Kachín y que los estimativos para estas áreas se basan en datos precensales.
- 45 World Bank (2018). *The 2014 Myanmar Population and Housing Census: Multidimensional Welfare in Myanmar* (Yangon: World Bank).
- 46 El régimen militar cambió el nombre del país de Birmania a Myanmar en 1989, con miras a remover lo que percibían que era el último vestigio de colonialismo británico. El régimen también cambió muchos nombres de localidades.
- 47 Bamar es un apelativo étnico para personas que suelen autollamarse birmanas. Sin embargo, birmano/myanmariiano también es el gentilicio nacional que incorpora comunidades que no son estrictamente "bamar". Nota aclaratoria: las comunidades de Shan y Kachín, con quienes se trabajó para este proyecto, pueden identificarse como birmanos, pero no se llamarían bamar.
- 48 Matthew Walton (2008). *Ethnicity, Conflict, and History in Burma: The Myths of Panglong*, *Asian Survey* Vol. 48 No.6.
- 49 Para un resumen del conflicto armado en el estado de Shan, ver: Bertil Lintner (1999). *Burma in Revolt: Opium and Insurgency since 1948* (Chiang Mai: Silkworm Books); Martin Smith (1999). *Burma: Insurgency and the Politics of Ethnicity* (London: Zed Books); Chao Tzang Yawngnwe (1987). *The Shan of Burma: Memoirs of a Shan Exile* (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies).
- 50 Shan Human Rights Foundation (1998). *Dispossessed: Forced Relocation and Extrajudicial Killings in Shan State* (Chiang Mai: SHRF); Gary Risser, Oum Kher and Sein Htun (2003). *Running the Gauntlet: The Impact of Internal Displacement in Southern Shan State* (Bangkok: Institute of Asian Studies).
- 51 John Buchanan (2016). *Militias in Myanmar*. Yangon: The Asia Foundation; Patrick Meehan (2011). *Fortifying or fragmenting the state? The political economy of the drug trade in Shan State, Myanmar, 1988-2012*, *Critical Asian Studies*, 47(2), 253–282.
- 52 Entre 1980 y 2015, las exportaciones chinas a Myanmar vía Yunan incrementaron de US\$129 a US\$16,2 billones; las importaciones incrementaron de US\$14 millones a US\$7,9 billones; ver: Shahar Hameiri, Lee Jones and Yizheng Zou (2019). *The Development-Insecurity Nexus in China's Near-Abroad: Rethinking Cross-Border Economic Integration in an Era of State Transformation*, *Journal of Contemporary Asia*, 49:3, p.485. Xiangming Chen (2015). *China's Key Cities: From Local Places to Global Players*, *The World Financial Review*, pp.491-2.
- 53 Ta'ang Students and Youth Organization (2012), *Pipeline Nightmare: Shwe Gas fuels civil war and human rights abuses in Ta'ang community in northern Burma* (Mae Sot: TSYO).
- 54 Giulia Zoccatelli (2014). *It was fun, it was dangerous: Heroin, young urbanities and opening reforms in China's borderlands*, *International Journal of Drug Policy* 25: 762–768; Ko Lin Chin and Sheldon Zhang (2015). *The Chinese Heroin Trade: Cross-Border Drug Trafficking in Southeast Asia and Beyond* (New York: NYU Press); Shao-hua Lia (2011). *Passage to manhood: Youth migration, heroin, and AIDS in Southwest China* (Stanford: Stanford University Press).
- 55 Inicialmente, la metanfetamina era conocida coloquialmente como "yama" o medicina de caballos, debido a que se pensaba que le daba la energía y capacidad a la gente para trabajar como caballos. Incluso algunas pastillas estaban gravadas con la cabeza de un caballo. La droga fue renombrada "yaba" o medicamento "crazy" por las autoridades de Tailandia en 1996, como una parte de la campaña en contra de su consumo.

- 56 Global Witness (2015). *Jade: Myanmar's big state secret* (London: Global Witness); Images Asia & Pan Kachin Development Society (2004). *At What Price? Gold Mining in Kachin state, Burma* (Chiang Mai: Nopburee Press); Humanity Institute (2019), *Chinese Agribusiness Investment in Kachin State: Opportunity or Obscenity* (Myitkyina: Humanity Institute).
- 57 Mandy Sadan (ed.) (2016). *War and Peace in the Borderlands of Myanmar: The Kachin Ceasefire, 1994-2011*. (Copenhagen: NIAS).
- 58 Myanmar Central Statistical Organization, UNDP and World Bank Group (2019). *Myanmar Living Conditions Survey 2017*. Este reporte estima que el 36,6 % de la población del estado de Kachin y el 28,6 % de la población del estado de Shan viven por debajo de la línea de pobreza.
- 59 La noción de juventud se conecta con la categoría social de personas solteras, lo cual puede, por definición, extenderse en ocasiones más allá de la adolescencia. Una demografía más expansiva se cita, a menudo, como más vulnerable al consumo de drogas —aquellos (típicamente hombres) entre 16 y 40 años de edad—, aunque muchas de las entrevistas que se hicieron en esta investigación (y presentadas aquí) se centraron en los desafíos particulares que enfrentan los jóvenes adolescentes y adultos en su tercera década de vida.
- 60 Dan Seng Lawn & Ja Htoi Pan Maran. (2016). *Pat Jasan: Genesis, impact and challenges*. Myitkyina: Kachinland Research Centre.



© Drugs & (dis)order 2020

Las opiniones presentadas en este documento pertenecen a los autores y no representan necesariamente las opiniones de GCRF, el gobierno del Reino Unido o las organizaciones asociadas.

 [@drugs_disorder](https://twitter.com/drugs_disorder)

drugs-and-disorder.org

drugs
&
(dis)order 